

WEATHERING RISK

**ANÁLISIS DE
POLÍTICA PÚBLICA**

Construcción de Paz Ambiental en Colombia

Sinergias entre las políticas
de medio ambiente, clima,
paz y seguridad

Septiembre 2025

AUTORES

Héctor Morales Muñoz (adelphi research)
Nina Schmelzer (adelphi)
Alina Viehoff (adelphi)
Benjamin Pohl (adelphi)
Juanita Velez (Fundación Conflict Responses – CORE)

IMAGEN DE PORTADA

Inga Israel

INFOGRAFÍAS

Héctor Morales Muñoz, Alexandra Steinkraus
y Nina Schmelzer (adelphi research)

DISEÑO

Nina Schmelzer, Sebastian Huber
y Charlotte Kleine (adelphi research)

PUBLICADO POR

adelphi research gemeinnützige GmbH
Alt-Moabit 91, 10559 Berlin, Germany
+49 (0) 8900068-0
office@adelphi-research.de
www.adelphi-research.de/en

CONTACTO

Héctor Morales Muñoz
morales-munoz@adelphi.de

FECHA

Septiembre 2025

LICENCIA

Para los textos de esta publicación, los editores conceden una licencia bajo los términos de Creative Commons Attribution No Derivatives 4.1 International. Se permite reproducir y compartir el material con licencia siempre que se mencione a adelphi de la siguiente manera: «© adelphi CCBY ND 4.0». Las fotografías y los gráficos no están cubiertos por esta licencia.

Contenido

Lista de acrónimos	1
Resumen ejecutivo	3
Introducción.....	4
Objetivos y alcance de este informe.....	5
Enfoque metodológico	5
Antecedentes: El caso colombiano	6
Colombia es altamente vulnerable al cambio climático	7
Principales riesgos climáticos.....	7
Aumento de las temperaturas e inundaciones.....	7
Fenómenos de El Niño y La Niña más extremos provocados por el cambio climático.....	8
Variabilidad de las precipitaciones y escasez de agua.....	8
Medios de subsistencia e inadaptación.....	10
Riesgos medioambientales y climáticos para la seguridad.....	10
Análisis de política pública: La interacción de las políticas de paz, medio ambiente y clima y seguridad a escala nacional	13
¿Por qué es apropiado para Colombia un enfoque de Construcción de Paz Ambiental a nivel nacional?.....	14
Paz Ambiental y resiliencia climática.....	14
Paz Ambiental y gobernanza nacional.....	15
Respuestas nacionales a la paz, los conflictos y la dinámica medioambiental	18
Tres concepciones diferentes de construcción de paz: “Paz Territorial”, “Paz con Legalidad” y “Paz Total”, y sus implicaciones medioambientales.	18
1) El enfoque de “Paz Territorial” y las consideraciones medioambientales dentro del Acuerdo de Paz de 2016	19
2) La “Paz con Legalidad”: Las dificultades de construir la paz con “mano dura”	23
3) La “Paz Total” de Gustavo Petro	27
Buenas prácticas locales en materia de medio ambiente, clima y construcción de paz	33
Restauración forestal de árboles autóctonos en la Amazonia colombiana por excombatientes	34
Forestería comunitaria	37
Diálogo local y alternativas de subsistencia para mejorar la gobernanza de las áreas protegidas	37
Medidas colectivas de protección	38
Agroforestería de cacao por la paz.....	39
Soluciones basadas en la naturaleza (NBS) en una economía verde.....	40
Conservación de la biodiversidad y conocimientos indígenas	40
Ecoturismo para la paz	41
Recomendaciones para la Política Pública de Paz Ambiental (PPA) en Colombia.....	42

Recomendaciones para el Estado Colombiano	43
1) Establecer una Política Pública de Paz Ambiental (PPA) más ambiciosa	43
2) Mejorar la integración y coordinación de la Política Pública de Paz Ambiental (PPA)	45
3) Fomentar la Política Pública de Paz Ambiental (PPA) con una aplicación descentralizada	46
Recomendaciones para la comunidad internacional	47
Recomendaciones para la UE	47
1) Apoyar el cumplimiento de los diálogos de paz	47
2) Reforzar los acuerdos económicos (bajos en carbono)	47
3) Impulso a unas normas comerciales mundiales más justas	48
4) Apoyar una agricultura resistente al clima	48
Recomendaciones para la cooperación internacional, las ONG y las organizaciones de la sociedad civil	49
1) Promover la conservación y la gobernanza medioambiental en favor de la paz	49
2) Apoyar la participación local en la tenencia y el uso de la tierra	49
3) Coordinación entre agencias	49
Conclusión	49
Referencias	51

Lista de acrónimos

AGC	Autodefensas Gaitanistas de Colombia
AP	Área protegida
AUC	Autodefensas Unidas de Colombia
CDN	Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional
CONPES	Consejo Nacional de Política Económica y Social
CPI	Corte Penal Internacional
ELN	Ejército de Liberación Nacional
EMBF	Estado Mayor de Bloques y Frente
EMC	Estado Mayor Central de las FARC
FARC	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FCDS	Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible
GEF	Fondo Mundial para el Medio Ambiente (Global Environmental Facility)
GEI	Gases de Efecto Invernadero
IDEAM	Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
INVIAS	Instituto Nacional de Vías
IPCC	Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (Intergovernmental Panel on Climate Change)
JEP	Jurisdicción Especial para la Paz
MADR	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
MADS	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
NBS	Soluciones basadas en la naturaleza (Nature-based Solutions)
NICFI	Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega (Norway's International Climate and Forest Initiative)
OCHA	Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios

Construcción de Paz Ambiental en Colombia

OEI del GEF	Oficina de Evaluación Independiente del GEF
ONG	Organización No Gubernamental
ONU	Organización de las Naciones Unidas
ONUDD	Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
PDET	Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial
PND	Política Nacional de Desarrollo
PNIS	Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos
PNN	Parque Nacional Natural
PPA	Política Pública de Paz Ambiental
PSE	Pagos por Servicios Ecosistémicos
RMIB-LAC	Red de Mujeres Indígenas sobre la Biodiversidad de América Latina y el Caribe
UAIIN	Universidad Autónoma Indígena Intercultural
UAPSS	Unidades Ambientales para la Paz y los Servicios Sociales
UE	Unión Europea

Resumen ejecutivo

La búsqueda de la paz y la sostenibilidad en Colombia ha sido un camino complejo, con décadas de conflicto armado profundamente entrelazadas con los retos medioambientales. Este informe explora la intrincada relación entre la degradación medioambiental, el cambio climático y los esfuerzos de las políticas de paz. Examina cómo pueden abordarse estos elementos mediante un enfoque de construcción de paz ambiental hacia un futuro más pacífico y sostenible.

Al analizar las políticas públicas de construcción de paz de los Gobiernos de Santos, Duque y Petro, el informe revela una evolución: de la lucha contra los retos de la implementación de un acuerdo de paz recién firmado a un enfoque conservador descargando demasiadas responsabilidades en lo militar y, más recientemente, a un creciente reconocimiento del papel fundamental del medio ambiente en la consolidación de la paz. Cada gobierno se ha enfrentado a problemas interrelacionados: deforestación, economías ilícitas como el cultivo de coca y la minería ilegal, vulnerabilidades climáticas y la urgente necesidad de fomentar los servicios estatales y medios de vida sostenibles para las comunidades más afectadas por el conflicto.

A pesar de los avances, persisten graves problemas. La aplicación descoordinada de las políticas públicas, la escasa presencia del Estado en las regiones afectadas por conflictos y la omnipresente influencia de las economías ilícitas siguen amenazando vidas y desestabilizando las comunidades rurales. Sin embargo, en medio de estas dificultades, hay motivos para el optimismo. El informe destaca las políticas públicas existentes que sientan las bases para un enfoque integrado de paz ambiental y presenta iniciativas comunitarias que ofrecen valiosas lecciones para avanzar hacia la paz y la sostenibilidad en Colombia.

Nuestro análisis subraya la urgente necesidad de una política nacional integral de construcción de paz ambiental que aprenda de las experiencias pasadas, amplíe las iniciativas locales de éxito y capacite a las comunidades como agentes del cambio. Dicha política debería centrarse en:

- **Coordinación civil-militar para la protección del medio ambiente y la resiliencia climática:** esta política debe promover una presencia estatal sólida y coordinada más allá de la (necesaria) presencia militar, abordando las causas fundamentales y la dinámica político-económica en las zonas de conflicto. Al restaurar los ecosistemas y reparar las relaciones entre las comunidades, y al reducir las presiones de adaptación inadecuada que empujan a las comunidades marginadas hacia las economías ilícitas, el Estado puede mejorar su legitimidad, fomentando la cohesión social esencial para el desarrollo económico y la prosperidad, al tiempo que protege el medio ambiente.
- **Integrar la acción climática, la construcción de paz y la financiación del desarrollo:** Las poblaciones vulnerables son las más afectadas por los impactos del cambio climático y la violencia, creando un círculo vicioso que dificulta la resiliencia. Un enfoque medioambiental de construcción de paz ofrece la oportunidad de aplicar un triple nexo que combine la ayuda humanitaria, el desarrollo y la paz. El gobierno debería dar prioridad a las inversiones destinadas a la compensación de las víctimas, la restitución de tierras y los programas de retorno y reasentamiento. La inversión en subvenciones a largo plazo e iniciativas estratégicas puede abordar necesidades económicas inmediatas, ofrecer reparaciones, integrar a antiguos combatientes y conservar ecosistemas críticos. Se ha demostrado que proyectos como la agroforestería, la reducción de impuestos por obras públicas en zonas rurales, las energías renovables autónomas, el ecoturismo y la micro-financiación adaptada a los empresarios locales tienen un buen potencial.
- **Mejorar la coordinación y la gobernanza inclusiva:** La falta de alineación entre las agendas de construcción de paz, agraria, climática y de conservación ha impedido avances y exacerbado algunos conflictos sociales. Es imperativo coordinar políticas públicas sectoriales entre los organismos gubernamentales y fomentar un diálogo que reúna diversas perspectivas sobre las economías

conflictivas territorializadas de Colombia. Además, la aplicación de políticas que incluyan la perspectiva de género reconoce el papel diferenciado de las mujeres y poblaciones diversas en la protección del medio ambiente y como constructoras de paz, y garantiza su participación equitativa.

- **Promover procesos descentralizados de construcción de la paz:** Reforzar las estructuras de gobernanza local y garantizar una toma de decisiones integradora es vital. Una *Política Pública de Paz Ambiental* (PPA) puede sentar las bases para llevar a cabo negociaciones de paz con grupos armados utilizando la gestión de recursos naturales críticos como punto de entrada y ofreciendo oportunidades de reintegración en economías locales ecológicas. Sin embargo, una política nacional no debe implicar un enfoque centralizado. La capacitación de las autoridades locales y la integración de los sistemas de conocimiento autóctonos en las iniciativas de conservación de la biodiversidad y silvicultura comunitaria pueden fomentar la aceptación y la confianza. La descentralización de la aplicación de la PPA con medios y destinaciones específicas de presupuesto capacita a los gobiernos locales para coordinar los esfuerzos desde la base, aprovechando los conocimientos locales y contando al mismo tiempo con el apoyo de las instituciones nacionales.
- **Colaboración con la comunidad internacional:** La comunidad internacional, incluida la Unión Europea (UE), puede apoyar una PPA de Colombia integrando los fondos para el clima y la construcción de paz y orientando la financiación del clima hacia marcos basados en subvenciones que funcionen eficazmente en condiciones difíciles. Apoyar alternativas económicas sostenibles arraigadas en las empresas agroalimentarias, impulsar normas comerciales mundiales más estrictas y promover políticas de contratación justas puede incentivar las prácticas sostenibles, beneficiando a los pequeños agricultores y a las comunidades locales.

Una Política Pública de Paz Ambiental eficaz ayudará a Colombia a aplicar prácticas coherentes en todos los sectores, preparando el terreno para unas negociaciones de paz que tengan en cuenta el clima y el medio ambiente para fomentar el desarrollo rural. Colombia se encuentra en una coyuntura crucial en la que grandes retos pueden crear oportunidades sin precedentes. Esta coyuntura permite a Colombia redefinir su futuro y servir de modelo para otras naciones, demostrando que la paz y la gestión medioambiental pueden ir de la mano. Apoyar la construcción de la paz ambiental ofrece la esperanza de sanar las divisiones del pasado y construir un futuro sostenible y equitativo para todos los colombianos.

Introducción

La *Construcción de Paz Ambiental* es un enfoque multidisciplinar que aborda las intrincadas conexiones entre la sostenibilidad medioambiental, la seguridad humana y la resolución de conflictos. Reconoce que la destrucción ecológica, la pérdida de biodiversidad y la desigualdad social, agravadas por la crisis climática, pueden exacerbar considerablemente las tensiones y desencadenar nuevos conflictos por recursos escasos como el agua, la tierra cultivable y la energía. Este campo es especialmente interesante porque ofrece soluciones innovadoras a algunos de los problemas mundiales más acuciantes. Al centrarse en el nexo entre la gobernanza ambiental, la equidad social y los esfuerzos por la paz, la construcción de paz ambiental pretende fomentar la cooperación entre comunidades y naciones, mitigar los riesgos de conflicto y promover la sostenibilidad y la estabilidad a largo plazo.

Definida como “los múltiples enfoques y vías por los que la gestión de las cuestiones medioambientales se integra y puede apoyar en la prevención, mitigación y resolución de conflictos, así como también en la recuperación de estos” (Ide et al. 2021), históricamente, el enfoque de la construcción de paz ambiental ha recogido las lecciones aprendidas de diferentes iniciativas medioambientales, climáticas y agrícolas que contribuyen a la paz, centrándose principalmente en su éxito a la hora de resolver conflictos comunitarios.

Algunos casos, como los parques de paz transfronterizos y la diplomacia del agua, han mostrado evidencia en la eficacia para transformar conflictos entre Estados. La aplicación del marco de construcción de paz ambiental a políticas públicas nacionales para promover sistemáticamente la estabilidad en conflictos armados internos ha sido hasta ahora limitada.

Este análisis de política pública se basa en el caso colombiano como ejemplo clave de cómo la conservación de los ecosistemas y los retos de la acción climática se entrelazan en sus causas y soluciones con la construcción de paz. En Colombia, al igual que en muchas naciones afectadas por el conflicto, existen problemas generalizados de desigualdad distributiva y estructuras de producción que comprometen la integridad ecológica, lo que conduce a una continua degradación medioambiental, a una mayor vulnerabilidad climática, a desplazamientos forzados y a violencia contra las poblaciones marginadas. Para abordar eficazmente estos retos, este informe pretende responder a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la mejor estrategia para que Colombia afronte el doble reto de construir y mantener la paz, mientras fortalece su resiliencia ante los impactos climáticos y preserva sus ecosistemas naturales?

Objetivos y alcance de este informe

Este informe está estructurado en dos partes. La primera analiza cómo los tres últimos gobiernos colombianos han integrado las consideraciones medioambientales y climáticas en las políticas públicas de paz. Revisa los aspectos medioambientales del Acuerdo de Paz, destacando los éxitos y los vacíos en su aplicación. Además, examina cómo la evolución del conflicto en los últimos ocho años ha influido en los objetivos y las políticas medioambientales para evitar la deforestación y la degradación ecosistémica en medio de una creciente inseguridad. A continuación, se revisa la evidencia recogida de las prácticas comunitarias de paz ambiental, ilustrando sus beneficios potenciales.

La segunda parte se centra en cómo ampliar estos esfuerzos a escala nacional para abordar los conflictos socioambientales y mejorar la coordinación entre las políticas de seguridad, construcción de la paz, medio ambiente y desarrollo con bajas emisiones de carbono. Concluye con recomendaciones para implementar una Política Pública de Paz Ambiental (PPA) que permita fortalecer la resiliencia de Colombia y lograr una paz sostenible.

Enfoque metodológico

Este informe se basa en un proyecto de investigación doctoral realizado en los últimos cinco años. Emplea una metodología de investigación cualitativa que utiliza cuatro métodos para garantizar la exhaustividad de los resultados. En primer lugar, se realizó una revisión bibliográfica sistemática (n=73). La revisión bibliográfica exploró las dinámicas socioambientales del conflicto colombiano, centrándose en las políticas de construcción de paz, medioambientales, climáticas y de seguridad. Revisamos la literatura relevante y realizamos entrevistas para evaluar el impacto de las políticas, identificar vacíos y evaluar la alineación entre los sectores ambiental y agrícola. Las observaciones sobre el terreno y los debates se centraron en comprender los factores que impulsan la deforestación y promover la cooperación comunitaria en las regiones afectadas. Por último, se organizaron talleres virtuales para comprender los factores de conflicto y desarrollar

actividades de construcción de paz medioambiental.¹ Los datos se analizaron mediante análisis de contenido cualitativo.

Antecedentes: El caso colombiano

Colombia es un país que ejemplifica los retos superpuestos de proteger un rico entorno natural de importancia mundial durante un prolongado conflicto armado. El país alberga una vasta zona forestal, que cubre el 52% de su superficie, el 14% de la cual está designada como bosque primario, el tipo de bosque más biodiverso y rico en carbono. También cuenta con el 50% de los ecosistemas de *páramo* del mundo.² El país es reconocido como la segunda nación más biodiversa del planeta, con más de 51.330 especies registradas (MADS 2019). Los diversos ecosistemas que se encuentran en Colombia proporcionan una serie de servicios ecosistémicos que son esenciales para el crecimiento de la economía del país y el bienestar de sus comunidades. Sin embargo, actividades antropogénicas como la deforestación, la contaminación de fuentes hídricas, la sobreexplotación de recursos, los cultivos ilícitos y los efectos del cambio climático están ejerciendo una inmensa presión sobre estos ecosistemas (IPCC 2023). Como consecuencia, disminuyen los beneficios generados por el ecosistema y se deteriora la calidad de vida de la población.

Al mismo tiempo, Colombia se ha visto afectada por más de 60 años de conflicto armado, que han causado más de 9 millones de víctimas. La densa selva del país ha sido un activo estratégico para los grupos armados ilegales implicados en el conflicto (FIP et al. 2021). Además, Colombia tiene un alto índice de desplazamiento forzado, con 6,9 millones de desplazados internos, y también acoge a casi 3 millones de solicitantes de asilo desplazados de Venezuela (ACNUR 2025).

Muchos expertos coinciden en que el histórico Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) presentó una oportunidad crucial para abordar una serie de cuestiones importantes. Por ejemplo, pretendía detener la expansión de tierras agrícolas en la selva amazónica, contribuir al desarrollo rural y eliminar el cultivo de coca en parques naturales (Valenzuela y Caicedo 2018; Baptiste et al. 2017). Además, pretendía abordar las causas subyacentes del conflicto, como la marginación social y política, el acceso desigual a la tierra y el subdesarrollo de las zonas periféricas (Morales Muñoz et al. 2021).

Sin embargo, nueve años después del Acuerdo, el país se enfrenta a una compleja interacción de retos que incluyen la violencia persistente y recurrente, la degradación medioambiental, la vulnerabilidad climática y la falta de un desarrollo sostenible más amplio. La situación actual muestra que los grupos armados están aprovechando la ausencia de la antigua guerrilla para controlar la minería ilegal y el narcotráfico. Algunas facciones de las FARC que no estaban de acuerdo con el Acuerdo de Paz están absorbiendo a grupos más pequeños en regiones del sur. Asimismo, el Ejército de Liberación Nacional³ (ELN) sigue perpetrando

¹ Se realizaron 48 entrevistas semi-estructuradas con actores clave, incluyendo profesionales de ONG internacionales y nacionales, funcionarios del gobierno, miembros de asociaciones campesinas y empresas locales, excombatientes y expertos de la sociedad civil y ONG. Observación participativa durante dos salidas de campo de la investigación al campamento de reincorporación Miravalle en la Zona de Reserva Campesina Pato Balsillas en abril de 2021, cerca del Parque Natural Cordillera de los Picachos, San Vicente del Caguán. Dos talleres virtuales con 27 practicantes y académicos complementaron estas entrevistas.

² "Páramo" se refiere a un tipo específico de ecosistema de gran altitud que se encuentra principalmente en la cordillera de los Andes de Sudamérica. Sin embargo, a menudo se describe en inglés como "tropical alpine tundra" o "high-altitude Andean ecosystem". Colombia posee una cantidad significativa del páramo mundial, con aproximadamente el 50-60% de este ecosistema a nivel global. El páramo colombiano cubre unos 2,9 millones de hectáreas (aproximadamente 29.000 kilómetros cuadrados u 11.197 millas cuadradas). Esto convierte a Colombia en el país con la mayor extensión de páramo del mundo, que desempeña un papel crucial en la regulación del agua, la conservación de la biodiversidad y el almacenamiento de carbono. (Sevillano et al. 2020; Galvis y Ungar 2021)

³ El Ejército de Liberación Nacional (ELN) es un grupo guerrillero marxista-leninista de Colombia, fundado en 1964, que critica la desigualdad de ingresos entre las clases sociales y tiene una influencia radical de la teología de la liberación a través de la lucha armada. Conocido por su implicación en secuestros, extorsiones y ataques a infraestructuras petrolíferas, el ELN ha sido especialmente notorio

atentados contra la población civil y las fuerzas armadas en todo el país. Además, antiguos grupos paramilitares conocidos como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) han avanzado en el control militar y social de diferentes territorios de la Colombia rural (International Crisis Group 2024).

Tras años de ataques estatales y militares en respuesta a guerrillas y paramilitares, el conflicto en Colombia se ha desplazado hacia las zonas periféricas del país. Esto ha puesto en mayor riesgo a algunas de las personas más vulnerables del país, como las comunidades afrocolombianas e indígenas. Estas comunidades se encuentran principalmente a lo largo de la costa del Pacífico y la región amazónica, las zonas de mayor valor ecológico del país.

Desde 2016, la violencia se ha vuelto más localizada, los grupos armados se han multiplicado y la lógica del conflicto se ha fragmentado, como lo demuestra la violencia continua contra líderes ambientales y sociales y cómo ha sido denunciado por diferentes organizaciones. Según Global Witness (2020), Colombia ha sido el país con más asesinatos de activistas ambientales a nivel mundial durante dos años consecutivos (65 en 2020). Esto subraya los continuos riesgos asociados al activismo ambiental. Recientemente, entre enero y noviembre de 2023, la Defensoría del Pueblo ha registrado 163 asesinatos, lo que muestra un alarmante estado de inseguridad, especialmente en las zonas rurales del país. Por ejemplo, en Putumayo, parte de la subregión amazónica colombiana, se han producido al menos 21 masacres desde 2020, y la tasa de homicidios es de 80 por cada 100.000 habitantes. Allí, la violencia está vinculada a la competencia por el control territorial, los corredores del narcotráfico y la presencia de industrias extractivas. De manera similar, a principios de 2025, la región del Catatumbo sufrió un pico de violencia que dejó a miles de personas desplazadas y con necesidades humanitarias graves.

Colombia es altamente vulnerable al cambio climático

La vulnerabilidad nacional, definida como la relación entre la sensibilidad del territorio y el manejo de la capacidad adaptativa, muestra que el 15,5% del territorio nacional – que abarca 92 municipios– se encuentra dentro de las categorías de vulnerabilidad alta y muy alta. En particular, regiones como la Amazonia y gran parte de los municipios de la región Pacífica requieren especial atención (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCELLERÍA 2017).

Con aproximadamente el 85% de su población y del PIB expuestos a desastres naturales, Colombia experimentará frecuentes fenómenos meteorológicos extremos en todos los escenarios de emisiones, pero con una alta variabilidad regional (Banco Mundial 2021b). La elevada exposición de Colombia a los impactos del cambio climático, los altos niveles de desigualdad y el prolongado conflicto armado dificultan la capacidad de adaptación de la población a los impactos del cambio climático.

Principales riesgos climáticos

Aumento de las temperaturas e inundaciones

Los escenarios de cambio climático para 2040 indican que las principales zonas que experimentarán aumentos de temperatura serán las regiones del Caribe y del Pacífico. Igualmente, los valles interandinos

por su dificultad en las negociaciones, lo que ha tenido un impacto significativo en los esfuerzos de Colombia por lograr la paz y la estabilidad.

Construcción de Paz Ambiental en Colombia

pueden verse afectados por aumentos en la temperatura media anual. La región de la Orinoquía colombiana también se espera que experimente aumentos significativos de temperatura en comparación con los niveles actuales (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCELLEERÍA 2017).

En un escenario de altas emisiones, se prevé que la temperatura media en Colombia aumente hasta 3,88°C hasta finales de siglo (Banco Mundial 2021b) y que los glaciares pierdan entre un 3 y un 5% de cobertura al año. Por un lado, esto plantea inmensos riesgos de inundaciones en los Andes colombianos, donde vive el 75% de la población, debido al aumento de la escorrentía superficial por el deshielo de la nieve y las precipitaciones extremas (Banco Mundial 2021b). Por otro lado, también es probable que la región andina sufra escasez de agua a medida que desaparezcan glaciares críticos. En las zonas costeras de Colombia, el aumento del nivel del mar, la erosión, los terremotos y los ciclones pueden provocar inundaciones localizadas. Como referencia, incluso un aumento de sólo 1,5°C incrementaría entre un 100 y un 200% el número de personas afectadas por inundaciones en el país (IPCC 2021).

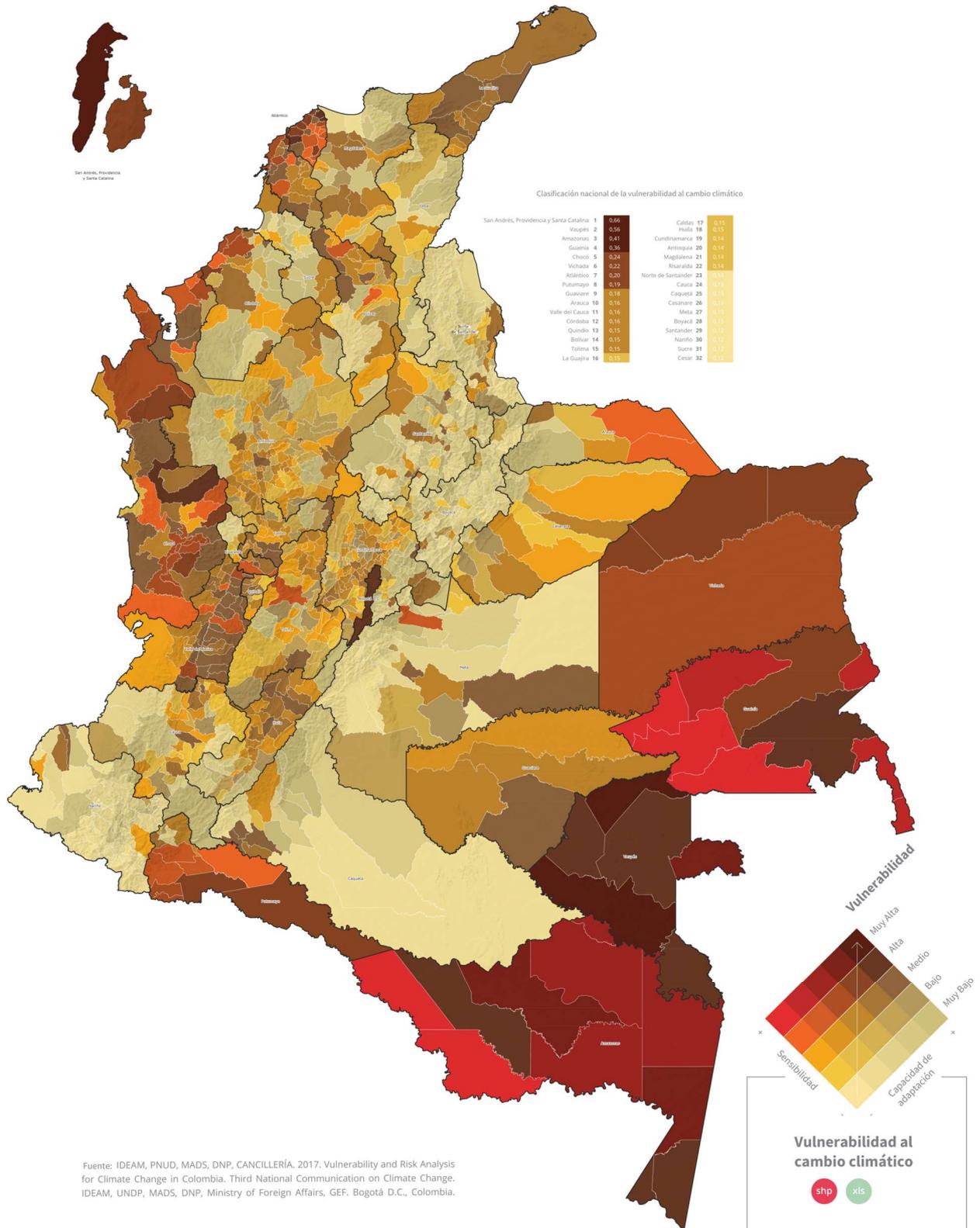
Fenómenos de El Niño y La Niña más extremos provocados por el cambio climático

Colombia experimenta patrones climáticos tanto de El Niño como de La Niña. El primero trae sequías y un clima más cálido, el segundo aumenta las inundaciones y conduce a patrones climáticos más fríos (Banco Mundial 2021b). El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) ha pronosticado que el cambio climático provocará condiciones más intensas similares a las de El Niño y La Niña, lo que afectará a los patrones de temperatura y precipitaciones. Por ejemplo, la combinación de El Niño y el cambio climático está relacionada con periodos de sequía en el Amazonas, los Andes y las regiones costeras del Caribe. Además, esta combinación puede provocar un aumento del número de incendios forestales. Del mismo modo, se prevé que un fenómeno de La Niña más fuerte aumente las precipitaciones y las inundaciones.

Variabilidad de las precipitaciones y escasez de agua

Las previsiones de precipitaciones varían regional- e interanualmente, con una gran incertidumbre. El escenario de precipitación para el país en 2040 revela dos tendencias distintas. Para los territorios de la región Andina se proyecta un aumento gradual de las precipitaciones. Por el contrario, para regiones como Caribe y Amazonia se espera una disminución gradual de la precipitación durante este periodo (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCELLEERÍA 2017). Después de 2040, se proyecta que la precipitación aumente en la cuenca amazónica de Colombia y en las zonas costeras del Pacífico, y que disminuya en las tierras altas (Banco Mundial 2021b). Para 2050, se espera que los cambios climáticos afecten al 14% del PIB correspondiente a la agricultura (Banco Mundial 2021b). Los fenómenos meteorológicos extremos han causado importantes daños en el pasado. Por ejemplo, en 2010-2011, La Niña produjo grandes inundaciones, causando pérdidas económicas estimadas en unos 6.000 millones de dólares (Banco Mundial 2021b). Por último, la disminución del caudal de los ríos tendrá implicaciones para la seguridad energética, ya que aproximadamente el 65% del suministro eléctrico de Colombia procede de la energía hidroeléctrica (Banco Mundial 2021b).

Mapa 1: Vulnerabilidad de Colombia al cambio climático por municipios



Fuente: IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCELLERÍA. 2017. Vulnerability and Risk Analysis for Climate Change in Colombia. Third National Communication on Climate Change. IDEAM, UNDP, MADS, DNP, Ministry of Foreign Affairs, GEF, Bogotá D.C., Colombia.

Medios de subsistencia e inadaptación

La alta variabilidad de las proyecciones de precipitación aumenta la incertidumbre en la adaptación de los sectores agrícola y energético. Por ejemplo, los cambios climáticos afectarán en gran medida a la productividad del sector agrícola colombiano (De Zyosa 2022), ya que muchos productos de exportación económicamente importantes, como el café, las flores, la caña de azúcar, el arroz y los plátanos, son muy vulnerables al aumento de las temperaturas y a los fenómenos hidrológicos (Cortes-Catano et al. 2024; IPCC 2021).

La alta vulnerabilidad de Colombia a los fenómenos meteorológicos extremos y a las catástrofes naturales se explica debido a los asentamientos humanos informales densamente poblados en zonas ya de por sí vulnerables. El país se enfrenta a varios factores de estrés socioeconómico provocados por el clima, como daños en los cultivos, el ganado, los ecosistemas y las infraestructuras, con consecuencias especialmente para los sectores de la agricultura, la pesca y el turismo, que causan (o aumentan) la pobreza de quienes dependen en gran medida de ellos.

En este contexto, el impacto del cambio climático en los medios de subsistencia genera prácticas de inadaptación como la adquisición ilegal de tierras, el aumento de los asentamientos informales en zonas con alto riesgo de desprendimientos y la conversión de bosques en explotaciones de ganadería extensiva, lo que perturba aún más los servicios ecosistémicos y aumenta los riesgos y la incidencia de enfermedades transmitidas por vectores. La Figura 2 resume las proyecciones climáticas para Colombia en un escenario de altas emisiones (RCP 8,5).

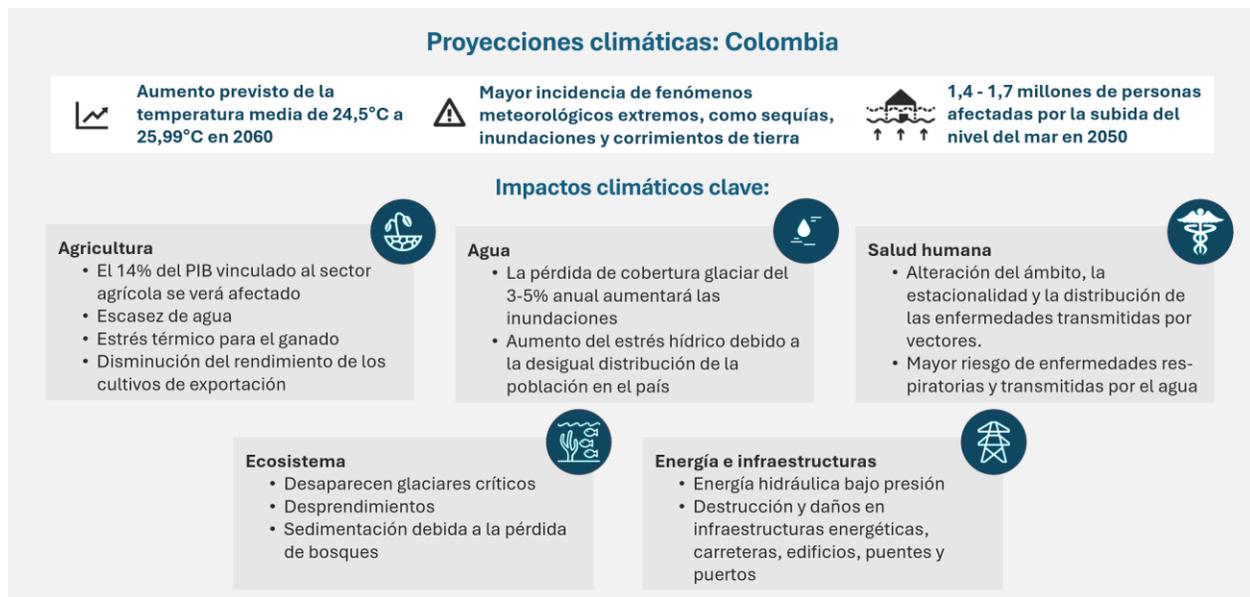


Figura 2. Proyecciones climáticas en Colombia (adelphi, basado en Banco Mundial 2023 y escenario CMIP6 SSP3-7.0)

Riesgos medioambientales y climáticos para la seguridad

Los riesgos de seguridad climática y medioambiental abarcan las consecuencias tangibles, financieras o sectoriales de las variaciones climáticas y los daños ecológicos, que perturban de forma significativa la estabilidad política, la cohesión social, el bienestar humano o el marco de seguridad de una nación. También

incluye las repercusiones de los problemas de seguridad y los conflictos armados en el entorno natural y la capacidad de resistencia de las personas.⁴

Colombia se ve muy afectada por los riesgos de seguridad climática y medioambiental, ya que las raíces de su prolongado conflicto armado se encuentran en una historia de conflicto político y lucha por gobernar la explotación de los recursos naturales. La conexión entre el conflicto armado, el medio ambiente y el cambio climático en el país es más evidente en la gobernanza y la gestión de la tierra, siendo el acceso y la distribución de la tierra los principales motores del conflicto (FIP et al. 2021).

Los usos no sostenibles de la tierra son la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y de alteraciones ecológicas. De hecho, el 59% de las emisiones de GEI de Colombia proceden de la agricultura, la silvicultura y otros sectores de uso de la tierra, incluida la deforestación o el cambio de la cubierta forestal (USAID 2023). Históricamente, el modelo de desarrollo del Estado ha fomentado la tala de bosques para la agricultura. En la década de 1970, las políticas incluso promovieron el desmonte en la región amazónica, que en aquel momento se consideraba tierra baldía, para facilitar la titulación de tierras. Recientemente, mediante el establecimiento de áreas protegidas (AP), el Estado ha desarrollado políticas de conservación, que han chocado con la historia de colonización campesina y de las comunidades que se habían asentado en lo que ahora son legalmente AP.

Las zonas que sufrieron el mayor impacto ambiental durante más de cinco décadas de conflicto armado en Colombia se encuentran en regiones con la mayor concentración de AP y, por lo tanto, son de especial interés para la conservación de la flora y la fauna del país.⁵ Unos 610 guardaparques cuidan las más de 17.465.359 hectáreas que conforman los parques nacionales. Según las autoridades de Parques Nacionales Naturales (PNN), la media internacional de hectáreas a conservar es de 6.250 por funcionario. En Colombia, hay 34.000 hectáreas por guardaparque. En algunos casos, los guardaparques son la única presencia institucional en la zona. Como consecuencia, en ocasiones los funcionarios han sido declarados objetivo militar por actores armados por ejercer la autoridad ambiental. En la última década, 11 guardaparques fueron asesinados. Por ejemplo, durante la década de 1990 y principios de 2000, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las FARC financiaron sus operaciones con la madera que extraían del parque y los cultivos ilícitos.⁶ Para garantizar el éxito de sus empresas, quemaban y saqueaban regularmente los puestos de control y secuestraban y asesinaban a los guardas del parque.⁷

El medio ambiente ha sufrido un deterioro en el periodo posterior al Acuerdo de Paz (2017-2018), lo que ha provocado un preocupante incremento del 50% en la alteración de los bosques en toda la Franja de Transición Andes-Amazonia (IDEAM s.f.). Muchos expertos suponen que, con la retirada de las estructuras informales de

⁴ En este documento, los riesgos de seguridad se enmarcan en el concepto de seguridad humana, es decir, la "supervivencia, los medios de vida y la dignidad" de las personas. Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad Humana: ¿Qué es la seguridad humana? Nueva York, NY.

Recuperado de: <https://www.un.org/humansecurity/what-is-human-security/>, 16.1.2023.

⁵ Para más información, consulte: <https://academic.oup.com/ia/article-abstract/97/1/179/6041471>.

⁶ Lo cuenta un guarda forestal que ha trabajado en más de 12 parques nacionales del país. Las incautaciones de madera extraída que tuvo que hacer en su trabajo le valieron amenazas de muerte. "Sólo armados con nuestro coraje y la camiseta de la conservación nos enfrentamos a quienes cometen infracciones". Para más información, véase: <https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/guardaparques-en-colombia-amenazas-asesinatos-y-otros-riesgos-laborales-645403>.

⁷ Según los defensores ambientales, "nos sacaron de los parques, nos amenazaron, nos echaron de muchos lugares que terminaron quedando solos". El grupo busca reivindicar los derechos de los defensores ambientales y los de la naturaleza y el territorio, vulnerados por diferentes enfrentamientos entre grupos armados. Más recientemente, en 2020, los guardabosques tuvieron que abandonar diez áreas protegidas por amenazas. Hay minas terrestres en 17 áreas protegidas. Esta persecución llevó a un grupo de guardaparques a presentar un informe ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición en 2019, solicitando ser reconocidos como víctimas del conflicto armado. Para más información, véase: <https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/guardaparques-en-colombia-amenazas-asesinatos-y-otros-riesgos-laborales-645403>.

gobernanza de las FARC, actores tales como grupos criminales, grandes terratenientes y facciones disidentes controlan ahora la minería ilegal y el narcotráfico.

Estos actores se dedican a actividades de deforestación a gran escala, como la ganadería extensiva, los mercados especulativos e ilegales de tierras, la expansión del cultivo de coca y el monocultivo, en el que influyen principalmente esquemas de blanqueo de dinero (Krause et al. 2022). De hecho, la tierra utilizada para el cultivo de coca en Colombia es relativamente pequeña en comparación con la tierra deforestada para pastoreo. La ganadería extensiva es la principal causa de deforestación en el país, responsables de más de un tercio de la superficie total de Colombia y de cerca de la mitad de su deforestación. Sin embargo, la producción de coca es responsable de la deforestación indirecta a través de un fenómeno conocido como “efecto pionero”, por el que el cultivo de coca atrae a otras actividades perjudiciales (Davalos et al. 2021). El cultivo de coca responde a un persistente y creciente consumo ilegal de cocaína en todo el mundo.⁸

La llamada guerra contra las drogas se suma a los complejos retos que van más allá del mero tráfico de sustancias ilícitas. Las actividades relacionadas con la coca contribuyen a la contaminación de los ecosistemas, la deforestación y las emisiones de CO₂. Se entrecruzan con otras actividades delictivas, como la ocupación ilegal de tierras, la tala de árboles y la minería, y las amplifican. Este entrelazamiento de empresas ilícitas ha dado lugar a un fenómeno conocido como “narco-deforestación”, que supone una importante amenaza para la región amazónica. En Colombia, los beneficios del narcotráfico alimentan cada vez más la especulación con la tierra y la degradación medioambiental, agravando el ya crítico problema de la deforestación en la región. Por ello, abordar la narco-deforestación es crucial para combatir el tráfico de drogas y preservar la integridad medioambiental de ecosistemas vitales como la Amazonia (ONUDD 2023).

Las repercusiones de los enfrentamientos entre grupos armados en zonas protegidas y territorios rurales afectan en mayor medida a las comunidades afrocolombianas e indígenas. En 2021, estas comunidades representaron el 57% y el 27%, respectivamente, de las víctimas de la violencia de combate entre grupos ilegales en todo el país, según el Monitor Colombia Humanitaria de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA s.f.). Además, los afrocolombianos, que constituyen entre el 10 y el 20% de la población, constituían el 53% de todas las personas desplazadas por la fuerza en 2022. Las comunidades indígenas, que comprenden un poco menos del 5% de la población, constituyen más de la mitad de las personas que viven en confinamiento forzado (OCHA s.f.). Del mismo modo, los afrocolombianos y los indígenas, especialmente las mujeres, se vieron desproporcionadamente afectados por los desplazamientos relacionados con el clima y los conflictos por los recursos (Cardenás et al. 2021).

Más recientemente, estos grupos armados han empezado a controlar el territorio a través de la población civil, que se convierte en blanco de la violencia. Estos grupos han utilizado diferentes tácticas de control de la población. No empiezan con la violencia, sino con el suministro de funciones estatales como la construcción de pequeñas carreteras y el suministro de electricidad (Mercado 2023). Grupos armados como el ELN, los frentes disidentes de las FARC y el Clan del Golfo (o las autodenominadas AGC-) explotan a las poblaciones vulnerables ofreciéndoles diversos “servicios” como garantizar la justicia, prevenir el crimen y proporcionar oportunidades económicas a lo largo de sus cadenas comerciales (International Crisis Group 2020). Las zonas rurales presentan un mayor reclutamiento vinculado a la degradación medioambiental. La evidencia sugiere que la deforestación financia a facciones disidentes. En las zonas afectadas por conflictos y vulnerables al cambio climático, la deforestación y la minería, los miembros de las comunidades, especialmente los que ya

⁸ Recientemente, un estudio multi-ciudad en ciudades europeas, que analizó la presencia de drogas ilícitas en las aguas residuales, mostró que el consumo de cocaína aumentó entre 2016 y 2022 en más de la mitad de las ciudades estudiadas. (Véase European Union Drugs Agency 2023: European Drug Report 2023).

son vulnerables, pueden estar más dispuestos a unirse a grupos armados debido a las repercusiones negativas de estos cambios en sus medios de subsistencia (Cardenás et al. 2021).

Además, muchas actividades económicas en las zonas rurales de Colombia, como la agricultura y las industrias extractivas, incentivan la tala de bosques, lo que repercute en la erosión del suelo y la desertificación, la pérdida de biodiversidad y la capacidad de los ecosistemas para regular los ciclos hidrológicos, dejando los ecosistemas y los medios de vida de las comunidades más susceptibles a peligros naturales como sequías e inundaciones. La convergencia de estos factores se ve agravada por los impactos del conflicto armado, dejando a las comunidades colombianas menos preparadas para resistir los efectos del cambio climático y más vulnerables a ser reclutadas. Esto crea un círculo vicioso que reduce la resiliencia de las comunidades ante las amenazas a la seguridad, aumenta las actividades económicas ilegales y los efectos adversos de la degradación medioambiental y el cambio climático (véase la figura 3).

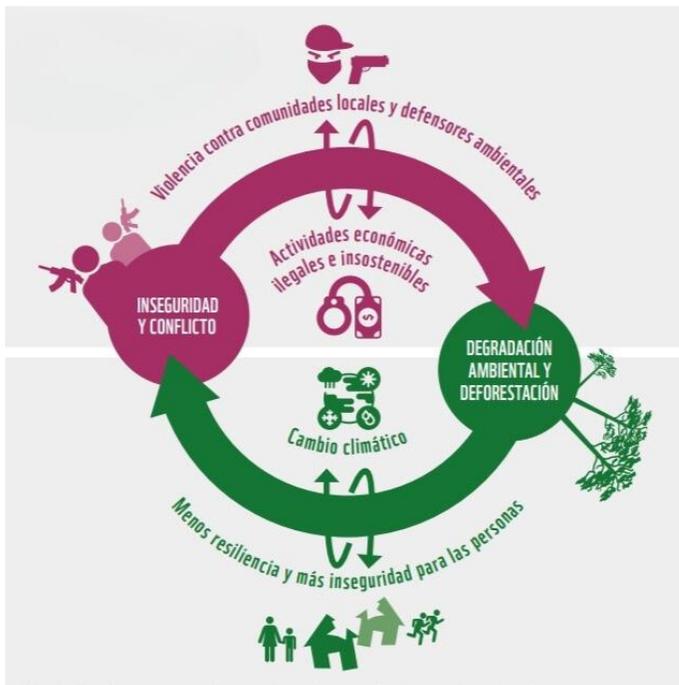


Figura 3. El círculo vicioso de la deforestación, la inseguridad y el cambio climático en la Amazonia colombiana (WWF Alemania, 2021)⁹

Análisis de política pública: La interacción de las políticas de paz, medio ambiente y clima y seguridad a escala nacional

Colombia se enfrenta a un amplio abanico de retos a la hora de implementar políticas relacionadas con la construcción de paz, el desarrollo rural, el medio ambiente y el clima, especialmente en las zonas más

⁹Más información sobre la fuente aquí: Figura 6 "El círculo vicioso de la deforestación, la inseguridad y el cambio climático en la Amazonia colombiana" en FIP et al. 2021: UN CLIMA PELIGROSO: Deforestación, cambio climático y violencia contra los defensores del medio ambiente en la Amazonia colombiana. WWF Alemania: Berlín.

afectadas por el conflicto armado.¹⁰ El Estado colombiano ha desarrollado políticas nacionales en los ámbitos del clima, el medio ambiente, la paz y la seguridad, con distintos niveles de aplicación. También existen buenas prácticas de programación integrada de construcción de paz ambiental a nivel local. No obstante, las tres últimas administraciones presidenciales han abordado los retos de la paz, el clima y el medio ambiente de forma diferente. Sigue existiendo una brecha notable en la coordinación intersectorial y una desconexión con las políticas y dinámicas locales. Esta desconexión, agravada por el carácter centralizado de la concepción de políticas en Colombia, ha obstaculizado el escalamiento de prácticas locales exitosas.

¿Por qué es apropiado para Colombia un enfoque de Construcción de Paz Ambiental a nivel nacional?

La construcción de paz ambiental implica promover medios de vida diversos e inclusivos basados en la gestión sostenible de los recursos naturales para resolver los conflictos locales. Se alinea con el compromiso del Estado colombiano con la construcción de paz, la adopción de una economía baja en carbono y la detención de la deforestación en el Amazonas (Baptiste et al. 2017). Además, aborda problemas mundiales acuciantes como la deforestación, la producción de drogas ilícitas y la protección de la biodiversidad, lo que repercute en la mitigación del cambio climático al salvaguardar enormes sumideros de carbono en regiones ecológicamente ricas como el bioma amazónico (IPCC 2023).

La paz ambiental, si se implementa con sensibilidad al conflicto, contribuye a la cohesión social comunitaria. Las enseñanzas extraídas de las prácticas locales han demostrado que las inversiones de impacto con un enfoque de construcción de paz ambiental son fundamentales para crear confianza entre las comunidades. Por ejemplo, conectar a los agricultores vulnerables con cadenas de valor sostenibles aumenta de forma justa su resiliencia climática y frente a las economías ilegales al ofrecerles mejores oportunidades de subsistencia. Evidencia de la cadena de valor del cacao demuestra que las intervenciones que combinan estrategias de subsistencia con esfuerzos de paz tienen un impacto positivo en la cohesión social, especialmente en la confianza. Además, las soluciones técnicas que fomentan de manera sensible el contacto entre grupos aumentan significativamente su disposición a participar (Löhr 2021; Morales Muñoz 2021).

Del mismo modo, permite a las poblaciones vulnerables participar en nuevos espacios de gobernanza, facilitando los debates sobre adaptación y resiliencia climáticas, estabilidad de precios y acceso a mejores mercados (Morales Muñoz et al. 2023). Esto es especialmente significativo, ya que las poblaciones históricamente marginadas, quienes son las más afectadas por los conflictos armados y las catástrofes naturales, también están en condiciones de desempeñar un papel crucial en la protección del medio ambiente en sus territorios.

Paz Ambiental y resiliencia climática

Las políticas climáticas y de construcción de paz siguen estando aisladas en la política pública nacional colombiana. Aparte de las disposiciones del Acuerdo de Paz y su desarrollo sobre deforestación y delitos medioambientales, las proyecciones climáticas y medioambientales no están suficientemente integradas en

¹⁰ La mayoría de estas áreas están situadas en zonas de frontera agrícola y requieren una coordinación meticulosa en cuanto a procedimientos y plazos, entre los principales retos se encuentran: la protección de las comunidades vulnerables frente a la violencia, la implementación del acuerdo de paz, la reparación a las víctimas del conflicto armado, un catastro nacional de tierras, la titulación "verde" de áreas de reserva forestal, la implementación de concesiones forestales comunitarias, la reglamentación de territorios indígenas (resguardos), la recuperación de baldíos indebidamente ocupados por grandes acaparadores de tierras, la sustitución de economías y territorios cocaleros y la dotación sistemática de infraestructura productiva, entre otros.

las políticas de paz y seguridad. No obstante, varios factores interconectados contribuyen a la paz ambiental y a la resiliencia climática. Entre estos factores se encuentra el modo en que los procesos de gobernanza afectan las respuestas a los efectos del cambio climático sobre la disponibilidad y accesibilidad del agua, los cambios en el ciclo terrestre del carbono y los nutrientes y la productividad de la tierra. Cómo lo expone el IPCC, es difícil lograr una adaptación y resiliencia climática efectiva sin componentes sociopolíticos como la mejora del acceso a tierras aptas para el cultivo, el aumento de la alfabetización climática, la promoción de la planificación racional del uso de la tierra rural, las consideraciones de equidad intergeneracional, la mejora del potencial de diversificación económica y el fomento de la cohesión social (2023).

La literatura reciente sugiere que invertir en caminos de desarrollo socialmente inclusivos y bajos en carbono, como las energías renovables, las soluciones basadas en la naturaleza, los sumideros de carbono y las industrias verdes, ofrece oportunidades para mejorar la sostenibilidad medioambiental y el desarrollo socioeconómico con co-beneficios para la paz (Wong 2022). Otras investigaciones subrayan el importante papel de los sistemas de uso de la tierra, en particular la agroforestería, a la hora de abordar las vulnerabilidades al cambio climático, reducir las emisiones derivadas de prácticas insostenibles y fomentar la paz mediante la gestión sostenible de los recursos naturales (Krampe et al. 2021; Morales Muñoz et al. 2023; Morales Muñoz et al. 2022; Cárdenas et al. 2021).

Para Colombia, un país afectado por el conflicto y altamente vulnerable al cambio climático, un enfoque de política nacional para la construcción de paz ambiental tiene muchos beneficios para la resiliencia climática transformadora. Una PPA debería fortalecer la presencia gubernamental promoviendo economías legales, extensión rural, salud, educación y servicios de justicia para las comunidades que han sido excluidas de las fuentes de crecimiento del país. Dada la presencia de las comunidades en regiones con valiosos recursos ecológicos y su dependencia de la agricultura, la integración de la educación climática en la formación agrícola local, por ejemplo, dota a los agricultores de conocimientos sobre el impacto de la variabilidad climática en sus cultivos y medios de vida (Cortés-Cataño et al. 2024). Este conocimiento les motiva para proteger estos recursos, fomentando su participación en planes de pagos por servicios ecosistémicos y prácticas sostenibles para mejorar la resiliencia (Hernández et al. 2025).

Paz Ambiental y gobernanza nacional

Aunque las iniciativas de gestión de los recursos naturales pueden contribuir directamente a formas de paz a escala local, no suelen escalar a niveles centrales (Johnson et al. 2021). Por ejemplo, en Colombia existe una tensión permanente entre los derechos sobre la tierra y la capacidad del Estado para controlar el territorio. La gobernanza local y nacional es un escenario clave de competencia entre el Estado y los actores armados. La construcción de paz ambiental facilita la cohesión *social intragrupal* y tiene el potencial de influir en la cohesión social *intergrupala* (Hachmann et al. 2023). Sin embargo, sigue habiendo un vacío en los programas que cubren las tensiones entre las comunidades y el Estado nacional o entre las comunidades locales y las grandes corporaciones (Hachmann et al. 2023). Según McKenzie et al. (2021), las iniciativas de base tienden a tener resultados más positivos en los medios de subsistencia, la inclusión y las instituciones subnacionales relacionadas con la gobernanza comunitaria. Los enfoques provenientes desde el Estado central o excesivamente técnicos pueden restar capacidades y una construcción de paz positiva. Equilibrar la escala de actuación es fundamental para garantizar resultados positivos en las distintas dimensiones de construcción de paz. Es crucial acompañar las políticas nacionales con capacidades y presupuesto para acabar con las amenazas a los derechos humanos, medioambientales y sociales, mitigarlas o adaptarse a ellas (Matthew et al. 2010).

Construcción de Paz Ambiental en Colombia

Sin embargo, la construcción de paz ambiental tiene un impacto sistémico que va más allá de las consideraciones medioambientales. Influye en la dinámica socioeconómica y contribuye significativamente a los esfuerzos de construcción de paz territorial al promover acuerdos de gobernanza inclusivos, convirtiéndose así en una poderosa herramienta para fomentar la participación comunitaria, la inclusión socioeconómica y la resiliencia climática (Ide et al. 2021). Por ejemplo, un estudio experimental en el que participaron 1.504 encuestados examinó los factores que influyen en el apoyo público a los proyectos de construcción de paz ambiental en Colombia. Los resultados revelaron que la creación de empleo y las inversiones públicas que benefician a toda la población, especialmente las que promueven el diálogo entre excombatientes y víctimas, eran los factores mejores recibidos (Schmid y Vlaskamp 2024).

La siguiente tabla ofrece una visión general de políticas públicas clave de Colombia que podrían facilitar la coordinación de los esfuerzos en materia de clima, medio ambiente, paz y seguridad, formando una base para avanzar en un enfoque integrado en el marco de una PPA. Estas políticas incluyen tratados internacionales como el *Acuerdo de Escazú*, que garantiza los derechos a la información ambiental, y el *Pacto de Leticia* para detener la deforestación en la cuenca del Amazonas, así como marcos nacionales como la *Ley de Coordinación Nacional Ambiental y Territorial* y la *Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana*. Éstos ejemplifican diversas estrategias y esfuerzos para promover el desarrollo sostenible, proteger los recursos naturales y garantizar la paz y la seguridad (véase la tabla 1).

Marco jurídico	Objetivo	Año
Internacional		
El Pacto de Leticia	Firmado por los gobiernos de Perú, Colombia, Brasil, Guyana, Surinam, Ecuador y Bolivia, para detener la deforestación ilegal y promover el desarrollo sostenible en la cuenca del Amazonas.	2019
Acuerdo de Escazú	Su objetivo es garantizar los derechos de las personas a obtener información medioambiental y participar en la toma de decisiones que afectan sus vidas y al medio ambiente. Es el primer instrumento jurídicamente vinculante del mundo que contiene disposiciones específicas sobre los defensores del medio ambiente. Exige a los gobiernos que proporcionen condiciones seguras y propicias a los defensores y garanticen que se investiga y procesa a los responsables de actos de violencia e intimidación contra ellos. En la actualidad ha sido ratificado o se han adherido a él 18 países: Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Dominica, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, las Bahamas y Uruguay.	2021
Nacional		
Ley de Coordinación Nacional Ambiental y Territorial del Medio Ambiente Nacional (Gobierno de Colombia 1993)	Reorganiza el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y dicta otras disposiciones.	1993

Construcción de Paz Ambiental en Colombia

Marco jurídico	Objetivo	Año
Ley de Ordenamiento Territorial (388) (Gobierno de Colombia 1997)	Establece mecanismos que permiten a los municipios, en el ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural ubicado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones eficientes de planeación urbana.	1997
Ley 388 de 1997 y Decreto sobre la reglamentación de los planes de ordenación territorial (Gobierno de Colombia 1997- 1998)	Regula las disposiciones relativas a la ordenación del territorio municipal. La ordenación del territorio pretende dar a la planificación económica y social su dimensión territorial, racionalizar la intervención sobre el territorio y promover su desarrollo y uso sostenible.	1997 - 1998
Reglamento del Sistema Nacional de AP (Gobierno de Colombia 2010)	Regular el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y los procedimientos generales relacionados con el mismo.	2010
CONPES 3886/2017 Pago por servicios ecosistémicos para la construcción de paz	Organiza el pago de servicios ecosistémicos para la construcción de paz.	2017
Visión Amazonía / CDN Colombia (2030)	Reduce la deforestación en la Amazonia colombiana mediante un modelo de desarrollo sostenible que incluye estrategias para la protección de los bosques y el uso sostenible de los recursos naturales. La iniciativa también pretende empoderar a las comunidades locales y a los pueblos indígenas al tiempo que genera desarrollo y alternativas productivas de baja deforestación. Se trata de una iniciativa del Gobierno colombiano que cuenta con el apoyo financiero de Noruega, el Reino Unido y la República Federal de Alemania a través del Banco KfW.	2018
Decreto 660 2018 Programa integral de seguridad y protección para comunidades y organizaciones en los territorios. (Gobierno de Colombia 2018)	Facilita la seguridad y protección de líderes, representantes y activistas de diversas organizaciones de derechos en los territorios para prevenir violaciones, respetar los derechos humanos y garantizar la seguridad.	2018
CONPES 4021/2020 Reducción de la deforestación	Tiene como objetivo limitar la deforestación anual a 100.000 hectáreas para 2025 y la deforestación cero a nivel nacional para 2030.	2020

Marco jurídico	Objetivo	Año
Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana para la Protección de la Vida (Presidencia de la República 2023)	Su objetivo es generar condiciones de seguridad en entornos urbanos y sobre todo rurales y recuperar el control territorial para liberar a la sociedad de la violencia. Tiene cuatro pilares: 1. Paz total. 2. Contención de la deforestación, protección y preservación de la biodiversidad. 3. Salvaguardar la integridad territorial, la soberanía, la independencia nacional y el orden constitucional. 4.Reforzar las fuerzas de seguridad.	2023

Tabla 1. Políticas relevantes en Colombia relacionadas con la coordinación de clima, medio ambiente, paz y seguridad

El éxito de las políticas a nivel local no depende sólo de su diseño, sino de la voluntad política y las estrategias del poder ejecutivo. En la siguiente sección, este documento profundiza en cómo las distintas visiones de paz a nivel nacional han dado forma a las políticas medioambientales y climáticas sobre el terreno. Analiza cómo han evolucionado estas dinámicas y por qué configuran una paz sostenible y resiliencia en Colombia. A continuación, explorando la intersección de las cuestiones ambientales con las causas estructurales del conflicto colombiano, argumentamos por qué un enfoque de Construcción de Paz Ambiental a nivel nacional ofrece un camino transformador a futuro.

Respuestas nacionales a la paz, los conflictos y la dinámica medioambiental

Tres concepciones diferentes de construcción de paz: “Paz Territorial”, “Paz con Legalidad” y “Paz Total”, y sus implicaciones medioambientales.

Los tres últimos gobiernos de Colombia han desarrollado diferentes aproximaciones a una política pública de paz, que han repercutido en la dinámica de los conflictos locales y en las políticas medioambientales del país. Primero, el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) se acercó a la guerrilla de las FARC y desarrolló diálogos de paz, que condujeron a la llamada “Paz Territorial”, que sentó las bases para desarrollar un programa integral de paz, con el objetivo primordial de llevar el Estado a los territorios más frágiles y afectados por la violencia. Posteriormente, el gobierno de Iván Duque (2018-2022) fue elegido en respuesta a la insatisfacción con las negociaciones con las FARC, bajo la promesa de un gobierno de mano dura que llevaría a los responsables de crímenes ante la justicia. Su política se denominó “Paz con Legalidad”. Finalmente, tras el reclamo generalizado de las fuerzas sociales por la creciente desigualdad y la falta de implementación del Acuerdo de Paz, el actual gobierno liderado por Gustavo Petro (2022-2026) fue elegido bajo la promesa de implementarlo, especialmente en lo referente a una reforma rural integral y a desarrollar negociaciones con los grupos armados ilegales que no firmaron el Acuerdo de 2016 para consolidar una “Paz Total”. La Administración Petro lanzó recientemente la Coalición Mundial de Paz con la Naturaleza durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad 2024 (CNUDB COP16).¹¹

¹¹ República de Colombia. Declaración de la coalición mundial de paz con la naturaleza: Un llamamiento por la vida: <https://www.cop16colombia.com/es/wp-content/uploads/2024/10/DECLARATION-OF-THE-WORLD-COALITION-FOR-PEACE-WITH-NATURE.pdf>

A continuación, presentamos los principales hitos de estos tres enfoques políticos y sus implicaciones para los retos y soluciones medioambientales.

1) El enfoque de “*Paz Territorial*” y las consideraciones medioambientales dentro del Acuerdo de Paz de 2016

El concepto de “*Paz Territorial*” adquirió relevancia durante las conversaciones de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP. Sergio Jaramillo, ex Alto Comisionado para la Paz de Colombia, introdujo el concepto en 2014 durante el mandato del presidente Santos (2010-2018). Sugiere que el conflicto colombiano está estrechamente vinculado a la ausencia de instituciones estatales eficaces, en particular en las zonas rurales (Baum 2019). El sistema legal es altamente ineficiente para resolver disputas locales entre vecinos. A menudo, una víctima debe conducir hasta 4 horas hasta el municipio para presentar una denuncia, solo para enfrentarse a un sistema burocrático lento. Así pues, de una nueva colaboración entre el Estado y las comunidades constituidas localmente deben surgir instituciones, prácticas y normas sólidas para hacer frente a esta situación. Lograrlo requiere la participación activa de la población local a través de procesos inclusivos que consideren las condiciones y necesidades locales específicas (Cairo et al. 2018).

Este enfoque también implica diferentes aspectos relacionados con el medio ambiente, como la gestión de los recursos naturales y, sobre todo, la propiedad de la tierra, incluidos los derechos y la distribución, la administración, la gobernanza y el significado cultural y espiritual del territorio (Vanelli y Peralta 2022). En 2016, el gobierno de Santos lanzó el programa “Visión Amazonia”, cuyo objetivo era reducir la deforestación en la Amazonia colombiana mediante un modelo de desarrollo sostenible que incluyera estrategias para la protección de los bosques y el uso sostenible de los recursos naturales. Su propósito era contribuir a la mitigación del cambio climático, la reducción de la pobreza y la construcción de paz. El programa promovía que la Amazonia colombiana pasara de ser vista como una “narco-frontera” a un sumidero neto de CO₂ con oportunidades para el crecimiento ecológico y la reducción de la pobreza. Sin embargo, este cambio ha generado conflictos por la tierra y ha afectado a la legitimidad de los derechos de propiedad, ya que ahora se considera a los pequeños propietarios como ocupantes y a las comunidades indígenas como guardianes ingenuos del medio ambiente (Hein et al. 2020), lo que socava una política integral de gobernanza medioambiental que reconozca las diferentes estructuras de gobernanza y formas de vida.

Estrategias medioambientales en el Acuerdo de Paz de 2016

El Acuerdo de Paz tuvo importantes implicaciones para la gobernanza medioambiental de Colombia. Se ha desarrollado una narrativa que afirma que el Acuerdo de Paz fue responsable del aumento de la deforestación (Murillo-Sandoval et al. 2020). Sin embargo, se trata de una simplificación. La relación entre el proceso de paz y la deforestación es más compleja e implica factores como la débil presencia del Estado, los incentivos económicos para la conversión de tierras y el papel de los diferentes actores en el uso de la tierra después de la firma del Acuerdo (FIP et al. 2021). Aunque las tasas de deforestación aumentaron, la razón no fue el Acuerdo de Paz en sí, sino la falta y el retraso en su aplicación. De hecho, los efectos de la deforestación se atenuaron en los municipios con mayor presencia estatal y capacidad judicial (Prem, Saavedra y Vargas 2020). El Acuerdo de Paz de 2016 mencionó la sostenibilidad y la inclusión ambiental en varias secciones del documento. Dentro de su núcleo, se incluyeron varios mecanismos relacionados con la gobernanza de la tierra y la gestión de aspectos ambientales como prerrequisito para alcanzar la “*Paz Territorial*”. De hecho, el Acuerdo de Paz proporcionó varias herramientas para promover el desarrollo rural sostenible, incluyendo la recuperación económica, la reforma rural y la protección del medio ambiente (Valenzuela y Caicedo 2018). Y lo que es más importante, sentó las bases para políticas transformadoras basadas en la tierra, un tema crítico

en el debate sobre la paz y el clima en Colombia, que pueden ayudar a avanzar hacia la sostenibilidad ambiental y la estabilidad política (Vanelli y Peralta 2022).

Concretamente, la protección del medio ambiente se mencionó en tres de los seis capítulos del Acuerdo: el capítulo uno, sobre la reforma rural integral; el capítulo tres, sobre la finalización del conflicto armado (desarme de las guerrillas); y el capítulo cuatro, sobre el problema de las drogas ilícitas (véase la tabla 2).

Capítulo del Acuerdo de Paz	Estrategia	Descripción
<i>Capítulo primero.</i> Reforma rural integral	Catastro multipropósito	La información catastral aclara la situación de la tenencia de la tierra y los terrenos baldíos, entre otros mecanismos.
	Planes participativos de zonificación medioambiental	Crea un inventario de zonas con gestión medioambiental especial para frenar la deforestación.
	Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)	Los PDET son planes creados con los líderes locales para abordar problemas de gobernanza y desarrollo en los municipios más afectados por el conflicto de Colombia.
<i>Capítulo tres.</i> Finalización del conflicto armado	Proyectos de desminado y protección del medio ambiente	Ofrece oportunidades de empleo para la reinserción de excombatientes.
<i>Capítulo cuatro.</i> El problema de las drogas ilícitas	Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS)	Fomenta acuerdos comunitarios para poner en marcha estrategias de subsistencia alternativas y acabar con los cultivos ilícitos.

Tabla 2. Estrategias relacionadas con el medio ambiente en el Acuerdo de Paz

El primer capítulo del Acuerdo es una reforma rural integral que abarca actividades relacionadas con la ordenación sostenible del territorio y la delimitación de las fronteras agrícolas. Un componente fundamental de esta sección del Acuerdo de Paz es el establecimiento de un catastro multipropósito. Este sistema de información catastral puede proporcionar servicios de administración de tierras a escala nacional para mejorar la seguridad de la tenencia. Diferentes proyectos de cooperación internacional han apoyado a las autoridades nacionales en su implementación con un enfoque participativo, a través del desarrollo de capacidades a las comunidades, el fortalecimiento de los procesos de diálogo y la integración de soluciones desde la administración pública en materia de políticas de gestión de tierras (GIZ 2023). Una implementación completa clarificará el estatus de la tierra, incluyendo la tenencia informal o baldíos, que son propiedad del Estado. Además, la información catastral será accesible para aumentar los ingresos locales gubernamentales por impuestos y servirá como recurso informativo para fines municipales y de planificación del uso de la tierra (Banco Mundial 2021a).

Asimismo, el Acuerdo de Paz creó los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Se centran en 16 zonas afectadas por el conflicto con escasa presencia gubernamental, que abarcan 170 de los 1.122 municipios de Colombia. Esto incluye 11.000 comunidades, 452 indígenas y 305 afrodescendientes, que abarcan el 36% del territorio nacional, albergan a 6,6 millones de personas (el 13% de la población) y el 31% de las víctimas registradas, todas ellas con índices de pobreza superiores a la media nacional. Un factor medioambiental clave de los PDET es la integración de la justicia medioambiental en su formulación. Estos planes no sólo tienen en cuenta la necesidad de desarrollo económico y social, sino que también garantizan

que las acciones de desarrollo respeten y protejan el medio ambiente local y sean altamente participativas, promoviendo así un modelo de desarrollo sostenible.

Por último, el Acuerdo de Paz estableció el espacio para el desarrollo de planes de zonificación ambiental como herramienta para garantizar el desarrollo sostenible en los municipios del PDET y otros. Crea un inventario de áreas con una gestión especial, como zonas de conservación, reservas forestales, protección hidrológica y restauración. La zonificación ambiental participativa se ha planificado para 172 municipios priorizados que fueron los más afectados por el conflicto armado y han sido históricamente marginados. Su objetivo es generar alternativas a los usos insostenibles de la tierra y a las economías ilegales hacia medios de vida diversificados desde el punto de vista medioambiental. Estos espacios coinciden con la expansión de la frontera agrícola, por lo que es un proceso importante para la sostenibilidad. El 87% de los municipios priorizados cuenta con algún tipo de protección natural, reserva forestal o área protegida. El Ministerio de Ambiente elaboró estos planes mediante un proceso participativo e iterativo en el que intervinieron diversos grupos, como comunidades campesinas, territorios indígenas y afrocolombianos, organizaciones comunitarias, asociaciones e instituciones locales. Su carácter participativo es fundamental porque hace que estas poblaciones reconozcan al gobierno como una entidad en la que pueden confiar (MADS 2021).

En el tercer capítulo, sobre la “finalización del conflicto armado”, se incluyeron proyectos de protección ambiental y desminado humanitario para contratar a antiguos combatientes en la ejecución de estos proyectos. La ejecución de estos proyectos ha generado algunas implementaciones de paz ambiental, buenas prácticas y lecciones aprendidas, que se revisarán en el próximo capítulo.

Por último, el cuarto capítulo, “Solución al problema de las drogas ilícitas”, incluía un apartado sobre sostenibilidad, restauración de la naturaleza (Banco Mundial 2024) y sustitución de cultivos ilícitos, especialmente dentro de áreas protegidas (República de Colombia 2016). En 2017 se creó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).¹² Un aspecto notable del PNIS fue la introducción de acuerdos comunitarios, que requieren el consenso entre los representantes del Gobierno, los miembros de las FARC y las comunidades locales antes de su aplicación en cada municipio. Estos acuerdos ratifican el compromiso voluntario de la comunidad de sustituir los cultivos ilícitos.

El Acuerdo de Paz y el PNIS se han puesto en marcha para aunar la construcción de paz y las políticas relacionadas con las drogas. El diálogo establecido para implementar estas políticas mostró una buena señal de acercamiento entre el Estado y los territorios. Sin embargo, su implementación no fue lo suficientemente sensible al conflicto, y deben hacerse esfuerzos para mejorar la coordinación entre estas políticas. Éstas parecen desconectadas, sobre todo en lo que respecta a la erradicación forzosa y las intervenciones de las fuerzas de seguridad (PIF 2020). Por ejemplo, al principio del programa PNIS surgieron conflictos sobre el uso de la tierra, y algunos ejecutores gubernamentales tuvieron dificultades para financiar algunos de los proyectos productivos ubicados en zonas protegidas. Los retrasos en los pagos a los agricultores crearon deslegitimación del Estado en estos territorios. Además, las evaluaciones han mostrado que la violencia contra los líderes fue más pronunciada en municipios donde el crimen organizado estaba presente pero no había consolidado plenamente el poder, y donde los líderes sociales participaban en programas de erradicación que se oponían a la expansión de los cultivos ilícitos (Llanes 2022).

¹² El PNIS es el programa de sustitución de cultivos ilícitos más amplio del mundo, con más de 99.000 hogares implicados. <https://portalparalapaz.gov.co/programa-de-sustitucion-voluntaria-de-cultivos-ilicitos/>.

Pagos por Servicios Ecosistémicos (PSE) para la política de paz

Otra medida crítica dentro del enfoque de “*Paz Territorial*” fue la consolidación de PSE. Su objetivo era resolver los problemas de uso de la tierra y de inclusión económica conciliando las actividades productivas y de conservación. La política de PSE incentiva a los propietarios de tierras a realizar acciones de conservación y generación de servicios ambientales en áreas y ecosistemas estratégicos a cambio de una recompensa monetaria o en especie. Esta política pretende incorporar un millón de hectáreas del territorio nacional bajo esquemas de PSE para 2030, lo que requerirá cerca de un billón de pesos colombianos en inversiones (casi 59.000 millones de dólares).¹³ La implementación de PSE es esencial ya que apoya la conservación de los ecosistemas, promueve la agricultura sostenible, proporciona beneficios económicos a las poblaciones vulnerables y ayuda a la adaptación y mitigación del cambio climático.

Justicia transicional, reparaciones y medio ambiente

Como otra parte del enfoque de “*Paz Territorial*” de Santos, el Acuerdo de Paz colombiano de 2016 dio lugar a un sólido mecanismo de justicia transicional, a saber, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La JEP se encarga del esclarecimiento judicial de los crímenes cometidos durante el conflicto y de los implicados directa- o indirectamente: miembros de la guerrilla de las FARC, militares y civiles. Este refleja una composición judicial diversa que incluye representación de indígenas y afrocolombianos. Esta diversidad resalta una perspectiva particular sobre el medio ambiente, el territorio y las comunidades, con autoridades tradicionales que enfatizan la importancia de preservar los ecosistemas cruciales para el sostenimiento de la vida (JEP 2023a).

El enfoque de justicia restaurativa de la JEP ofrece soluciones matizadas que tienen en cuenta características contextuales como la raza, el género y la interseccionalidad para comprender las repercusiones del conflicto en el medio ambiente y su importancia para la vida de la comunidad. Reconoce el impacto desproporcionado sobre las mujeres y las comunidades étnicas, las cuáles ven las violaciones contra sus territorios como equivalentes a las violaciones contra su gente. En este caso, el territorio no sólo se considera un bien natural, sino que se extiende a la identidad social de las comunidades y, más allá de la propiedad de la tierra, al uso sostenible de los recursos.

Esta jurisdicción amplía los derechos de la naturaleza, apartándose del enfoque tradicional que limita la participación de la naturaleza en los procesos judiciales, y garantizando a la naturaleza una voz propia en los procesos penales. La JEP establece un mecanismo de diálogo para mejorar la conservación de ecosistemas críticos. Realiza un ejercicio pedagógico para fomentar la responsabilidad y el reconocimiento e iniciar procesos de restauración en los territorios afectados. La JEP reconoce el impacto acumulativo de la violencia medioambiental, por ejemplo, mediante el reciente reconocimiento del río Cauca como víctima (JEP 2023a). Este enfoque capacita a los líderes étnicos colombianos para defender los ecosistemas sagrados, valorando su significado simbólico y espiritual.¹⁴ Además, Las sentencias judiciales de la JEP ordenan la restauración de

¹³ El CONPES es el máximo comité nacional de planificación y asesoramiento gubernamental en materia de desarrollo económico y social.

¹⁴ El enfoque innovador de la JEP es un ejemplo para los tribunales internacionales, ya que cuestiona normas obsoletas del Derecho internacional y una visión de la naturaleza centrada en el ser humano. En Derecho penal internacional, la Corte Penal Internacional (CPI) es el órgano competente para procesar a individuos por los crímenes más graves de trascendencia internacional, como el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. La CPI tiene jurisdicción sobre individuos, no sobre Estados o entidades no estatales. Funciona sobre la base del Estatuto de Roma, que define los crímenes que entran dentro de su jurisdicción. Por ejemplo, aunque la CPI puede considerar el daño al patrimonio natural como parte del contexto de los cuatro crímenes enumerados anteriormente, sólo reconoce a las personas jurídicas naturales como víctimas potenciales. Mientras que el estatuto de la CPI tiene limitaciones en cuanto a los derechos de la naturaleza, la JEP amplía la protección a los lugares naturales y de culto, no sólo a los construidos por humanos, dando “voz” a los lugares naturales y de culto. Este enfoque considera la protección y preservación del medio ambiente para todos y refleja una comprensión holística de la justicia transicional y las preocupaciones medioambientales.

los ecosistemas para compensar a las víctimas y facilitar la reconciliación, dando prioridad a los derechos de las víctimas en estos procesos.

En resumen, el Acuerdo de Paz tuvo efectos positivos en cuanto a sentar las bases para una mejor gobernanza medioambiental. Se abrieron zonas críticas de alta biodiversidad antes inaccesibles para la investigación ecológica (Irwin 2023) y se avanzó en la planificación de soluciones económicas para las comunidades, incluyendo 8.600 hectáreas y 639 familias en el PES (CONPES 2017). Se crearon 16 mapas de zonificación ambiental en municipios priorizados. Por su parte, el PNIS logró sustituir cultivos de uso ilícito a través de 99.097 familias, ubicadas en 56 municipios de 14 departamentos del país (ONUDD 2022). Sin embargo, como se demostrará en las siguientes secciones, las regiones más afectadas aún carecen de una implementación efectiva del Acuerdo y de soluciones duraderas.

2) La “Paz con Legalidad”: Las dificultades de construir la paz con “mano dura”

La elección de Iván Duque Márquez como presidente de Colombia fue, en parte, una reacción contra la percepción de impunidad asociada al Acuerdo de Paz con las FARC. Muchos colombianos consideraban que los términos del Acuerdo eran demasiado indulgentes con los antiguos guerrilleros, permitiéndoles eludir el castigo adecuado por crímenes pasados. La campaña de Duque aprovechó este sentimiento. De hecho, el lema político del partido de Duque, el Centro Democrático, era: “Hacer trizas el acuerdo”. La defensa de un retorno a la legalidad y la justicia se convirtió en un tema central de su administración. Este enfoque, denominado “Paz con Legalidad”, pretendía garantizar que los esfuerzos de construcción de paz no comprometieran el Estado de Derecho ni otorgaran concesiones percibidas como excesivas a los excombatientes.

Este enfoque pretendía restaurar la autoridad del Estado asegurando el control a través de las fuerzas militares y de policía, centrándose en la estabilización y consolidación del control territorial para fortalecer la seguridad nacional, impulsar la economía y garantizar el cumplimiento del Acuerdo de Paz (Ministerio de Defensa 2021). Entre 2018 y 2022, el gobierno de Iván Duque implementó normas para ampliar las tierras agrícolas y lanzó el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Las intervenciones focalizadas priorizaron 170 municipios PDET, según lo establecido en el Acuerdo de Paz, donde el Estado buscó aumentar su presencia a través de servicios y fuerza pública.

Durante este periodo, la administración de Duque se enfrentó a una presión considerable de la comunidad internacional, en particular de Estados Unidos bajo la administración Trump, que abogaba por medidas agresivas para frenar los cultivos ilegales de coca (White House 2020). Al mismo tiempo, Colombia estaba obligada por los compromisos internacionales para preservar el bioma amazónico, con el apoyo de la financiación de países como Noruega, Reino Unido y Alemania. Estas naciones han hecho contribuciones financieras sustanciales a los esfuerzos de conservación y esperan que Colombia mantenga sus responsabilidades de protección de la selva tropical (Oficina del Primer Ministro de Noruega 2015). Bajo su administración, la lucha contra la deforestación apareció en la agenda política, en parte impulsada por la presión internacional para evitar que la deforestación siguiera avanzando en la Amazonia. Por lo tanto, era una prioridad y se utilizaba como palanca política para mostrar eficacia a la hora de detener la deforestación y mostrar su política de “mano dura”.



Canangucha, Colombia © Leonel Barreto, Pixabay

El principal enfoque de la administración de Duque para detener la deforestación fue una operación militar denominada Artemisa. El objetivo principal de la Campaña Militar y Policial Artemisa era ayudar a las autoridades ambientales y administrativas a preservar y salvaguardar el agua, el saneamiento, los recursos hídricos, la biodiversidad y el medio ambiente en las zonas de reserva forestal, las áreas protegidas y los Parques Nacionales Naturales (Ministerio de Defensa 2019, 2021). Estos son considerados los activos estratégicos primarios y más vitales de la nación. Las fuerzas armadas colombianas asumieron un papel en la protección del medio ambiente, con 22.000 efectivos dedicados a esta tarea. Esto implicó la integración de diferentes autoridades ambientales, judiciales y administrativas colombianas, como la Fuerza Pública, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), la Fiscalía General de la Nación, la administración de Parques Nacionales Naturales y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) (Ministerio de Defensa 2019). Según cifras del MADS, la campaña Artemisa para el año 2022 había logrado asegurar más de 22.000 hectáreas de bosque que había identificado en riesgo de deforestación (2022).

A pesar de todos los esfuerzos, la deforestación no se ha detenido, y persisten diferentes retos. Los expertos sostienen que la operación Artemisa se basó demasiado en un enfoque de mano dura, con el objetivo de exhibir “victorias” aunque éstas consistieran en detener a pequeños agricultores en zonas donde no estaba permitida la deforestación, lo que mermó los avances en otras áreas y puso en peligro las relaciones del Estado con las comunidades locales (Corredor-García et al. 2024). El aumento de la militarización suscitó preocupación por la seguridad de los guardaparques, que, en el contexto de los conflictos en curso, corrían el riesgo de ser percibidos como informantes o aliados de los militares, lo que aumentaba los peligros a los que se enfrentaban (FIP 2020). Además, estas operaciones militares eran rechazadas por las comunidades. En ocasiones interrumpieron los procesos de diálogo que se habían iniciado entre las autoridades civiles y los

agricultores que ocupaban las AP desde la administración de Santos (2010-2018), lo que dio lugar a violaciones de derechos humanos relacionadas con los derechos de propiedad y la tenencia de la tierra (Bautista 2022). Los críticos, los defensores del medio ambiente y la población civil afirmaron que la campaña militar carecía de coordinación con las autoridades civiles y estaba reproduciendo patrones de violencia perjudiciales contra la población civil en zonas rurales vulnerables (Bautista 2022).

Si bien la administración de Duque logró algunos avances en su agenda ambiental y se posicionó como un defensor de la protección del medio ambiente a nivel internacional, como lo demuestra su liderazgo en el Pacto de Leticia de 2019, las políticas ambientales mostraron resultados mixtos al final de este mandato. Desde el principio, los objetivos ambientales fijados en el Plan Nacional de Desarrollo se consideraron insuficientes para abordar los desafíos emergentes (Eufemia et al. 2019). El gobierno de Duque logró una reducción global de la deforestación. Heredó una tasa anual de deforestación de 197.159 hectáreas, que para 2022 había disminuido a 123.517 hectáreas (IDEAM MADS 2024). Sin embargo, el gobierno de Duque no invirtió en lograr una gobernanza forestal a largo plazo y una sostenibilidad más amplia a pesar de reducir la deforestación. El sector de medio ambiente y desarrollo sostenible tuvo una de las menores participaciones en el presupuesto nacional de Colombia de 2018 a 2020. En 2019, las emisiones de CO₂ procedentes de combustibles fósiles alcanzaron la cifra récord de 102 Mt, un aumento del 17% con respecto al promedio de 2010-2018. Asimismo, en junio de 2021, un proyecto de ley que prohibía el *fracking* y los yacimientos no convencionales fue rechazado en el Congreso oficialista, lo que generó preocupación entre los analistas debido a las importantes fugas de metano y gases de efecto invernadero asociados a estas prácticas (Salazar et al. 2022).

Al final del gobierno de Duque, persistían los problemas de gobernabilidad en materia de seguridad. La violencia contra los líderes de base de los derechos humanos y el medio ambiente ha aumentado durante el gobierno de Duque y sigue siendo alta en el actual gobierno de Petro. Los líderes sociales y los defensores de la tierra son también los más fervientes defensores del Acuerdo de Paz, de las víctimas del conflicto y de la reforma agraria. Aunque técnicamente existe libertad de reunión y protesta en Colombia, diferentes casos evidenciaron restricciones violentas durante el mandato de Duque. En la primavera de 2021 se produjeron protestas en todo el país, predominantemente pacíficas, contra las regresivas reformas fiscales, exigiendo una rápida implementación del Acuerdo de Paz y el fin de la desigualdad económica. Se produjeron manifestaciones, bloqueos de carreteras y protestas en 331 municipios, según la Defensoría del Pueblo (2021). Sin embargo, estas protestas fueron respondidas con violencia policial en lugar de diálogo, lo que intensificó la violencia y agravó las demandas de justicia contra los abusos (Freedom House 2022). Según la oficina local del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, al menos 44 manifestantes fueron asesinados, y al menos 28 de ellos por la policía (Freedom House 2022). Esto creó un ambiente de inestabilidad política y demuestra que el Estado tiene dificultades para proteger a las comunidades vulnerables (International Crisis Group 2020).

El problema de los cultivos ilegales y el narcotráfico

Los grupos armados ilegales han violado territorios indígenas y afrocolombianos para sembrar coca y establecer refugios seguros para sus operaciones. En 2021, aproximadamente un tercio de la producción de coca de Colombia se situaba en estos territorios, según informó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD 2022). Los retrasos en la implementación del programa PNIS, como la ausencia de pagos a las comunidades y la falta de presencia del gobierno nacional para prestar servicios sociales, parte del núcleo del Acuerdo de Paz, agravaron esta situación.

Iván Duque introdujo la Ruta Futuro como una política integral que involucraba a varios ministerios, fuerzas públicas y entes reguladores para combatir el narcotráfico. Su objetivo principal era disminuir la disponibilidad

de drogas reduciendo los cultivos ilícitos y las vulnerabilidades territoriales y mejorando los servicios sociales (República de Colombia 2018). Aunque en teoría el enfoque tenía un componente socioeconómico, la administración Duque priorizó el restablecimiento de la fumigación aérea con glifosato y la exhibición de la captura de cabecillas de los grupos armados.¹⁵ Las comunidades locales han denunciado en repetidas ocasiones diversos daños ambientales, sanitarios y económicos derivados de las fumigaciones aéreas con glifosato (Jiménez 2021). Además, la erradicación de coca en territorios indígenas o afrocolombianos está estrictamente prohibida sin el consentimiento de la comunidad, según la Constitución colombiana, una medida destinada a respetar su autonomía y sus estructuras tradicionales de gobierno (Corte Constitucional de Colombia 2021).

La erradicación manual forzosa promovida por el gobierno Duque no logró una reducción significativa de los cultivos de coca. Pasaron de 169.000 hectáreas en 2018 a 154.000 en 2019 y 143.000 en 2020. Para 2021, volvieron a subir a unas 160.000, lo que indica una reducción de menos del 5% en los cuatro años (León 2022). Según el Informe Mundial sobre las Drogas de la ONUDD, se ha demostrado que no tiene beneficios a largo plazo. Al cabo de diez años, no hay diferencias entre las zonas en las que se erradicó y aquellas en las que no se erradicó; de hecho, el cultivo aumentó más rápidamente en las zonas sometidas a erradicación forzosa. El informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes publicado por las Naciones Unidas indicaba que sólo el catorce por ciento de las zonas donde se produjo la erradicación forzosa siguen libres de cultivos ilegales (ONUDD 2022).

El enfoque de mano dura de Duque competía con las estrategias aplicadas por los actores armados ilegales, que ofrecían salarios y la provisión de bienes públicos. Además, los grupos ilegales imponían su autoridad mediante toques de queda, reclutamiento, cooperación forzosa y represión. Por ejemplo, en las zonas controladas por el ELN y las disidencias de las FARC en Arauca, los miembros de la comunidad acuden a estos grupos para la resolución de conflictos debido a la ausencia del Estado, legitimando así su autoridad dentro de la comunidad (International Crisis Group 2020). La evaluación costo-beneficio de la falta de coordinación civil y militar de Duque ha resultado en altos niveles de conflicto social. En regiones como Cauca, Nariño, Catatumbo, Putumayo y Guaviare, las fuerzas de seguridad se han enfrentado con comunidades donde se han erradicado los cultivos de coca (Observatorio de Tierras 2020).

Esto demuestra que la falta de implementación o la implementación ineficaz de las disposiciones sobre gobernanza ambiental y reforma rural del Acuerdo de Paz han creado incentivos perversos para que los actores armados entren en los territorios que antes controlaban las FARC. El gobierno de Duque no fue lo suficientemente rápido para implementar un control territorial de facto, con autoridades civiles y servicios estatales en lugar de una presencia militar esporádica. La desconfianza en el gobierno ha causado una gran incoherencia en el enfoque de seguridad del Estado. Las fuerzas armadas se encontraron en la difícil posición de ser los primeros en responder, aun sabiendo que la línea prioritaria del gobierno de Duque no era la protección de la población civil per se sino capturar individuos de alto nivel y forzar la destrucción de cultivos ilícitos (International Crisis Group 2022).

¹⁵ El fallo de tutela de la Corte Constitucional, basado en el derecho de las comunidades a la consulta previa, hizo que el proceso fuera casi imposible de implementar de manera eficiente. Corte Constitucional de Colombia. (29 noviembre 2021). Sentencia T-413/21. Obtenido de <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2021/T-413-21.htm>

Map 2: Presencia más significativa de grupos armados en Colombia

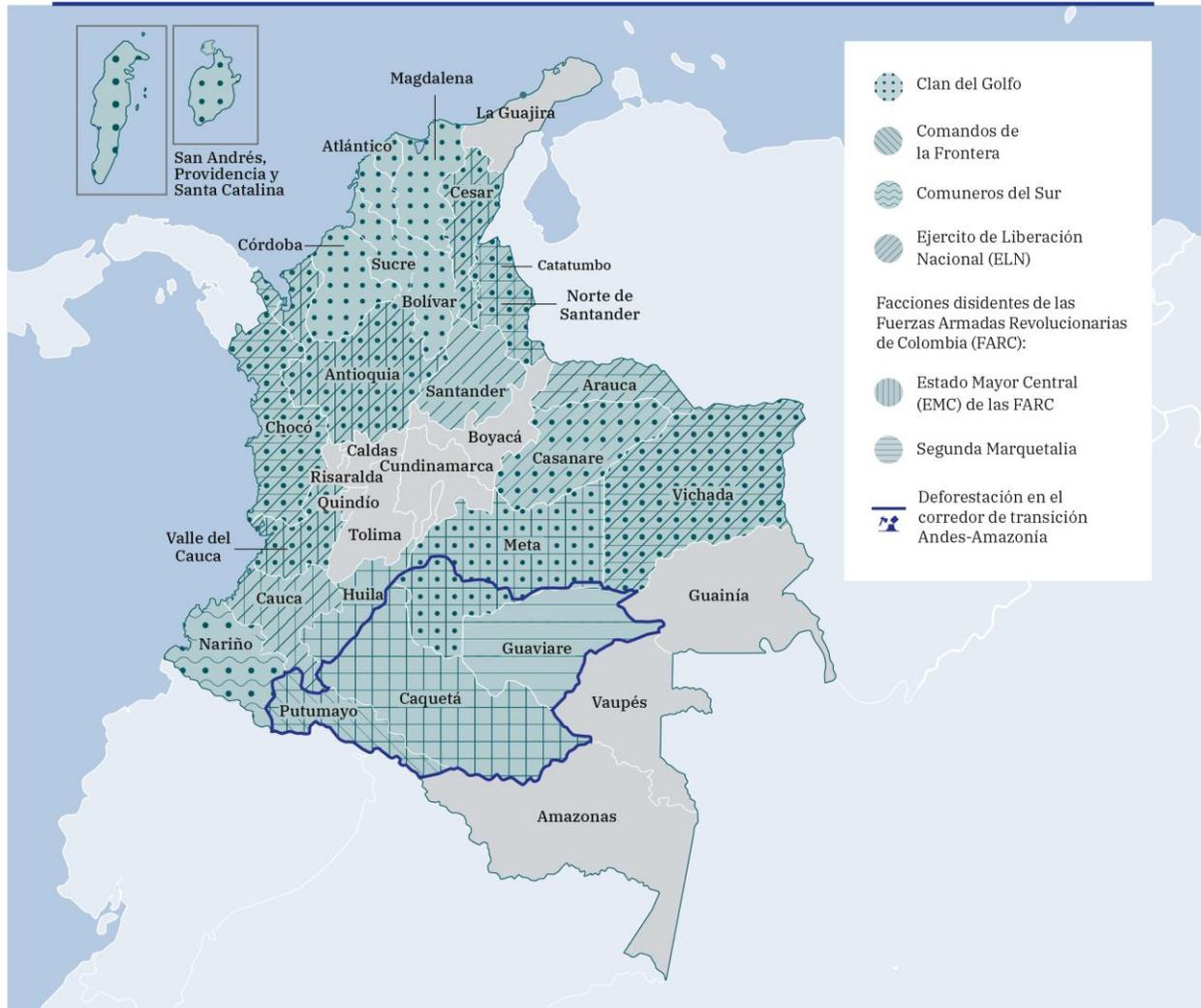


Figura 4. Mapa de presencia más destacada de grupos armados en Colombia

3) La “Paz Total” de Gustavo Petro

El enfoque de “Paz Total” de Petro se basa en un amplio diálogo simultáneo y negociaciones de paz con varios grupos armados. El presidente sancionó una prórroga de la ley 418 de 2011 de Reparación a las Víctimas, traza una política de “Paz Total” y establece el servicio social para la paz, entre otras disposiciones. El texto faculta al Gobierno nacional para entablar diálogos y negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC, como el Estado Mayor Central (EMC), la Segunda Marquetalia, y grupos criminales como el Clan del Golfo. En este marco, los individuos que entreguen armas, proporcionen información sobre rutas de narcotráfico y entreguen bienes y dinero procedentes de actividades ilícitas pueden recibir penas reducidas e inmunidad frente a la extradición (República de Colombia 2022b).

El inicio de conversaciones con el ELN y el EMC y los correspondientes acuerdos de cese al fuego han desempeñado un papel fundamental en la reducción del conflicto, los hostigamientos, el desplazamiento y el confinamiento. Hubo un ligero descenso en las tasas de homicidio; sin embargo, diferentes grupos armados siguen teniendo el dominio en distintas regiones (JEP 2023b; JEP 2023c) (ver figura 4).

Una nueva política de seguridad y defensa refleja un cambio en la lucha contra los delitos medioambientales

El gobierno de Petro introdujo una nueva política de seguridad y defensa en respuesta a las inseguridades persistentes y a las críticas reconocidas a la operación Artemisa. El enfoque pasó de priorizar la persecución a las figuras más visibles de los grupos armados ilegales a proteger a la sociedad civil y las comunidades locales (República de Colombia 2022a). El nuevo enfoque se ha basado en un proceso participativo más amplio y en consultas regionales. El reto consiste en reconstruir la confianza perdida entre la sociedad civil y las fuerzas armadas del Estado. En muchos casos, los grupos armados han instrumentalizado a la población civil, como es el caso de los delitos medioambientales.

El efecto de esta estrategia para el medio ambiente es que prioriza la prevención de la deforestación a través de iniciativas conjuntas con las comunidades. Algunas medidas para implementar las disposiciones del Acuerdo de Paz bajo la administración de Petro incluyeron regulaciones como un procedimiento para acceder y formalizar la tierra, un fondo (de acceso) a la tierra y planes de desarrollo con enfoque territorial. Desde entonces, la deforestación se ha reducido, aunque no se ha detenido por completo y está siendo más selectiva que antes. Los datos acumulados reflejan una reducción del 40% respecto a la línea base de 2021 (174.103 hectáreas). En 2023, la deforestación se registró en 79.256 hectáreas, la más baja de los últimos 23 años. En 2024, este valor aumentó a aproximadamente 107.000 hectáreas (IDEAM y MADS 2024). Se están superando las metas nacionales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, sustentadas en una reducción anual consistente del 20% con respecto a la línea base de 2021. (MADS 2025). La política indica que, aunque la acción militar continúa, ya no se centrará en los pequeños agricultores que se dedican a la deforestación debido a las presiones económicas de las organizaciones criminales. En su lugar, las operaciones militares se centrarán en extinguir incendios y colaborar con las autoridades de investigación para detener a los principales deforestadores (República de Colombia 2022a).

La transición de la militarización a la conservación, basada en acuerdos sociales y en la educación de la comunidad, parece prometedora sobre el papel, pero requiere una implementación acelerada. La estrategia incluye contención y prevención en puntos estratégicos, fortalecimiento institucional, mejora de los procesos judiciales y aumento de las capacidades del IDEAM (International Crisis Group 2023).

Estado de cosas inconstitucional: una “Paz Total” en peligro

La iniciativa de “Paz Total” del presidente Petro, que ambiciosamente pretendía negociar simultáneamente con múltiples grupos armados, empezó con una nota esperanzadora. Los altos al fuego iniciales condujeron a una reducción significativa de los homicidios y los ataques contra las fuerzas gubernamentales, lo que indicaba un posible fin a décadas de conflicto. Sin embargo, el proceso pronto tropezó con importantes obstáculos en diversos frentes.

En 2023, la Corte Constitucional de Colombia dictaminó que el país se encontraba en un “estado de cosas inconstitucional”,¹⁶ basándose en una demanda presentada por víctimas durante el gobierno de Duque. La sentencia reconoce las graves y generalizadas afectaciones a defensores de derechos humanos y líderes sociales. Haciendo eco de decisiones anteriores sobre desplazamiento forzado, sostiene que el Estado ha fracasado rotundamente a la hora de crear condiciones de seguridad para el libre ejercicio de los derechos, proteger a los líderes de forma rápida y eficaz, y desestigmatizar a los líderes sociales (Corte Constitucional de Colombia 2023). Los representantes de las víctimas y los líderes ambientales, comunitarios, étnicos y de

¹⁶ Este mecanismo permite a los jueces obligar a las instituciones estatales a responder mejor a las continuas amenazas contra líderes sociales y de derechos humanos.

género se encuentran entre los más atacados por los actores armados y, por lo tanto, la Corte llamó la atención sobre la urgencia de tomar medidas para detenerlo (Corte Constitucional de Colombia 2023).

Las estructuras armadas ilegales han utilizado la intimidación para amenazar a los líderes de la sociedad civil, ampliando su poder para controlar diferentes esferas de la sociedad. Han cooptado a representantes, los han amenazado o los han expulsado. Los líderes sociales denuncian que, silenciando a una persona, los grupos armados pueden conseguir silenciar a toda la población que representan. Justo después de la desmovilización de las FARC, las Juntas de Acción Local (JAL), organizaciones de base autoorganizadas, desarrollaron manuales de convivencia para abordar las necesidades de la comunidad mediante la toma de decisiones colectivas. Ejemplos de estas normas fueron la prohibición de actores armados en el territorio y la imposición de prohibiciones de tala de árboles. Sin embargo, diferentes facciones disidentes, el ELN y otros grupos armados, entraron en el territorio e impusieron nuevas normas en las regiones, alterando los manuales de convivencia locales. De esta manera, han roto el tejido social para construir su orden en la vida cotidiana. Además, estas estructuras ilegales también han ofrecido servicios de justicia, resolviendo disputas sobre límites de tierras entre barrios, por ejemplo. Los grupos armados también han ofrecido protección contra otros actores violentos, sosteniendo en su mayoría economías ilegales y creando una dependencia de la presencia de dichos grupos. En las zonas de conflicto, las comunidades pueden depender de los grupos armados para sobrevivir y facilitar el acceso a recursos que, de otro modo, serían inaccesibles o poco fiables (ACAPS 2023). En cuanto a las múltiples negociaciones incluidas en el enfoque de “Paz Total”, uno de los principales retos reside en las complejidades jurídicas de extender los beneficios de la justicia transicional a las facciones disidentes de las FARC que no cumplieron con el Acuerdo de Paz de 2016, pero buscan las ventajas de dichos mecanismos. Este problema se ve agravado por la necesidad de establecer un marco de justicia transicional distinto para el Ejército de Liberación Nacional (ELN), un proceso estancado en un congreso en el que los partidos de la oposición tienen la mayoría. Además, el Clan del Golfo o AGC, un poderoso grupo armado que controla territorios a lo largo de Antioquia, de las costas del Pacífico y del Caribe, ha sido excluido en gran medida de la iniciativa de “Paz Total”. El presidente Petro autorizó el diálogo con las AGC en julio de 2024, que comenzó a principios de febrero de 2025, lo que indica un posible cambio de política; sin embargo, la ausencia de un marco legal para la desmovilización de las bandas o la “transición a la legalidad” ha obstaculizado un progreso significativo.

La gestión simultánea de múltiples negociaciones con los principales grupos armados fragmentados muestra la dificultad de negociar con organizaciones que son coaliciones inestables entre facciones. Por ejemplo, la escisión de los Comuneros del Sur en Nariño y Putumayo del ELN puso de manifiesto el limitado control que tiene el mando central del ELN sobre sus frentes regionales. Del mismo modo, las divisiones dentro de la dirección del EMC reflejan las tensiones internas en la Segunda Marquetalia, donde el antiguo mando de las FARC Iván Márquez lucha por mantener la cohesión entre facciones como el Comando de Frontera. Estas fracturas aumentan el riesgo de una escalada de violencia a medida que los grupos escindidos compiten por el control territorial y las facciones excluidas intensifican los ataques contra objetivos gubernamentales (Shuldiner 2025).

Más recientemente, en enero de 2025, el ELN llevó a cabo ataques coordinados en siete municipios de la región del Catatumbo, Norte de Santander, cerca de la frontera con Venezuela, dirigidos contra disidentes de las FARC. Estas acciones incluyeron enfrentamientos armados, asesinatos selectivos y masacres de más de 80 personas, violando el derecho internacional humanitario. La violencia desplazó a unas 40.000 personas, lo que llevó al gobierno de Petro a suspender las conversaciones con el ELN (Trejos Rosero et al. 2025). Para complicar aún más las cosas, la alianza del ELN con el régimen venezolano de Maduro les permite operar impunemente a lo largo de la frontera, controlando la minería ilegal, los cultivos de coca y otras economías

ilícitas. Con la perspectiva de una protección prolongada bajo Maduro durante seis años más, estos grupos tienen pocos incentivos para entablar negociaciones de paz. Mientras tanto, las AGC han ampliado su influencia a pesar de la presión militar sostenida, dispuestas a consolidar su control en medio del aumento de la producción de cocaína y la subida de los precios del oro (Shuldiner 2025).

Los últimos acontecimientos muestran cómo la violencia se ha localizado, los grupos armados se han multiplicado y la lógica del conflicto se ha fragmentado, como lo demuestran las amenazas contra territorios mayoritariamente afrocolombianos e indígenas. El balance de “Paz Total” es lamentable porque, hasta el momento, ningún acuerdo se ha materializado para aliviar el complejo escenario humanitario del país; sólo se espera que las negociaciones con los Comuneros del Sur en Nariño sean una excepción (Johnson 2024).

Deforestación y conversaciones de paz: retos y avances

En los gobiernos de Santos, Duque y Petro, los esfuerzos por alcanzar la paz en Colombia se han caracterizado a menudo por la descoordinación entre las políticas de construcción de paz y de protección del medio ambiente. Sin embargo, el énfasis del gobierno de Petro en la integración de consideraciones medioambientales en los acuerdos de paz, especialmente en regiones como el Guaviare, marcó un cambio de estrategia y ofreció un rayo de esperanza (Taylor 2023). A pesar de ello, el delicado equilibrio entre la negociación de la paz, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente sigue siendo un reto complejo para Colombia.

Tras el Acuerdo de Paz de 2016, facciones rebeldes disidentes del antiguo grupo guerrillero FARC-EP, como el Estado Mayor Central (EMC), se adaptaron a un nuevo contexto en el que grandes terratenientes y acaparadores de tierras aprovecharon la inseguridad jurídica sobre las tierras que antes controlaban las FARC-EP y acudieron a estas zonas para comprar tierras a muy bajo costo (Vélez 2019). El EMC permitía talar a cualquiera que pagara un impuesto por cabeza de ganado y hectárea de tierra comprada o vendida, convirtiendo la deforestación en un negocio rentable.¹⁷

En mayo de 2022, justo cuando Petro pasó a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el EMC prohibió la deforestación en las zonas bajo su control en Guaviare, sur del Meta y partes de San Vicente del Caguán, Caquetá. Como muestra esta declaración de mayo de 2022 del EMC, la deforestación se convirtió en una verdadera herramienta de negociación política para el EMC: *“Este año nadie va a desmontar montes, van a arreglar todos los rastrojos y potreros y cuando tengan todas sus tierras organizadas podrán empezar a desmontar de nuevo con la autorización de las FARC-EP [el EMC se ve a sí mismo como “las verdaderas FARC-EP”], el que sea tan tonto como para desmontar montes será castigado. De 1.000.000 de pesos por hectárea de monte talado”* (Fundación Conflict Responses - CORE y Akörde 2024).

En septiembre de 2022, apenas un mes después de la llegada de Petro al poder, el EMC fue aún más lejos y envió notas de voz de WhatsApp entre las comunidades reafirmando esta orden de prohibir la tala *“hasta que se materialice una solución institucional para los campesinos que carecen de tierras para trabajar en estos cuatro años de gobierno del Dr. Gustavo Petro”* (Fundación Conflict Responses - CORE y Akörde 2024). Estas acciones, según el EMC, fueron “gestos de paz” en respuesta a la política de “Paz Total” de Petro, que pretende negociar con todos los grupos armados que el gobierno considere “políticos”. El gobierno suspendió la Estrategia Artemisa contra la deforestación, lo que significa que no habría más operaciones militares contra los deforestadores. Lo que se produjo, de manera informal, fue un cese de hostilidades medioambiental.

¹⁷ Las primeras unidades que hoy conforman el EMC nacieron en Guaviare en junio de 2016, con el Frente 1, comandado por Iván Mordisco, y en 2017 con el Frente 7, comandado por Gentil Duarte. Inicialmente, Duarte permitió la tala sin restricciones en las zonas bajo su control, y Mordisco hizo lo mismo.

En 2022, en el “arco de deforestación amazónica” -Meta, Guaviare y Caquetá-, áreas influenciadas por el EMC la deforestación cayó un 34% en Guaviare, un 31% en Caquetá y un 26% en Meta (IDEAM s.f.). En 2023, el área deforestada de Colombia se estimó en 79.256 hectáreas, lo que refleja un éxito continuado en la reducción de la deforestación. En comparación con 2022, la deforestación disminuyó un 36% en general y un 38% en la Amazonia colombiana (IDEAM MADS 2024). Esta reducción se atribuyó a la prohibición de la tala por parte de los grupos armados, a los acuerdos de conservación entre el Gobierno y las juntas comunitarias y al fenómeno de La Niña. Sin embargo, la deforestación aumentó a finales de 2024 debido al fenómeno de El Niño y a la “suspensión de los diálogos con las disidencias”¹⁸.

Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2024, las conversaciones de paz con otro grupo disidente, el EMBF (Estado Mayor de Bloques y Frente) en San Vicente del Caguán, Caquetá, se centraron en evitar la tala de árboles cerca de parques naturales. Más de 34 organizaciones campesinas y delegados del Gobierno debatieron la consolidación del *Acuerdo de Participación Social* para abordar las necesidades de la comunidad, oponerse a la deforestación y desarrollar planes de tenencia de la tierra, especialmente en las sabanas del Yarí, en medio de la preocupación por las actividades ilegales de los grupos armados (Ríos Monroy 2024).

Las moratorias impuestas a la tala de árboles como “gesto de paz” pusieron de relieve la compleja interacción entre los intereses económicos y la gestión ecológica, ya que el EMC trataba de equilibrar los beneficios económicos con la conservación de los recursos naturales. Al posicionarse como agentes de protección del medio ambiente, el EMC pretendía legitimar su papel en el paisaje posconflicto y fomentar una narrativa de gobernanza responsable que pudiera resultar atractiva políticamente. Estos hechos demuestran que la agenda de paz ha ofrecido oportunidades para la conservación. Sin embargo, la sostenibilidad de los logros en la lucha contra la deforestación es incierta. El factor clave es cuánto puede hacer el gobierno para garantizar la presencia en las zonas y tomar el control de las economías ilegales, asegurando que las comunidades tengan alternativas de subsistencia.

Economías ilegales - Una guerra contra las drogas revisada

Diferentes enfoques políticos no han abordado integralmente el problema de sustitución de cultivos de coca en Colombia. Tras el Acuerdo de Paz, el presidente Juan Manuel Santos creó el programa PNIS para incentivar a los cultivadores a sustituir voluntariamente sus cultivos ilícitos. La mayoría de los grupos armados dependían en gran medida de la producción de coca para financiar sus operaciones. El programa pretendía evitarlo ofreciendo beneficios estatales a los cultivadores que erradicaran sus cultivos de coca.

Aunque cerca de 100.000 familias campesinas fueron inscritas en el PNIS por el gobierno de Santos, no recibieron la asistencia técnica prometida para la transición a cultivos de sustitución (República de Colombia 2022c). La situación empeoró con el sucesor de Santos, Iván Duque, que congeló completamente la inscripción. Como resultado, casi la mitad de las familias que se ofrecieron voluntarias para el programa de sustitución de coca no se inscribieron. El programa de erradicación de coca se ha ralentizado con el actual presidente, Gustavo Petro, que asumió el cargo a mediados de 2022. La administración Petro pretende destruir unas 20.000 hectáreas (casi 50.000 acres) de cultivos de coca cada año, un 60% menos de lo que hizo la administración Duque (Vía Campesina 2020).

En 2023, Estados Unidos puso fin a su participación de 35 años en la vigilancia del cultivo de coca en Colombia, en consonancia con la nueva Política Nacional sobre Drogas de Colombia (República de Colombia 2023),

¹⁸ Así lo ha declarado la Ministra de Ambiente, Susana Muhamad. <https://www.minambiente.gov.co/ministra-de-ambiente-revela-informe-de-alertas-tempranas-que-muestran-reduccion-del-70-de-la-deforestacion/>

centrada en los traficantes más que en los cultivadores (Goodman 2023). La nueva política pretende ayudar a los campesinos a abandonar el cultivo de coca mediante el acceso a la tierra y servicios de extensión. Además, da prioridad a la investigación y al seguimiento de los flujos financieros relacionados con el tráfico de drogas, al fortalecimiento de la cooperación internacional para dismantelar las redes delictivas transnacionales y a la imposición de sanciones a las personas y entidades – incluidas las ubicadas en el Norte Global – que facilitan el lavado de dinero (República de Colombia 2023).

Por otra parte, los campesinos de Norte de Santander, Putumayo, Cauca y Nariño, donde existen muchos enclaves cocaleros, presentaron denuncias ante la Corte Constitucional. Denunciaron no haber sido incluidos en el programa ni haber recibido apoyo para la transición a una economía legal. En respuesta, la Corte ha ordenado a la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos que cumpla los acuerdos y agilice la implementación. Se ha ordenado al Ministerio de Defensa y al ejército que den prioridad a la sustitución voluntaria frente a la erradicación forzosa, que sólo se considerará si fracasa la sustitución voluntaria y debe tener en cuenta el principio de precaución. La Corte también ha ordenado a las entidades encargadas de implementar el Acuerdo de Paz, incluida la Agencia para la Renovación del Territorio, que revisen los compromisos de sustitución, coordinen esta labor con la reforma rural integral y aceleren la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) (La Silla Vacía 2023).

Desde finales de 2023, se produjo un descenso del precio de la cocaína a nivel mundial. Esto ha creado una dinámica diferente en las regiones afectadas por los cultivos de coca. Por ejemplo, en Tibú, en el noreste de Colombia, entre 2001 y 2022 se perdieron alrededor de 105.000 hectáreas debido a la deforestación, siendo los cultivos de coca un factor importante. El cultivo ha provocado la contaminación del suelo y el agua, así como violencia y delincuencia. Después de una caída del 40% en el valor de la pasta de coca debido a la sobreproducción, la economía rural en Tibú se derrumbó durante 2021 y 2022, ya que ha sido una fuente de sustento para más de 230.000 familias (Monsalve 2022).

Aunque se pide a los agricultores que adopten economías sostenibles, algunos se dedican a actividades que contaminan más el ecosistema, como la extracción ilegal de oro (Dahl 2021). Los agricultores locales dicen tener poca fe en que el gobierno vaya a intervenir para ayudar. No obstante, no han renunciado a encontrar vías alternativas. Según un dirigente agrícola: *“Algunos agricultores han empezado a cultivar yuca, caña de azúcar o cacao (...). La comunidad no puede construir una nueva economía basada en estos cultivos, pero al menos pueden cultivarlos para su consumo”* (Monsalve 2022). Los expertos afirman que la política antidrogas debe involucrar no sólo al Ministerio de Justicia, que lidera la nueva política nacional contra las drogas ilícitas, sino también coordinar con los ministerios de Ambiente, Agricultura y Defensa y la gobernanza de los parques nacionales para manejar adecuadamente las disputas en torno a las economías relacionadas con la coca (Marín et al. 2023).

Los recientes cambios en los precios de la cocaína han creado dos caminos en el panorama del conflicto en Colombia. En diciembre de 2024, el Gobierno avanzó en las conversaciones de paz con una facción del EMC, el EMBF, entablando contactos con líderes regionales en Norte de Santander. Llevaron a cabo más de 125 reuniones de diálogo social con diversas partes interesadas para generar confianza con los grupos armados. Los esfuerzos se centran en 27 iniciativas de transformación territorial en el Catatumbo, que apoyan a los cultivadores de café, cacao, arroz y yuca, a los jóvenes empresarios medioambientales y a los proyectos de los firmantes de la paz en materia de vivienda, abonos orgánicos, acuicultura y ganadería sostenible (El Espectador 2024). Por el contrario, el ELN ha atacado al EMC y a otros disidentes a principios de 2025, culpando al gobierno de tener un pacto con ellos y de intensificar la violencia debido a los cambios en la economía de la coca. Cada grupo, ante las pérdidas derivadas de la reducción de la producción de coca, ha recurrido a actividades como la extracción de carbón, el contrabando, el comercio y la agricultura, todas ellas

acompañadas de extorsión. La coca sigue siendo un medio para ejercer poder político y controlar territorios fuera del alcance del Estado (Trejos Rosero 2025).

Aun teniendo en cuenta los retos en la implementación, el enfoque del presidente Petro sobre la consolidación de la paz, junto con la narrativa de la COP16 de la CNUDB de hacer las paces con la naturaleza, establece lineamientos para una política pública de paz ambiental. A medida que avancen diálogos y negociaciones de paz con diferentes grupos, temas como la planificación agrícola, minera y energética poniendo de relevancia el medio ambiente son esenciales para la estabilidad y el desarrollo. Las instituciones deben establecer una presencia con jueces, inspectores y policías para regular la vida en las zonas productoras de coca y extraer lecciones de las iniciativas locales de construcción de paz ambiental que han tenido éxito. La siguiente sección profundizará en estas iniciativas, ilustrando cómo no sólo fomentan la conservación del medio ambiente, sino que también construyen cohesión social y resiliencia (económica y climática). Colombia puede reforzar sus esfuerzos de construcción de paz aprendiendo de estos modelos de éxito y ampliándolos.

Buenas prácticas locales en materia de medio ambiente, clima y construcción de paz

Con el telón de fondo de estas cambiantes políticas nacionales, esta sección explorará las bases en las que la construcción de paz ambiental realmente toma forma en Colombia. Las iniciativas que examinamos, desde excombatientes que restauran bosques nativos en el Amazonas hasta la forestería comunal y la agroforestería de cacao, demuestran cómo alinear los fondos para la construcción de paz con las inversiones en clima y biodiversidad puede amplificar los beneficios para las comunidades y los ecosistemas. En muchas regiones colombianas existen iniciativas locales que han integrado con éxito proyectos que combinan la protección del medio ambiente y la construcción de paz. Sin embargo, el potencial de estos esfuerzos locales a menudo se ve obstaculizado por la falta de coordinación entre las autoridades nacionales y locales y entre los sectores a nivel nacional. A continuación, presentamos ejemplos y lecciones aprendidas de tales soluciones locales (véase la tabla 3 para un resumen).

Proyecto/Iniciativa	Descripción	Buenas Prácticas/Resultados
Proyectos del GEF posteriores a 2016	Conservación del medio ambiente en puntos clave de biodiversidad.	Esto incluye la sensibilidad ante los conflictos, el compromiso de la comunidad, la reintegración de los excombatientes y el fortalecimiento del tejido social.
Zonas marinas protegidas	Creación de zonas marinas protegidas en el Caribe.	Reduce los conflictos entre las partes interesadas y consigue beneficios medioambientales y sociales.
Restauración forestal	Plantación de árboles autóctonos por excombatientes en el Amazonas.	Restaura zonas deforestadas, promueve el liderazgo femenino y aborda la regeneración del suelo y el agua.
Forestería comunal	Aprovechamiento sostenible de la madera en Guaviare y Caquetá (Noroeste amazónico)	Reduce la deforestación, proporciona medios de subsistencia y promueve el uso sostenible de los bosques.
Diálogo local y apoyo a los medios de subsistencia en	Conservación inclusiva con apoyo comunitario.	Resuelve conflictos territoriales, apoya iniciativas económicas locales y mejora el bienestar.

las zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas		
Medidas colectivas de protección	Autoprotección para los defensores de los derechos humanos y las comunidades.	Crea zonas seguras, impide la entrada de actores armados y protege a las comunidades.
Agroforestería (cacao)	Combina la conservación con la producción agrícola.	Mitiga el cambio climático, proporciona empleo y reduce las disputas por los recursos.
Soluciones basadas en la naturaleza	Aumenta la resistencia de las infraestructuras y las comunidades.	Aborda los riesgos climáticos, promueve la resiliencia de las comunidades e integra las experiencias locales.
Conservación de la biodiversidad	Expediciones e iniciativas educativas.	Promueve el intercambio de conocimientos, fomenta la reconciliación y apoya los conocimientos autóctonos.
Ecoturismo para la paz	Turismo sostenible en zonas en postconflicto.	Fomenta la reconciliación, la restauración ecológica, la preservación cultural y la reinversión económica; involucra a excombatientes y comunidades locales en el desarrollo turístico.

Tabla 3. Soluciones y buenas prácticas de construcción de paz medioambiental en Colombia

Restauración forestal de árboles autóctonos en la Amazonia colombiana por excombatientes¹⁹

Una cooperativa llamada Comuccom trabaja para restaurar la Amazonia colombiana. Su objetivo es plantar y cuidar un millón de árboles autóctonos para contrarrestar la deforestación provocada por la minería ilegal de oro, la ganadería, el cultivo de coca y la tala ilegal. El proyecto tiene una duración aproximada de 8 años y se plantarán 125.000 árboles al año. La cooperativa nació tras el Acuerdo de Paz de 2016 para incluir a lugareños y antiguos combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Durante su fase de reintegración, trabajan como constructores de paz activos en los esfuerzos de restauración de Comuccom para las generaciones futuras.

Comuccom ha creado otra asociación que ahora trabaja para regenerar los suelos empobrecidos por los pastos para el ganado y el cultivo de coca, y para restaurar las fuentes de agua contaminadas por la minería del oro y el uso de mercurio. La Asociación de Mujeres Constructoras de la Libertad es una parte crucial del proceso de restauración de la Amazonia. Promueven el liderazgo femenino para apoyar a las mujeres a trabajar fuera de casa y tienen actividades como el cuidado de abejas silvestres. Aunque el Acuerdo de Paz se firmó en 2016, el conflicto sigue presente a diario. La restauración ecológica de la Amazonia tiene un profundo significado para sanar la relación entre las personas y sus territorios. Puede entenderse como una forma de reparación por los crímenes de guerra y otros tipos de violencia tras el Acuerdo de Paz. A pesar de las amenazas a sus miembros y del reciente asesinato de su presidente en 2022, Comuccom continúa su labor

¹⁹ Información extraída de: Pallaccia, M., 2023: Ex miembros de las FARC se proponen restaurar 1 millón de árboles nativos en la Amazonia colombiana. Mongabay. <https://news.mongabay.com/2023/11/ex-farc-members-aim-to-restore-1-million-native-trees-in-the-colombian-amazon/#:~:text=Language-,Ex%2DFARC%20members%20aim%20to%20restore%201%20million,trees%20in%20the%20Colombian%20Amazon&text=Former%20fighters%20in%20the%20Revolutionary,through%20a%20cooperative%20called%20Comuccom.>

medioambiental en la Amazonia colombiana. Espera ser tenida en cuenta en el enfoque de “Paz Total” de Gustavo Petro como parte de la iniciativa nacional de pago de salarios para la restauración de la Amazonia.

Mapa 3. Ejemplos de proyectos de construcción de Paz Ambiental en Colombia

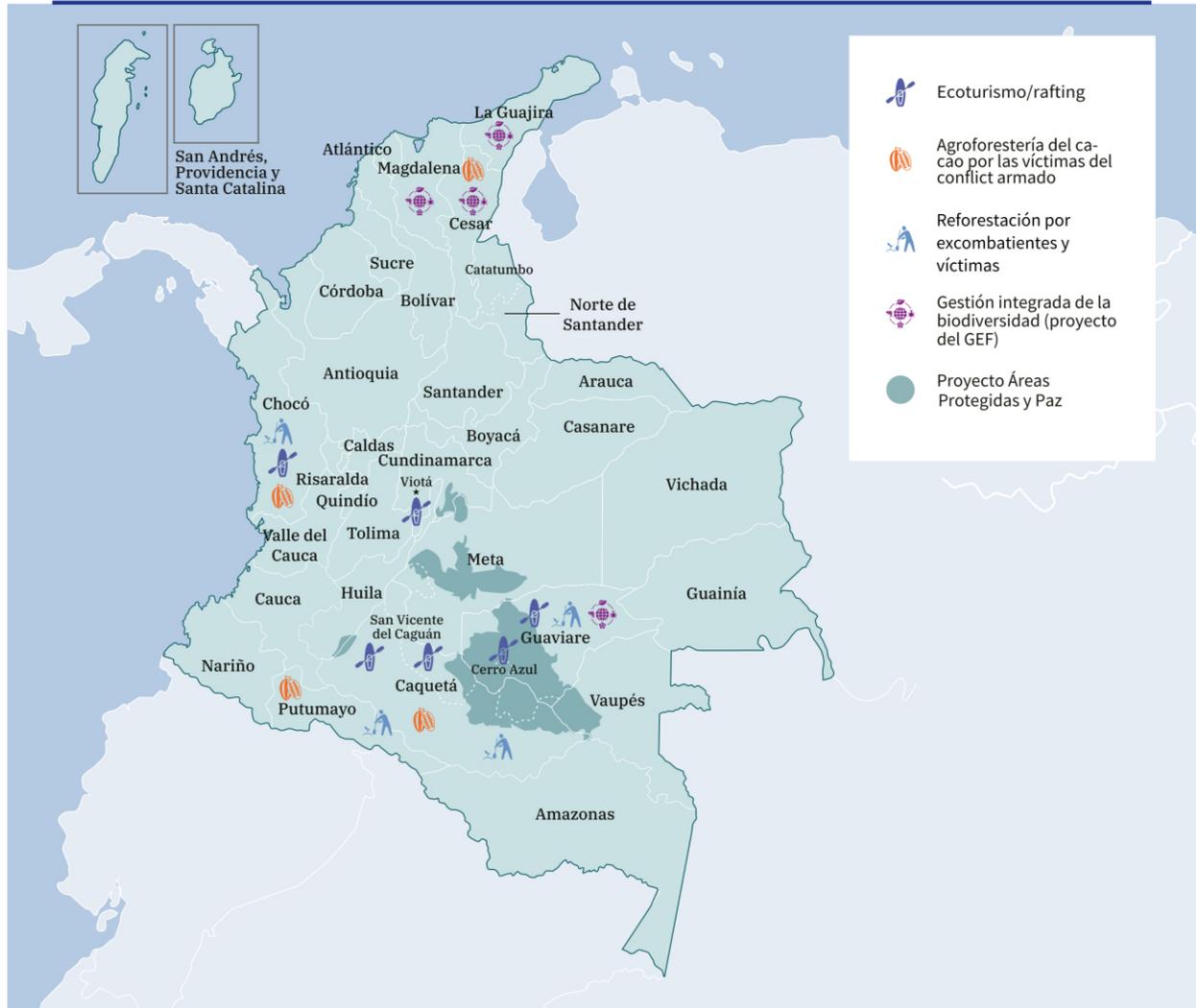


Figura 5. Mapa de ejemplos de proyectos de construcción de paz ambiental en Colombia

Programación del GEF en situaciones de fragilidad y conflicto: Colombia

Para examinar el impacto de los conflictos y la fragilidad en los proyectos medioambientales apoyados por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF siglas en inglés), la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del GEF realizó un análisis en profundidad de algunos de sus 110 proyectos medioambientales. La OEI analizó los proyectos en función de su pertinencia, eficacia, eficiencia y probabilidad de sostenibilidad. La mayoría de los proyectos evaluados recibieron calificaciones globales favorables, lo que significa que, directa- e indirectamente, beneficiaron al medio ambiente local y mundial y a las poblaciones humanas.

El contexto de las operaciones del GEF en el país

En general, los proyectos del GEF diseñados o ejecutados después del Acuerdo de Paz de 2016 son más sensibles al conflicto. Por ejemplo, un proyecto trata de integrar la construcción de la paz a través de la conservación del medio ambiente en la región amazónica. Fomenta la aplicación de un desarrollo con bajas emisiones de carbono para mejorar los medios de subsistencia, emplear a las comunidades locales y reintegrar a los excombatientes. El proyecto se ajusta a las políticas gubernamentales de construcción de la paz. Está fortaleciendo el tejido social de una región en el corazón del conflicto, donde el trabajo habría sido impensable antes del Acuerdo de Paz. Las autoridades medioambientales están entrando poco a poco en zonas que antes se evitaban por motivos de seguridad, y ahora pueden generar confianza, promover el trabajo comunitario y establecer el diálogo (GEF 2017).

Lecciones aprendidas

Uno de los factores más importantes que contribuyen al éxito de un proyecto es la evaluación exhaustiva del contexto nacional, incluida la identificación de posibles riesgos de conflicto. Los proyectos exitosos también implican la participación activa de diversas partes interesadas, utilizando enfoques como el diseño participativo, el seguimiento comunitario y un planteamiento holístico mediante la integración de consideraciones medioambientales con otros objetivos sociales, humanitarios, sanitarios y relacionados con el conflicto. Del mismo modo, el valor de vincular a los pequeños productores con los mercados, integrar la construcción de paz con las intervenciones socioeconómicas e involucrar a las comunidades en el seguimiento de la biodiversidad como socios estratégicos. Por ejemplo, un proyecto de conservación y construcción de la paz en la región del Caribe y el valle del río Magdalena se centró en el ecosistema del bosque tropical seco. Su objetivo era promover el uso sostenible de la biodiversidad, mitigar la deforestación y garantizar los servicios ecosistémicos. Mediante la ejecución de proyectos piloto REDD+ y la promoción de la gestión sostenible de la tierra, la iniciativa generó confianza con las comunidades, fomentando la conservación participativa y garantizando beneficios locales (GEF, PNUD 2021). Este proyecto altamente participativo es un ejemplo de éxito en la consecución de los objetivos del proyecto y en la obtención de beneficios medioambientales, económicos y sociales para las poblaciones implicadas.

Recuadro 1. La programación del GEF en situaciones frágiles y afectadas por conflictos: Colombia²⁰

²⁰ Información extraída de: Bruch, C., G. Batra y A. Anand 2024.

Forestería comunitaria²¹

Desde el Acuerdo de Paz en 2016, el programa de reforestación comunitaria “Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible” (FCDS) ha estado proporcionando un medio de vida para los agricultores y las poblaciones indígenas en tres zonas de los municipios de Guaviare y Caquetá. Estos proyectos han permitido hasta el momento que más de 500 familias vivan del aprovechamiento sostenible de productos maderables y no maderables. Prácticas como la agroforestería redujeron drásticamente la tasa de deforestación en las zonas del proyecto, hasta en un 86% en Cartagena del Chairá y Solano en Caquetá. Con el apoyo financiero de la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega (NICFI por sus siglas en inglés), el proyecto pretende concienciar a la población local de que el bosque sólo puede aportar beneficios económicos cuando se protege y se utiliza de forma sostenible al mismo tiempo.

Los proyectos muestran un gran éxito: Entre abril de 2022 y marzo de 2023, el sur del Caquetá experimentó una disminución del 86% de la superficie deforestada, en comparación con el año anterior. Además, el FCDS también busca fortalecer las capacidades organizativas locales a largo plazo y los derechos de los agricultores a acceder a la tierra. Las zonas que habían sido utilizadas para la producción de coca y habían formado parte del conflicto armado son ahora parte activa de este proceso de paz que mejora las relaciones entre el Estado y sus comunidades locales.

La reforma rural, el acceso a la tierra y la regularización están interconectados con los esfuerzos de conservación del medio ambiente. Una iniciativa piloto a nivel de políticas públicas implica la colaboración entre organizaciones comunitarias y diversas entidades nacionales, regionales y locales, agencias de cooperación y grupos de la sociedad civil. Por ejemplo, en Guaviare, las Unidades Ambientales para la Paz y los Servicios Sociales (UAPSS) sirven como iniciativas piloto que facilitan la inversión social, la regularización de tierras, los acuerdos de conservación con pagos por servicios ambientales, y más. Estas iniciativas comprenden de siete a diez veredas (distritos rurales).

Diálogo local y alternativas de subsistencia para mejorar la gobernanza de las áreas protegidas

Las áreas protegidas y las zonas de amortiguamiento de Colombia son lugares clave de conflictos medioambientales. Diferentes organizaciones internacionales trabajan para implicar a las comunidades locales en los esfuerzos de protección de la biodiversidad. El proyecto Áreas Protegidas y Paz de WWF²² fomenta la colaboración entre la sociedad civil y el gobierno para restablecer el equilibrio ecológico y mejorar el bienestar de las comunidades.

El planteamiento del proyecto consistía en equilibrar los esfuerzos de conservación con la necesidad de apoyar los medios de subsistencia de las comunidades campesinas vulnerables. Al resolver los conflictos sobre el uso de la tierra mediante el diálogo y acuerdos, el proyecto pretende mejorar las condiciones de vida de estas comunidades. Además, el proyecto promueve iniciativas locales para el uso sostenible de la biodiversidad, lo que beneficia a la economía local. Se ha apoyado y reforzado a siete empresas locales, entre ellas de cacao, miel, café, aceite y turismo de naturaleza (Collins et al. 2022).

²¹ Fuente: FCDS 2023: ¡Bajó la deforestación en las zonas de forestería comunitaria de Guaviare y Caquetá! FCDS: <https://fcds.org.co/bajo-deforestacion-en-zonas-de-foresteria-comunitaria/>.

²² Véase <https://www.international-climate-initiative.com/en/project/protected-areas-and-peace-in-colombia-19-iv-081-col-a-protected-areas-and-peace/>

Medidas colectivas de protección

Los defensores de derechos humanos y las comunidades rurales han desarrollado una serie de medidas de autoprotección para protegerse de la violencia generada por todos los actores armados del conflicto. Los afrocolombianos, los grupos indígenas y las comunidades campesinas han utilizado tres modelos similares: la creación de zonas humanitarias, de biodiversidad y de refugios, indicando que el área es sólo para la población civil, impidiendo la entrada de actores armados – legales o ilegales. En diferentes formas, estos modelos han contribuido eficazmente a proteger y asegurar a los defensores de derechos humanos, a la comunidad y a su territorio. En la región del norte del Cauca, se han establecido iniciativas comunitarias dirigidas localmente para reconstruir los tejidos sociales a nivel de base, creando espacios seguros para impedir el reclutamiento en las fuerzas armadas de niños que se quedan solos en casa. Las mujeres del Grupo Indígena Nasa utilizan algunas prácticas de autoprotección comunes a las mujeres defensoras, como compartir denuncias públicas con sus redes indígenas, la comunidad internacional y organizaciones internacionales; y presentan quejas ante funcionarios judiciales y estatales (ABC Colombia 2023) (véase la tabla 4 para una recopilación de mecanismos de autoprotección). Bajo la óptica de la construcción de paz ambiental, el uso sostenible de los recursos mejora los medios de vida y la cohesión social, fortaleciendo este mecanismo de protección colectiva y, por tanto, la resiliencia de las comunidades frente al conflicto armado.

Comunidad	Mecanismo y descripción
Especialmente comunidades rurales	<p>Establecimiento de zonas humanitarias y de biodiversidad.</p> <p>Las zonas humanitarias y de biodiversidad consisten en cercar temporalmente un área, a menudo una pequeña porción del territorio de una comunidad. De este modo, las zonas ayudan a distinguir mejor entre civiles y combatientes. Se trata de señalar que la zona es sólo para civiles, impidiendo la entrada de actores armados, legales o ilegales. Las comunidades rurales también documentan y denuncian las violaciones de los derechos humanos para poder presentar denuncias y exigir el procesamiento de los autores. El acompañamiento internacional garantiza que otros gobiernos, misiones diplomáticas y el público de otros países estén informados de las violaciones de los derechos humanos. Proporcionar fondos para cultivos de subsistencia, apoyo técnico y herramientas garantiza que las comunidades no estén solas y comprendan sus derechos.</p>
Zona de Reserva Campesina	<p>Establecimiento de refugios humanitarios.</p> <p>Debido a las amenazas a sus vidas y a los medios de subsistencia, la Zona de Reserva Campesina creó un mecanismo de refugio humanitario. Se trata de espacios no permanentes a los que las comunidades se trasladan cuando necesitan proteger urgentemente sus vidas y su integridad frente a las violaciones de los derechos humanos. No tienen un calendario definido. Son refugios preventivos hasta que disminuya la violencia en sus pueblos. Su objetivo es llamar la atención sobre posibles violaciones de derechos humanos como el desplazamiento y para promover el diálogo entre la comunidad y el Gobierno colombiano. Existen hasta que se aprueban acuerdos de seguridad y protección con el gobierno. Los refugios humanitarios son fundamentales para que las comunidades puedan mantener el control sobre sus territorios. Las organizaciones nacionales e internacionales actúan como observadoras para garantizar el respeto de los derechos de la población civil.</p>

Comunidad	Mecanismo y descripción
Mujeres del Grupo Indígena Nasa	Asumir el papel de defensores de los derechos humanos. Las mujeres indígenas asumen el papel de defensoras de los derechos humanos haciendo denuncias públicas contra los actores armados y presentando quejas ante funcionarios judiciales y estatales. Esta es una extensión de su tarea tradicional de cuidar y defender la vida de sus hijos e hijas y de su comunidad. Utilizan medidas para garantizar su desplazamiento seguro, como realizar cambios en sus rutinas, activar redes de comunicación y colaborar con organizaciones solidarias internacionales y nacionales que tienen como objetivo proteger a las mujeres. También recurren a prácticas tradicionales de protección acompañadas por la medicina tradicional y los médicos.
Guardia Indígena	Resistencia pacífica y autoprotección. Patrullando sus territorios y exigiendo la salida de los actores armados, las mujeres, hombres y jóvenes de la Guardia se esfuerzan por evitar que los miembros de la comunidad se involucren en el conflicto, especialmente los jóvenes que corren el riesgo de ser reclutados a la fuerza. Promueven la seguridad alimentaria y los derechos humanos y desarrollan mecanismos de protección como los sistemas de alerta temprana. La Guardia puede movilizar a sus miembros rápidamente y confiar en su fuerza numérica para enfrentarse únicamente a actores armados utilizando sus bastones ceremoniales. Además, los pueblos indígenas pueden ejercer el poder jurisdiccional dentro de su territorio y según sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución colombiana y a las leyes nacionales.
Pastoral social	Autoprotección basada en el contexto. El primer paso de las medidas de autoprotección de las comunidades es analizar el contexto y estudiar qué actores están presentes en su territorio y cuáles son sus intereses. El Grupo Afro Pastoral de Quibdó organiza talleres con las comunidades para examinar las realidades a las que se enfrentan en su territorio. La recopilación de esta información es la base para construir estrategias de autoprotección personal y comunitaria. Fortalece sus capacidades organizativas para que las comunidades puedan reclamar sus derechos, denunciar la corrupción y cualquier otra forma de violencia.

Tabla 4. Mecanismos de autoprotección de las comunidades rurales e indígenas²³

Agroforestería de cacao por la paz

La agroforestería de cacao se ha promovido en Colombia para conciliar la conservación con la producción agrícola, apoyando al mismo tiempo la aplicación del Acuerdo de Paz (Iniciativa Cacao, Bosque y Paz 2022). Investigaciones científicas han descubierto que los sistemas agroforestales de cacao ayudan a mitigar el cambio climático provocado por la deforestación y a abren espacios de diálogo sobre el diseño de intervenciones agrícolas, acuerdos de conservación, gobernanza de los recursos naturales y el intercambio de conocimientos. En última instancia, implementaciones productivas crean oportunidades de empleo y

²³ Información extraída de ABC Colombia 2023: https://www.abcolombia.org.uk/wp-content/uploads/2017/06/ABColumbia-Mecanismos_de_autoproteccion_ESP.pdf.

diversifican los medios de vida, lo que hace que las comunidades sean más resistentes a las economías ilegales (Morales Muñoz et al. 2023). Además, la agroforestería de cacao es una cadena de valor relativamente nueva que permite a los agricultores negociar un precio más justo por sus productos e integrar trabajadores rurales.²⁴

Soluciones basadas en la naturaleza (NBS) en una economía verde

NBS²⁵ (por sus siglas en inglés) en Colombia, puede mejorar la resiliencia de las infraestructuras críticas ante los impactos climáticos y los riesgos relacionados con los conflictos. Proyectos piloto en municipios colombianos como La Ceja y Soacha demuestran el potencial de las NBS para hacer frente a los riesgos inducidos por el clima y promover la resiliencia de las comunidades, sirviendo como modelos para su replicación en otras regiones. Para muchas ciudades colombianas, las NBS se entienden como una estrategia multifuncional con grandes oportunidades para afrontar los retos del cambio climático y las pérdidas de hábitat urbano y biodiversidad, beneficiando simultáneamente a los seres humanos y a los ecosistemas (Figuerola-Arango 2020). Como muestra este ejemplo, la planificación participativa de las NBS puede integrar las experiencias de la población local en el diseño de una NBS para lograr una solución contextualizada y arraigada localmente.

Conservación de la biodiversidad y conocimientos indígenas

Colombia BIO es una oportuna iniciativa que echó raíces en 2015. Fue una respuesta directa al desarme de las FARC. El proyecto pretendía aprovechar este importante acontecimiento para explorar regiones en las que las FARC estaban presentes y que ahora son más accesibles. Desde 2016, el proyecto ha patrocinado cuarenta y nueve expediciones, uniendo un equipo diverso de botánicos, micólogos, entomólogos, ornitólogos, herpetólogos y otros científicos, principalmente del país, pero también del extranjero, en un esfuerzo robusto e inclusivo para la conservación de la biodiversidad y la exploración científica.

Las expediciones científicas a los puntos críticos de biodiversidad, zonas anteriormente inaccesibles que se vieron muy afectadas por el conflicto armado pero que ahora son accesibles gracias al proceso de construcción de paz, proporcionan una plataforma para que múltiples partes interesadas con diferentes sistemas de conocimiento, como excombatientes, agricultores, científicos y guardaparques, intercambien conocimientos y promuevan la reintegración pacífica en la sociedad (Nature 2023; Angel Botero 2023). Con su rica biodiversidad, Colombia alberga organismos que podrían servir como materia prima para un futuro en el que los genes y las rutas metabólicas puedan monetizarse, ofreciendo oportunidades económicas prometedoras (De las Quinchas 2018).

²⁴ Un estudio de métodos mixtos incorporó indicadores de percepción para evaluar el impacto de la agroforestería de cacao en la construcción de paz. Una encuesta en la que participaron 429 hogares de agricultores de Caquetá y 500 de Cesar reveló que los participantes creían que los sistemas agroforestales habían ampliado los espacios para el diálogo comunitario. La mayoría de los agricultores también señalaron que la agroforestería disminuía las disputas por el acceso a los recursos naturales de su entorno (Morales Muñoz et al. 2023).

²⁵ Las mejores prácticas de soluciones basadas en la naturaleza en todo el mundo demuestran los beneficios para la resiliencia climática urbana, la calidad de vida de sus ciudadanos y la salud de los ecosistemas (Iniciativa NBS 2024). Por ejemplo, las soluciones basadas en la naturaleza, como la infraestructura verde (por ejemplo, los sistemas de drenaje natural, los amortiguadores de vegetación costera o incluso los jardines en las azoteas de las zonas urbanas), pueden ayudar a mitigar los efectos de las inundaciones, la erosión y la subida del nivel del mar, protegiendo a las comunidades vulnerables y los activos de infraestructura. Estas zonas verdes ayudan a eliminar el carbono de la atmósfera, contribuyen a reducir la escorrentía de las tormentas y las superficies permeables pueden almacenar, infiltrar o evaporar las aguas pluviales y reducir los caudales hacia los sistemas de alcantarillado o hacia las aguas superficiales (IPCC 2023).

Sin embargo, los continuos disturbios en Colombia plantean retos que socavan el impacto potencial de los esfuerzos de conservación en la construcción de paz. Por lo tanto, para avanzar, es crucial aplicar la sensibilidad al conflicto, como demuestra la metodología “Acción sin daño”, para adaptar las estrategias y abordar las fuentes de conflicto al tiempo que se mejora la cohesión social. La participación de excombatientes, guardabosques y miembros de la comunidad en expediciones biológicas demuestra cómo la conservación de la biodiversidad puede fomentar la reconciliación y las oportunidades económicas y proteger ecosistemas vitales, como los de la región amazónica (Ecosystem for Peace 2021).

Una buena práctica para la promoción del conocimiento indígena es el fortalecimiento de la autonomía e interculturalidad de las universidades indígenas, como la Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN) de Popayán, Cauca, que hace parte del Sistema Educativo Indígena (SEIP). La UAIIN fortalece y resalta los conocimientos y saberes indígenas basados en principios de integridad, reciprocidad y complementariedad, alineados con la vida comunitaria y la espiritualidad (Werner 2024). Del mismo modo, la Red de Mujeres Indígenas sobre la Biodiversidad en América Latina y el Caribe (RMIB-LAC), ha ganado reconocimiento en el mundo occidental y ha establecido su conocimiento como una ciencia en el ámbito internacional de la biodiversidad, navegando eficazmente por diversos sistemas de conocimiento (RMIB-LAC s.f.). Adicionalmente, la comunidad Awa en Nariño ha iniciado regulaciones para respetar su sistema educativo autónomo, incorporando el descubrimiento de la naturaleza, el aprendizaje de los ecosistemas y la medicina basada en plantas, contrastando con el modelo educativo occidental convencional que confina el aprendizaje a las escuelas urbanas (Werner 2024).

Ecoturismo para la paz

El ecoturismo está siendo aprovechado como una poderosa herramienta para la reconciliación y la paz. La iniciativa “Territorios de Oportunidad” de la Asociación Colombiana de Turismo Responsable (ACOTUR) promueve seis “destinos emergentes” en zonas rurales como Guapi, El Tambo, Villagarzón, Vista Hermosa, La Macarena y San José del Guaviare. Antes marcadas por la violencia, estas zonas son ahora ejemplo de turismo sostenible y regenerativo, que fomenta la restauración ecológica, la preservación cultural y la reinversión económica (Granada Calderón 2023). En San Vicente del Caguán, la agencia de rafting “Caguán Expeditions” ejemplifica esta transformación. La agencia, dirigida por antiguos guerrilleros y lugareños, ha creado un equipo competitivo de rafting y ha puesto en marcha un festival internacional anual de rafting. Estos proyectos ponen de relieve el paso de la región del conflicto a la paz, con antiguos combatientes que ahora defienden la gestión medioambiental y el desarrollo comunitario. Lo más inspirador son los niños y adolescentes que ahora aspiran a formar parte de este floreciente sector turístico, encarnando un futuro esperanzador para Colombia (Morales Muñoz y Gorriacho 2021).

Beneficios colaterales de una estrategia de desarrollo con bajas emisiones de carbono en Colombia para la paz

Mientras Colombia navega por las complejidades de su transición energética verde, una estrategia de desarrollo con bajas emisiones de carbono – si es inclusiva y justa – abordará simultáneamente las desigualdades sociales y proporcionará a las comunidades marginadas acceso a energía limpia, seguridad alimentaria y mejores medios de vida. Los responsables políticos colombianos deben dar prioridad a la equidad, la viabilidad económica y la seguridad:

- La financiación externa es cada vez más "verde": los primeros en moverse son los mayores ganadores, ya sea entre países o en términos de empresas/sectores dentro de ellos. El Departamento Nacional de Planeación debería utilizar un enfoque espacial ayudando a desentrañar la política, los intereses y los incentivos regionales en torno a sectores clave como la bioeconomía, la fabricación agroindustrial, el transporte y la dinámica de las industrias verdes con una óptica general de sostenibilidad.
- Permitir la participación en los proyectos para influir en la toma de decisiones, especialmente en aquellas regiones que aún dependen del sector del carbón. Reforzar la participación de la comunidad a través de espacios de diálogo abiertos, transparentes e informados, en los procesos de toma de decisiones, es fundamental para fomentar la aceptación social y maximizar los co-beneficios de los proyectos de energías renovables. Al garantizar que las intervenciones aborden los retos interconectados del medio ambiente, la seguridad y la construcción de la paz, estas plataformas pueden contribuir significativamente a la eficacia de las políticas (Schmelzer y Morales Muñoz 2024). Implica mejorar las capacidades de las comunidades para equilibrar las dinámicas de poder y representar adecuadamente los diversos intereses.
- El refuerzo de las Soluciones Basadas en la Naturaleza (NBS por sus siglas en inglés) producirá un crecimiento sostenible al integrar la naturaleza en la planificación territorial. Las NBS no solo recuperan servicios ecológicos, sino que también crean nuevas oportunidades de subsistencia y promueven un sentimiento de apropiación y solidaridad, lo que permite mejorar la resiliencia de las poblaciones vulnerables y marginadas ante los conflictos y los riesgos climáticos.
- Fomentar el crecimiento inclusivo y la resiliencia integrando la adaptación al clima en los programas de protección social para establecer redes de seguridad para las poblaciones vulnerables que dependen de un clima estable durante la transición a una economía baja en carbono. Los gobiernos nacionales y regionales deben actuar como mediadores imparciales y generar confianza a través de diálogos vinculantes.

Recuadro 2. Beneficios colaterales de una estrategia de desarrollo con bajas emisiones de carbono en Colombia para la paz

Recomendaciones para la Política Pública de Paz Ambiental (PPA) en Colombia

Ante los crecientes retos que plantean no sólo las economías ilegales y la degradación medioambiental, sino también el legado perdurable del conflicto y los impactos cada vez mayores del cambio climático en las regiones fronterizas de Colombia, es imperativo contar con una estrategia nacional y un marco político integral. Este marco debería coordinar la acción climática y medioambiental con los esfuerzos de construcción de paz, centrándose específicamente en estas zonas vulnerables afectadas de forma

desproporcionada por la violencia y la degradación. Es importante conciliar diversos mandatos operativos y conjuntos de conocimientos técnicos, empezando por diagnósticos que reconozcan de forma holística las interacciones, y riesgos en cascada entre clima, paz y seguridad. La compleja interacción entre el desarrollo rural respetuoso con el medio ambiente, el imperativo de legitimidad del Estado y la acuciante necesidad de generar ingresos exige un enfoque matizado. El gobierno nacional, la comunidad internacional, las ONG y el sector privado deben colaborar estrechamente para aplicar el siguiente conjunto de recomendaciones políticas.

Recomendaciones para el Estado Colombiano

1) Establecer una Política Pública de Paz Ambiental (PPA) más ambiciosa

Creación de una PPA integral: El panorama político de Colombia cuenta con instrumentos para promover la acción climática, la conservación y las iniciativas agrícolas con beneficios para la paz, como la participación de excombatientes y víctimas. Sin embargo, estos instrumentos no se han ampliado y Colombia carece de una política explícita de paz ambiental. El gobierno colombiano necesita PPA que integre la protección ambiental y la acción climática en los esfuerzos de construcción de paz.

Una PPA abre el espacio para una presencia estatal más sólida, más allá de la militar, pero incluye estrategias de aplicación de la ley y defensa cuando es necesario. Una PPA dirigida por el Estado debería coordinar a las autoridades civiles y de seguridad y tener una comprensión contextual más amplia de la economía política y la dinámica ecológica de las zonas afectadas por el conflicto. Esta política debe sentar las bases para invertir en mecanismos de protección eficaces para los líderes medioambientales que trabajan con las comunidades locales. Las instituciones deben establecer una presencia con jueces, inspectores y policías para regular la vida en las zonas productoras de coca, generar alternativas económicas y extraer lecciones de las iniciativas locales de construcción de paz ambiental que hayan tenido éxito.

Un Estado comprometido con la dinámica local y que responda a los agravios históricos de las poblaciones afectadas, sobre todo en torno al acceso a los recursos naturales, mejora su legitimidad. La reparación de las relaciones entre comunidades limitará las oportunidades de los actores violentos en estos territorios, lo que se traduce en una cohesión social más amplia, condición para un mayor desarrollo económico y prosperidad.

Proteger eficazmente a las poblaciones vulnerables: Para abordar eficazmente la violencia dirigida contra las comunidades vulnerables, como el reclutamiento de niños, la violencia sexual y las restricciones de movimiento, los acuerdos de alto el fuego existentes con los grupos armados pertinentes deben incluir estas preocupaciones específicas. La prioridad del gobierno nacional debe ser proteger a las poblaciones vulnerables y respetar las normas de derechos humanos en las zonas afectadas por el conflicto. Los protocolos en las negociaciones con el EMC, la Segunda Marquetalia, las AGC y el ELN deben prohibir explícitamente prácticas como el confinamiento forzado, el secuestro, el reclutamiento de menores, la violencia de género y los delitos ambientales.

Establecer un diálogo con grupos armados poderosos: Las decisiones relativas a grupos criminales de gran impacto como las AGC son esenciales, ya que poseen importantes recursos e influencia territorial. Una negociación y disuasión efectiva con las AGC y otros grupos criminales de cara al futuro es imprescindible para evitar interferencias con otros procesos de paz. Iniciar un diálogo con estos grupos utilizando temas ambientales como punto de entrada, como la gestión de los recursos naturales, respaldado por gestos de buena voluntad, puede sentar las bases para discusiones a medio y largo plazo, especialmente dado que las comunidades afectadas apoyan el establecimiento de un diálogo con los Gaitanistas para acceder a los recursos relacionados con la tierra. Una PPA puede facilitar una negociación transparente con las poblaciones locales para ofrecer beneficios claros para la acción colectiva y la resolución de disputas sobre agravios

estructurales como los derechos agrarios y los usos sostenibles de la tierra, que los actores armados utilizan en gran medida para ganar legitimidad.

Integración de la acción climática, la construcción de paz y la financiación del desarrollo: En Colombia, las poblaciones más vulnerables están sufriendo la carga de los impactos del cambio climático y la violencia. La fragilidad estructural crea un círculo vicioso que se refuerza y dificulta la creación de resiliencia. Los enfoques medioambientales de construcción de paz ofrecen una oportunidad para aplicar el triple nexo, que combina la ayuda humanitaria, el desarrollo y la construcción de paz. El gobierno debería dar prioridad a las inversiones dirigidas a la indemnización de las víctimas, la restitución de tierras y los programas de retorno y reasentamiento. Al invertir en subvenciones a largo plazo que apoyen el acceso y la gestión transparente de los recursos naturales como la tierra, los más necesitados tendrán una vía hacia la autosuficiencia. También es importante superar las barreras estructurales y liberar el potencial de las comunidades que viven en entornos ricos y biodiversos que sirven como sumideros de carbono. Las inversiones estratégicas pueden incluir el apoyo financiero a proyectos agroforestales, infraestructuras para conectar los mercados rurales, proyectos de energías renovables que beneficien directamente a las comunidades locales proporcionando electricidad para usos productivos (Irena y OIT 2022), empresas de ecoturismo que potencien el desarrollo de capacidades y programas de micro-financiación adaptados a los empresarios locales. Estas inversiones abordan las necesidades económicas inmediatas, ofrecen reparaciones a las víctimas, integran a los antiguos combatientes y garantizan la conservación a largo plazo de ecosistemas críticos (véase el recuadro 2).



Amazonas, Colombia © Gabriel Guillén, Pixabay

2) Mejorar la integración y coordinación de la Política Pública de Paz Ambiental (PPA)

Coordinar las políticas gubernamentales: La falta de coordinación y alineación entre las agendas agraria y de conservación ha retrasado los avances en la garantía de los derechos indígenas y campesinos, exacerbando el conflicto social en las zonas periféricas. Es imperativo coordinar políticas y programas entre varios organismos gubernamentales con una perspectiva de paz, incluyendo el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), las autoridades de Parques Naturales Nacionales (PNN), el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), la Unidad de Restitución de Tierras (URT), la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR). Al adoptar una política de paz ambiental más amplia, el gobierno puede integrar el presupuesto nacional y promover diálogos que reúnan diferentes perspectivas sobre las economías de conflicto localizadas y dependientes del contexto.

Alinear la Reforma Rural Integral y una estrategia de desarrollo verde: La PPA debe alinearse con las disposiciones de la reforma rural integral y abordar los retos ambientales y climáticos a través de una estrategia de economía verde. Por ejemplo, promover la agroforestería en tierras cuya propiedad haya sido aclarada es una estrategia crítica para mitigar el cambio climático en zonas de amortiguamiento y promover la paz. El establecimiento de incentivos a nivel político para animar a los agricultores a realizar la transición hacia prácticas sostenibles de uso de la tierra pone de relieve sus beneficios para la resiliencia climática y la construcción de paz. El Estado colombiano debe desarrollar el apoyo a la financiación a largo plazo de la conservación de ecosistemas con alto contenido de carbono (por ejemplo, páramos, humedales, pastizales, manglares y bosques). Algunas de estas medidas tienen efectos inmediatos, mientras que otras, como la restauración de ecosistemas, la recuperación de suelos degradados o la (re)forestación, necesitarán décadas para ofrecer resultados medibles. Sin embargo, muchas tecnologías y prácticas de gestión sostenible de la tierra son financieramente rentables en un plazo de tres a diez años (IPCC 2023), y esas tienen el beneficio añadido de un proceso simbólico de restauración del tejido social o reconciliación.

Enfoques integrados para sistemas sostenibles de uso de la tierra, restauración de ecosistemas e indemnización de las víctimas: Los responsables políticos deben adoptar estrategias integradas que abarquen la aplicación de la ley, iniciativas económicas (como la promoción de economías verdes y sistemas sostenibles de uso de la tierra) y dimensiones sociales (como programas de extensión rural y asociaciones). El gobierno nacional debería coordinar políticas que fomenten la restauración y la integración de sistemas sostenibles de uso de la tierra a nivel de paisaje, en sincronía con la aplicación de los “planes de zonificación medioambiental” surgidos del Acuerdo de Paz. Fomentar el desarrollo de mercados eficaces que reconozcan y recompensen los esfuerzos de sostenibilidad de los agricultores y utilizar una cooperación internacional en sincronía con los Acuerdos de París para promover sistemas resilientes para los pequeños agricultores son pasos esenciales.

La esencia de la restauración de ecosistemas, que implica un proceso a largo plazo, también tiene el poder simbólico de restaurar el tejido social de las comunidades implicadas y de apropiarse de las iniciativas. La restauración puede ser una forma de compensación mediante el trabajo de los victimarios para las víctimas. Esto requiere gestión, trabajo manual e investigación en ciencias sociales, naturales y agrícolas. La restauración de los hábitats naturales debe incluir la elección entre las innumerables especies autóctonas de los ecosistemas locales de Colombia. Más allá de una acción puntual de reforestación de árboles, implica nutrir y sostener las plantaciones iniciales hasta que sean autosostenibles. Para ello, es fundamental que se garanticen ingresos estables a las comunidades al principio de la iniciativa. Por ejemplo, compartir sus conocimientos con otros contextos y recibir una compensación por ello (CNUCLD 2024).

Integrar la conservación inclusiva y sensible a los conflictos: Para garantizar el mantenimiento sostenible de la riqueza natural es necesario un enfoque multidimensional que incluya el desarrollo de capacidades, el diálogo y la creación de alternativas de subsistencia sostenibles mediante la producción de conocimientos sobre los recursos biológicos y su utilización en las zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas. Si se gestiona eficazmente, este enfoque puede contribuir significativamente a los esfuerzos de construcción de paz.

3) Fomentar la Política Pública de Paz Ambiental (PPA) con una aplicación descentralizada

Promover procesos de construcción de paz descentralizados pero coherentes: Para construir una paz sostenible, el Estado colombiano necesita abordar los conflictos sociales de forma sistemática y proactiva para evitar la acumulación de agravios que supongan un riesgo de reanudación de la violencia. Dado que las autoridades locales son las mejor situadas para entender y responder a los conflictos sociales locales, la PPA debería ser de alcance nacional pero descentralizado, con los presupuestos correspondientes para ser implementado localmente. Una PPA descentralizada capacita a los gobiernos locales para coordinar los esfuerzos desde la base, aprovechando sus conocimientos y capacidades locales al tiempo que reciben el apoyo de las instituciones nacionales. El establecimiento de plataformas de diálogo que reúnan a las partes interesadas nacionales y locales, incluidos los pueblos indígenas, los afrocolombianos, los agricultores y otros grupos marginados, fomentaría la rendición de cuentas y alinearía los intereses.

Coordinar las circunscripciones nacionales y locales: La inmensidad de los bosques hace que el control centralizado sea poco realista, lo que subraya la necesidad del compromiso local. El gobierno tiene que identificar adecuadamente las estructuras de gobernanza existentes y comprometerse con los contactos adecuados en cada comunidad. Es esencial capacitar a las comunidades locales para que resuelvan los vacíos de gobernanza en ecosistemas críticos, ya que son las mejor situadas para proteger la selva tropical. Hay que apoyar a los pueblos indígenas, los afrocolombianos y las comunidades rurales. Usando soluciones técnicas como el uso de drones, seguimiento por satélite y observaciones tradicionales, las comunidades pueden gestionar eficazmente sus tierras y detectar a los invasores implicados en delitos medioambientales. Además, es necesario establecer canales de comunicación, mecanismos de coordinación y mejorar la confianza con las fuerzas armadas gubernamentales legítimas para responder contra los actores violentos. La aplicación de una PPA puede cerrar la brecha de gobernanza a nivel local, reduciendo el atractivo de ser un rival de las instituciones estatales y garantizando un grado de independencia y respeto por las estructuras de gobernanza local existentes (por ejemplo, la Zona de Reserva Campesina y las reservas indígenas).

Impulsar un sistema de justicia más eficaz a nivel local: El sistema de justicia colombiano debe reconocer, integrar y apoyar financieramente a las autoridades locales tradicionales y a los sistemas comunitarios para resolver conflictos, especialmente en torno a la gestión de los recursos naturales. El sistema debe responder eficazmente contra la corrupción de las autoridades encargadas de delitos ambientales, ya que esto erosiona la confianza con las comunidades. Por último, es fundamental fomentar las asociaciones para integrar a las víctimas, como los campesinos sin tierra, en las actividades de conservación y participar en los procesos de restauración de los ecosistemas.

Integrar los sistemas de conocimientos indígenas en la conservación de la biodiversidad y la forestería comunitaria: La elaboración de legislación para fomentar las iniciativas de forestería comunitaria en estrecha coordinación con las autoridades étnicas y locales y las actividades de construcción de paz debe ser una prioridad. Esto debería garantizar la financiación adecuada, la asignación de tiempo y el apoyo técnico para hacer avanzar las economías y los servicios ecológicos en las zonas más marginadas de Colombia. La

legislación nacional debería facilitar una transición fluida hacia la forestería comunitaria, capacitando gradualmente a las comunidades organizadas para que asuman funciones de gestión, con el apoyo de una supervisión y verificación continuas por parte del gobierno.

Aplicar políticas que tengan en cuenta las cuestiones de género: La integración de políticas sensibles al género en la PPA reconoce el papel de las mujeres, personas LGBTIQ+ y hombres de masculinidades no hegemónicas en la protección del medio ambiente y los empleos verdes y garantiza su participación equitativa en los procesos de toma de decisiones. El gobierno colombiano debería apoyar programas que aborden los desequilibrios de género y promuevan la participación activa de las mujeres en la tecnología verde a través de la formación para acceder a empleos y medios de vida verdes.

Recomendaciones para la comunidad internacional

El proceso de construcción de paz en Colombia es crucial no sólo para el país, sino también para toda la región latinoamericana. Sus efectos indirectos beneficiarán a los países vecinos, incluida la reducción de la violencia relacionada con el comercio de droga, ya que Colombia es un lugar crítico debido a su posición geográfica estratégica. El Acuerdo de Paz colombiano ha estado respaldado durante muchos años por actividades diplomáticas. El siguiente conjunto de recomendaciones se dirige a la comunidad internacional en general y a las instituciones en particular.

En primer lugar, se puede apoyar la construcción de una PPA colombiana integrando mecanismos de financiación climática/medioambiental con fondos que apoyen enfoques proactivos de paz dentro de proyectos climáticos, agrícolas y medioambientales; así mismo, integrar una lente climática y aprovechar la oportunidad que la gestión de los recursos naturales y la acción climática aportan a los esfuerzos de construcción de paz en relación con los medios de vida y la reintegración.

En segundo lugar, es crucial que la financiación de la lucha contra el cambio climático en estas regiones se oriente hacia un marco descentralizado, basado en subvenciones y en la reducción de la deuda, capaz de funcionar eficazmente en condiciones difíciles y de crisis, incluidas épocas de inestabilidad de la gobernanza y en zonas remotas. Un sistema de este tipo debe persistir independientemente de los cambios de liderazgo y capacitar a las organizaciones locales para que tomen la iniciativa a la hora de responder a los retos medioambientales. Este planteamiento garantiza la resistencia y un impacto sostenido, incluso frente a incertidumbres políticas o dificultades de acceso, beneficiando a los más vulnerables.

Recomendaciones para la UE

1) Apoyar el cumplimiento de los diálogos de paz

En el contexto de los diálogos de paz en curso con los grupos armados, la comunidad internacional y los países de la UE pueden servir de garantes para asegurar el cumplimiento y la supervisión efectiva de los alto el fuego, protegiendo así a las comunidades. Al promover la aplicación de una política de “Paz Total” que se alinee con las estrategias de seguridad y defensa, la UE puede contribuir significativamente a la estabilidad duradera y a la resiliencia de las regiones afectadas por conflictos. Además, la UE debería abogar por la integración de los factores medioambientales y de seguridad climática en las negociaciones de paz, ya que este enfoque es crucial para abordar las causas profundas de los conflictos y podría servir de modelo para futuros diálogos.

2) Reforzar los acuerdos económicos (bajos en carbono)

La UE ha mostrado interés en apoyar la diversificación económica hacia una economía con bajas emisiones de carbono reforzando los acuerdos económicos en sectores clave como la bioeconomía, la silvicultura, las energías renovables y los servicios. Es vital establecer periodos de transición adecuados para integrar las

inversiones del sector privado en las iniciativas de construcción de paz ambiental a nivel local. En particular, recomendamos que la UE proporcione financiación específica para reforzar el sector verde emergente en Colombia. Dicha inversión debería dar prioridad a evaluaciones exhaustivas que integren la sensibilidad al conflicto en las zonas rurales, garantizando que los contextos socioeconómicos y de seguridad locales se tengan muy en cuenta. Asegurando que la UE y las empresas multinacionales respalden sólidamente el apoyo, estas medidas fomentarán una transición más resistente y equitativa hacia el desarrollo sostenible en todo el mundo.

3) Impulso a unas normas comerciales mundiales más justas

Los exportadores de muchos sectores deben adaptar sus técnicas de producción y trazabilidad para mantener el acceso al mercado de la UE y, cada vez más, a otros mercados. Un diálogo transparente y abierto que nivele el campo y garantice que la legislación respetuosa con el medio ambiente no interrumpa las cadenas de valor internacionales en las que trabajan millones de personas, debería ser una prioridad para permitir un comercio responsable y equitativo que tenga un impacto en el desarrollo de Colombia. De esta manera, el gobierno y los actores del sector privado (europeo y colombiano) que inviertan y adopten vías sostenibles y bajas en carbono podrán aprovechar los nichos de mercado que se alineen con la normativa de la UE. Con el tiempo, esto convergerá en un estándar global más elevado (Deforestation Free Finance s.f.).

La UE puede adoptar criterios más flexibles en relación con las certificaciones de las etiquetas ecológica para evitar que la carga de la inversión recaiga desproporcionadamente en los eslabones más pequeños y vulnerables de la cadena de valor. Además, la UE debe abogar por políticas de contratación justas que den prioridad a los bienes producidos de forma sostenible y garanticen unas condiciones de contratación equitativas para los agricultores colombianos. Esto incluye ofrecer mejores precios, contratos a más largo plazo y apoyo para cumplir las normas de certificación exigidas por los mercados europeos.

Además, la UE debería animar a las empresas multinacionales que operan en Colombia a invertir en prácticas sostenibles integrando el cumplimiento de las normas medioambientales en sus programas de responsabilidad social corporativa para lograr cadenas de valor más justas y ofrecer incentivos para garantizar que el sector privado comparta los costes de la transición hacia una deforestación cero y una producción baja en carbono. Esto puede incluir la cofinanciación de proyectos de reforestación, la adopción de políticas de abastecimiento sostenibles y el apoyo a los esfuerzos locales de conservación.

4) Apoyar una agricultura resistente al clima

La aplicación de las nuevas leyes contra la deforestación de la UE y el Reino Unido, que afectan a sectores colombianos como el petróleo y la minería, requiere proporcionar alternativas económicas viables basadas en empresas agroalimentarias sostenibles. La UE debe seguir ampliando su apoyo a la agricultura resiliente al clima en Colombia, al tiempo que invierte en investigación académica de alto nivel que fomente empresas con bajas emisiones de carbono. La investigación académica desempeña un papel crucial en el desarrollo de tecnologías innovadoras y prácticas sostenibles, que pueden transferirse a las empresas locales para mejorar su competitividad y sostenibilidad. Mediante el establecimiento de asociaciones para la coproducción de conocimientos y el avance de la investigación en técnicas agrícolas sostenibles, uso de energías renovables en la agricultura y cadenas de suministro eficientes en carbono, la UE puede ayudar a las empresas colombianas a adoptar modelos bajos en carbono, abriendo nuevas oportunidades económicas. Por último, la UE debe invertir en iniciativas que construyan cadenas de valor más inclusivas y fiables, garantizando que los pequeños agricultores y las comunidades locales se beneficien de la resiliencia climática y del comercio. Proporcionando asistencia técnica y acceso a financiación climática, la UE puede ayudar a los agricultores a

mejorar sus prácticas de producción y a conectar con compradores europeos que buscan cadenas de suministro fiables que proporcionen productos sostenibles y saludables.

Recomendaciones para la cooperación internacional, las ONG y las organizaciones de la sociedad civil

En Colombia, las estrategias para mejorar la gobernanza local y medioambiental deben centrarse en promover diálogos y colaboraciones intersectoriales continuos entre diversas partes interesadas, incluidas las entidades gubernamentales a todos los niveles, el sector privado, las comunidades indígenas y las organizaciones de la sociedad civil. Estas iniciativas pueden aprovechar las plataformas comunitarias existentes y fiables. Las organizaciones multilaterales y las ONG internacionales deben dar prioridad al desarrollo de capacidades y al apoyo a las comunidades locales, para que puedan defender sus intereses en los foros políticos de forma eficaz. Este apoyo debería hacer hincapié en los siguientes componentes de un enfoque político de construcción de paz ambiental en la práctica:

1) Promover la conservación y la gobernanza medioambiental en favor de la paz

Una política de gestión forestal en una zona afectada por un conflicto no se convierte automáticamente en una política de paz ambiental; necesita salvaguardias específicas. En Colombia, la atención debe centrarse en la gobernanza sensible al conflicto de las áreas protegidas (AP) y en su papel a la hora de abordar los conflictos socioambientales. Las ONG internacionales y locales pueden facilitar el diálogo y la colaboración entre las partes interesadas en la gobernanza de las áreas protegidas, como los agricultores, el sector privado, las comunidades étnicas y las autoridades oficiales. Este enfoque es crucial para una toma de decisiones participativa y reforzará la gobernanza local y medioambiental. Las ONG internacionales y los donantes pueden ayudar a desarrollar sistemas de información y seguimiento de los ecosistemas, incluidos sistemas de alerta temprana de catástrofes. Estas herramientas pueden mejorar la toma de decisiones y abordar los problemas de la escasa presencia del Estado y la marginación política. Además, pueden promover iniciativas de ciencia ciudadana para fomentar la cooperación entre distintos grupos, reducir los prejuicios y fomentar la confianza dentro de las comunidades.

2) Apoyar la participación local en la tenencia y el uso de la tierra

Las organizaciones ecologistas deben hacer hincapié en la centralidad de las actividades relacionadas con la tierra, incluido el desarrollo de capacidades para una mayor participación de las comunidades locales en el acceso a la tierra y su formalización. Reforzar las acciones relacionadas con el acceso a la tierra contribuye a crear confianza entre las comunidades y el gobierno, fomentando una paz positiva.

3) Coordinación entre agencias

Las ONG y el sistema de la ONU pueden liderar el apoyo a los procesos de articulación entre agencias gubernamentales y el diálogo intersectorial, haciendo hincapié en la importancia de la colaboración con agencias nacionales como la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia Nacional para la Renovación del Territorio y los Ministerios de Agricultura y Ambiente.

Conclusión

Colombia se encuentra en una encrucijada en la que se unen enormes desafíos con oportunidades. El país se enfrenta a la complejidad de múltiples grupos armados que se benefician de delitos medioambientales y

economías ilícitas, a una corrupción generalizada que socava la gobernanza y a los crecientes efectos adversos del cambio climático en su economía. El imperativo de la transición a una economía con bajas emisiones de carbono sin poner en peligro las finanzas del Estado añade otra capa de complejidad. Sin embargo, dentro de estos retos, los enfoques integradores como la paz ambiental ofrecen esperanza. Al integrar las acciones medioambientales y climáticas con los esfuerzos de construcción de paz y la seguridad, Colombia puede aprovechar los co-beneficios que abordan múltiples cuestiones simultáneamente. Para hacer realidad esta visión, es esencial ampliar las buenas prácticas locales existentes y las lecciones aprendidas de la construcción de paz medioambiental que han demostrado ser prometedoras.

Una PPA permitirá al gobierno colombiano aplicar un conjunto coherente de prácticas integradas en múltiples sectores políticos y mandatos. En primer lugar, a nivel comunitario, se ha demostrado que los proyectos de paz ambiental promueven la acción colectiva y la cooperación local, y fomentan un sentimiento de pertenencia a una nueva comunidad de práctica. Esto, a su vez, fomenta la confianza entre iguales y mejora la cohesión social y la resiliencia climática.

En segundo lugar, a nivel nacional y en las zonas afectadas por el conflicto, Colombia puede ofrecer a los grupos armados alternativas viables llevando a cabo con ellos negociaciones sensibles al clima que aborden la interconexión de transitar desde las economías ilegales hacia un uso sostenible de los ricos recursos naturales. Esta estrategia integrada no sólo mitiga la degradación medioambiental y aumenta la resiliencia climática, sino que también ofrece alternativas económicas viables a las actividades ilegales, reduciendo así el atractivo del conflicto armado. Animarles a deponer las armas y adoptar nuevos papeles como guardianes de la naturaleza podría conducir a medios de vida dignos para víctimas, excombatientes, jóvenes y mujeres.

En tercer lugar, una vez alcanzado un Acuerdo de Paz, una PPA puede repercutir positivamente en los esfuerzos de reconstrucción tras el conflicto. Promover usos sostenibles de la tierra tras los procesos de restitución puede servir simultáneamente de marco para compensar a las víctimas y reintegrar a los desplazados y excombatientes. De este modo, la construcción de la paz medioambiental puede mejorar la calidad de las relaciones entre los ciudadanos y el Estado y rejuvenecer el contrato social como requisito previo para una transición sostenible.

Un elemento central de este planteamiento es incluir a las comunidades más afectadas en las estructuras de toma de decisiones y gobernanza, reforzando sus finanzas y capacidades para producir conocimientos y superar la corrupción. Estas comunidades pueden establecer medios de vida dignos consolidando modos de vida que conserven la naturaleza al tiempo que se benefician de forma sostenible de sus recursos. La conexión justa y equitativa de los mercados globales, unida a una mayor coordinación nacional y local, reducirá la brecha entre las regiones remotas y las oportunidades económicas. Aprovechando este momento, Colombia puede redefinir su destino y servir de modelo para las naciones que se enfrentan a retos similares, demostrando que la paz y la protección del medio ambiente pueden ir de la mano.

Referencias

- ABC Colombia 2023: Mecanismos de Autoprotección: Comunidades Rurales y Defensores de Derechos Humanos en Colombia. Obtenido el 20.06.2023. https://www.abccolombia.org.uk/wp-content/uploads/2017/06/ABC-Colombia-Mecanismos_de_autoproteccion_ESP.pdf.
- ACAPS 2023: Colombia. Escalation of Armed Violence in Cauca. Consultado el 16.02.2024. https://www.acaps.org/fileadmin/Data_Product/Main_media/20231207_ACAPS_Colombia_analysis_hub_risk_report_escalation_of_armed_violence_in_Cauca.pdf.
- ACNUR 2025: Operaciones en los países. Enfoque Global. Colombia. Consultado el 31.01.2025. <https://reporting.unhcr.org/operational/operations/colombia>.
- Angel Botero, C. 2023: La paz produce ciencia. Expediciones biológicas en reemplazo de la guerra. Biodiversidad En La Práctica, 5. Consultado el 16.02.2024. <https://revistas.humboldt.org.co/index.php/BEP/article/view/758>.
- Banco Mundial 2021a: Colombia - Multipurpose Cadastre Project. Consultado el 16.02.2024. <http://documents.worldbank.org/curated/en/378461551367139801/Colombia-Multipurpose-Cadastre-Project>.
- Banco Mundial 2021b: Climate Risk Country Colombia. Washington, DC: Grupo del Banco Mundial. Consultado el 16.02.2024. https://climateknowledgeportal.worldbank.org/sites/default/files/2021-07/15520-WB_Colombia%20Country%20Profile-WEB%20%283%29.pdf.
- Banco Mundial 2024: Blueprints for Private Investment in Ecosystem Restoration: Lessons from Case Studies. Washington, D.C.: Grupo del Banco Mundial. Consultado el 16.02.2024. <http://documents.worldbank.org/curated/en/099031424202517999/P1777061820a410fa1a50e1580bed5ade8a>.
- Baptiste, B., M. Pinedo-Vasquez, V.H. Gutierrez-Velez, G.I. Andrade, P. Vieira, L.M. Estupiñán-Suárez, M.C. Londoño W. Laurance y T. M. Lee 2017: Greening peace in Colombia. En: Nature Ecology & Evolution, 1(4), 0102. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41559-017-0102>
- Baum, M. 2019: La paz territorial en Colombia: No sólo un asunto rural. Instituto Leibniz de Investigación para la Paz. Consultado el 25.04.2024 en <https://blog.prif.org/2019/06/27/la-paz-territorial-en-colombia-no-es-solo-una-cuestion-rural>
- Bautista, A.J. 2022: Artemisa: Operación anticampesina vestida de verde. Consultado el 16.02.2024 de <https://www.dejusticia.org/column/artemisa-operacion-anticampesina-vestida-de-verde/>.
- Bruch, C., G. Batra y A. Anand 2024 GEF Programming in Fragile and Conflict-Affected Situations. En: Conflict-Sensitive Conservation. Lessons from the Global Environment Facility. <https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/75315/9781000964288.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Cairo, H., U. Oslender, C.E.P. Suárez, J. Ríos, S. Koopman, V.M. Arango, F.B.R. Muñoz y L.Z. Quintero 2018 "Territorial Peace": The Emergence of a Concept in Colombia's Peace Negotiations. *Geopolitics*, 23(2), 464-488. <https://doi.org/10.1080/14650045.2018.1425110>
- Cárdenas, J., C. Downing y J. Vélez 2021: Reclutamiento por causas climáticas y otras dinámicas del conflicto en Colombia. MEAC Findings Report 8.
- Collins, J. y D.D. Rangel 2022: Colombia's signing of Escazu accord brings hope to land defenders. Al Jazeera. Consultado el 16.02.2024. <https://www.aljazeera.com/news/2022/11/11/colombias-signing-of-escazu-accord-brings-hope-to-land-defenders>.
- CONPES 2017: Lineamientos de política y programa nacional de pago por servicios ambientales para la construcción de paz. Consultado el 16.02.2024. <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%3%B3micos/3886.pdf>.
- Constitución política de Colombia 1991: Consultado el 16.02.2024. <https://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf>.
- Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNUDL) 2024: Consultado el 16.02.2024. https://www.unccd.int/sites/default/files/2022-02/UNCCD_Convention_text_SPA.pdf.
- Corredor-García, J. y F. López Vega 2024: The Logic of "War on Deforestation": A Military Response to Climate Change in the Colombian Amazon. *Alternatives*, 49(4), 325-343. <https://doi.org/10.1177/03043754231181741>.
- Corte Constitucional de Colombia 2023: SENTENCIA SU-545/23. Consultado el 16.02.2024 de <https://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/Comunicado%2052%20-%20Diciembre%206%20de%202023.pdf>.
- Cortés-Cataño, C. F., Y. Foronda-Tobón, J.A. Paez-Ricardo, J.E. Parra-Herrera y M.J. Cañon-Ayala 2024: The effect of environmental variations on the production of the principal agricultural products in Colombia. *PLoS One*. 19(7) doi: 10.1371/journal.pone.0304035.
- Dahl, M.H. 2021: As Colombia's coca economy crashes, new opportunities – and threats – arise. Obtenido el 16.02.2024. <https://news.mongabay.com/2023/11/as-colombias-coca-economy-crashes-new-opportunities-and-threats-arise/>.
- Davalos, L.M., E. Davalos, J. Holmes, C. Tucker y D. Armenteras 2021: Forests, coca, and conflict: Grass frontier dynamics and deforestation in the Amazon-Andes, *Journal of Illicit Economies and Development (JIED)*, LSE Press, London, Vol. 3, Iss. 1, pp. 74-96, <https://doi.org/10.31389/jied.87>.
- De las Quinchas, S. 2018: Colombia's national survey of its biodiversity is ambitious. *The Economist*. Consultado el 16.02.2024 <https://www.economist.com/science-and-technology/2018/05/17/colombias-national-survey-of-its-biodiversity-is-ambitious>.
- Defensoría del Pueblo 2021: Defensoría del Pueblo entrega a la CIDH balance sobre la situación de derechos humanos en el marco de la protesta. Consultado el 03.09.2024. <https://www.defensoria.gov.co/-/defensor%3%ADa-del-pueblo-entrega-a-la-cidh-balance-sobre-la-situaci%C3%B3n-de-derechos-humanos-en-el-marco-de-la-protesta>.
- Defensoría del Pueblo Colombia 2023: En Colombia, entre enero y noviembre de este año fueron asesinados 163 líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos. Consultado el 16.02.2024 <https://www.defensoria.gov.co/web/guest/-/en-colombia-entre-enero-y-noviembre-de-este-a%C3%B1o-fueron-asesinados-163-l%C3%ADeres-lideresas-y-personas-defensoras-de-derechos>

Construcción de Paz Ambiental en Colombia

humanos?redirect=%2F#:~:text=Comunicado%20470%2F%20Bogot%C3%A1%2C%2021%20de,de%20la%20Defensor%C3%ADa%20de%20Pu
eblo.

Deforestation Free Finance, s.f.: Due diligence towards Deforestation-Free Finance. Consultado el 16.02.2024 en <https://guidance.globalcanopy.org/further-guidance/due-diligence-towards-deforestation-free-finance/>.

Ecosystem for Peace 2021: Conserving Biodiversity and Peacebuilding in Colombia: Solving socio-environmental conflicts in Protected Areas through peaceful means enhances biodiversity conservation and peacebuilding Consultado el 16.02.2024. <https://www.ecosystemforpeace.org/compendium/conserving-biodiversity-and-building-peace-in-colombia>.

El Espectador 2024: Catatumbo: 27 proyectos de mesa de paz con disidencia reciben apoyo del gobernador. Consultado el 17.01.2025. <https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/pezo-y-disidencia-de-calarca-gobernador-de-norte-de-santander-respaldo-proyectos-de-paz/>.

Eufemia, L., M. Bonatti, A. Castro-Nuñez, M. Lana, H. Morales y S. Sieber 2019: Colombia's inadequate environmental goals. *Science*, 364(6439), pp. 444-445. DOI: 10.1126/science.aax3494

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 2023: European Drug Report 2023: Trends and Developments. Consultado el 25.04.2024. https://www.emcdda.europa.eu/publications/european-drug-report/2023_en.

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 2023: Wastewater analysis and drugs – a European multi-city study. Consultado el 16.02.2024. https://www.emcdda.europa.eu/publications/html/pods/waste-water-analysis_en#section2.

FCDS 2023: ¡Bajó la deforestación en las zonas de forestería comunitaria de Guaviare y Caquetá! Consultado el 16.02.2024. <https://fcds.org.co/bajo-deforestacion-en-zonas-de-foresteria-comunitaria/>.

Figueroa-Arango, C. 2020: Guía para la integración de las Soluciones Basadas en la Naturaleza en la planificación urbana. Primera aproximación para Colombia. Berlín: Alexander von Humboldt Stiftung, Ecologic Institute, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Consultado el 16.02.2024. https://www.ecologic.eu/sites/default/files/publication/2020/figueroa-20guia-planificacion-urbana-b33_s_c5-1final_en-baja.pdf.

FIP 2020: Cultivos ilícitos y áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales: Por qué ha sido difícil avanzar y cuáles son las opciones. Bogotá DC, Colombia. Consultado el 16.02.2024. http://ideaspaz.org/media/website/FIP_NE_PNNCultivosilicitos_web_Corregido_Final.pdf.

FIP, adelphi y WWF 2021: A Dangerous Climate: Deforestation, climate change and violence against environmental defenders in the Colombian Amazon. WWF Germany: Berlín. Recuperado el 16.02.2024. <https://climate-diplomacy.org/sites/default/files/2021-09/A%20Dangerous%20Climate.pdf>.

Freedom House 2022: Freedom in the World 2022 – Colombia. Consultado el 16.02.2024. <https://freedomhouse.org/country/colombia/freedom-world/2022>.

Fundación Conflict Responses CORE y Akörde 2024: Disidencias por dentro - El podcast. Consultado el 12.02.2025. <https://www.conflictresponses.org/disidencias-por-dentro-el-podcast/>.

Galvis-Hernández, M. y P.M. Ungar (Eds.) 2021: Páramos Colombia: biodiversidad y gestión. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, Colombia. Consultado el 16.02.2024.

GEF 2017: Colombia: Connectivity and Biodiversity Conservation in the Colombian Amazon. Consultado el 16.02.2024. <https://www.thegef.org/projects-operations/projects/9663>.

GEF y PNUD 2021: Participatory Conservation and Peacebuilding in Dry Forest as Production Landscape. GOOD PRACTICE BRIEFS-2021/3. Consultado el 12.02.2025. https://www.thegef.org/sites/default/files/publications/GEF_GoodPracticesBriefs_Colombia_CRA.pdf.

Global Witness 2020: Informe de Global Witness revela que Colombia lidera cifras de asesinados contra personas defensoras en 2019. Consultado el 16.02.2024. <https://www.globalwitness.org/en/blog/colombia-leads-number-killings-2019-global-witness-reports/>.

Gobierno de Colombia 1993: Ley 99 de 1993. Consultado el 16.02.2024. https://planeacion.boyaca.gov.co/descargas/Normatividad_Pots/ley%2099%201993.pdf.

Gobierno de Colombia 1997: Ley 388 de 1997. Consultado el 16.02.2024. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=339>.

Gobierno de Colombia 1998: Decreto 879 de 1998. Consultado el 16.02.2024. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1369>.

Gobierno de Colombia 2010: Decreto 2372 de 2010. Consultado el 16.02.2024. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=39961>.

Gobierno de Colombia 2018: Decreto 660 de 2018. Consultado el 16.02.2024. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=85922>.

Goodman, J. 2023: Biden administration suspends satellite monitoring of Colombian coca crops as cocaine surges. Consultado el 16.02.2024. <https://apnews.com/article/colombia-cocaine-satellite-monitoring-biden-petro-5662a2401233e095898e1c46149c257f>.

Granada Calderón, A.A. 2023: Tourism in Colombia Sails Towards Peace. Destination Stewardship Report, Spring 2023 (Vol. 3, Issue 3), Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Consultado el 16.02.2024. <https://www.gstc.org/tourism-in-colombia-sails-towards-peace/>.

Hachmann, S., K. Löhr, H. Morales Muñoz, L. Eufemia, S. Sieber y M. Bonatti 2023: Conceptualizing Community-based Environmental Peacebuilding in Cesar, Colombia, Colombia. *Human Ecology*, 51, pp. 1-15. <https://doi.org/10.1007/s10745-023-00399-9>.

Construcción de Paz Ambiental en Colombia

- Hein, J., C. Del Cairo, D.O. Gallego, T.V. Gutiérrez, J.S. Velez y J.C.R. de Francisco 2020: A political ecology of green territorialization: frontier expansion and conservation in the Colombian Amazon. *DIE ERDE – Journal of the Geographical Society of Berlin*, 151(1), 37–57. <https://doi.org/10.12854/erde-2020-456>
- Ide, T., C. Bruch, A. Carius, K. Conca, G.D. Dabelko, R. Matthew y E. Weinthal 2021: The past and future(s) of environmental peacebuilding. *International Affairs*. 97(1), pp.1-16. DOI:[10.1093/ia/iiaa177](https://doi.org/10.1093/ia/iiaa177).
- IDEAM MADS 2024: Monitoreo de la superficie de bosque y la deforestación en Colombia - 2023 (resumen de resultados). Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Consultado el 21.01.2025. <https://insightcrime.org/wp-content/uploads/2024/07/MONITOREO-DE-LA-SUPERFICIE-DE-BOSQUE-Y-LA-DEFORESTACION-EN-COLOMBIA-2023-RESUMEN-DE-RESULTADOS.pdf>.
- IDEAM s.f.: IDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Consultado el 16.02.2024. <http://www.ideam.gov.co/>.
- IDEAM, PNUD, MADS, DNP y CANCELLERÍA 2017: Análisis de Vulnerabilidad y Riesgos por Cambio Climático en Colombia. Tercera comunicación nacional de cambio climático. Bogotá D.C., Colombia.
- Iniciativa Cacao Bosque y Paz 2022: Informe 2018-2022. Consultado el 16.02.2024. <https://worldcocoaoundation.org/storage/files/2-reporte-cbp-ingles.pdf>.
- International Crisis Group 2020: Líderes bajo fuego: Defending Colombia's Front Line of Peace. Consultado el 16.02.2024. <https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/andes/colombia/82-leaders-under-fire-defending-colombias-front-line-peace>.
- International Crisis Group 2022: Atrapados por el conflicto: cómo reformar la estrategia militar para salvar vidas en Colombia. Consultado el 16.02.2024. <https://www.crisisgroup.org/es/es/latin-america-caribbean/andes/colombia/95-trapped-conflict-reforming-military-strategy-save-lives>.
- International Crisis Group 2023: Crímenes contra el clima: violencia y deforestación en la Amazonía. Consultado el 16.02.2024. <https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/brazil-colombia/crimes-against-climate-violence-and-deforestation-amazon>.
- International Crisis Group 2024: The Unsolved Crime in “Total Peace”: Dealing with Colombia’s Gaitanistas. Consultado el 24.04.2024. <https://www.crisisgroup.org/sites/default/files/2024-03/105-colombia-gaitanistas.pdf>.
- IPCC, 2021: Cambio climático 2021: Bases físicas. Contribución del Grupo de Trabajo I al Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu y B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, NY, EE.UU., DOI: 10.1017/9781009157896.001.
- IPCC, 2023: Cambio climático 2023: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de Trabajo I, II y III al Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [Equipo principal de redacción: H. Lee y J. Romero (eds.)]. IPCC, Ginebra, Suiza, DOI: 10.59327/IPCC/AR6-9789291691647
- IRENA y OIT 2022: Renewable energy and jobs: Annual review 2022, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi y Organización Internacional del Trabajo, Ginebra. Consultado el 16.02.2024. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_856649.pdf.
- Irwin, A. 2023: Colombia’s ecological treasure trove. *Nature*. Consultado el 16.02.2024. <https://www.nature.com/immersive/d41586-023-02300-6/index.html>.
- JEP 2023a: La JEP acredita como víctima al río Cauca en el Caso 05. Consultado el 16.02.2024. <https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/-la-jep-acredita-como-victima-al-rio-cauca-en-el-caso-05.aspx>.
- JEP 2023b: La JEP lleva al debate público e internacional los crímenes contra la Naturaleza y el Territorio en el conflicto. Consultado el 25.04.2024. <https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/-la-jep-lleva-al-debate-publico-e-internacional-los-crimenes-contra-la-naturaleza-y-el-territorio-en-el-conflicto.aspx>.
- JEP 2023c: Análisis de la situación de derechos humanos y seguridad en Colombia: impactos de los ceces al fuego y la paz total. Consultado el 16.02.2024. <https://www.jep.gov.co/JEP/documents1/Informe%20An%C3%A1lisis%20de%20la%20situaci%C3%B3n%20de%20Derechos%20Humanos%20seguridad%20en%20Colombia%20impactos%20de%20los%20ceces%20al%20fuego%20y%20la%20Paz%20Total.pdf#search=situacion%20derechos%20humanos>.
- Jiménez Gutiérrez, K.P. 2021: Glifosato. Erradicador de ambiente, salud y cultivos ilícitos. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia. Consultado el 16.02.2024. <https://medioambiente.uexternado.edu.co/glifosato-erradicador-de-ambiente-salud-y-cultivos-ilicitos/>.
- Johnson, K. 2024: ¿Dos años para un nuevo camino? En: La Paz Total. Bogotá: Fundación Conflict Responses CORE. Consultado el 16.02.2024. <https://www.conflictresponses.org/la-paz-total-dos-anos-para-un-nuevo-camino/>.
- Johnson, M.F., L.A. Rodríguez y M.Q. Hoyos 2021: Intrastate environmental peacebuilding: A review of the literatura. *World Development* 137, <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105150>
- Krampe, F., F. Hegazi y S.D. Van Deveer 2021: Sustaining peace through better resource governance: Three potential mechanisms for environmental peacebuilding. *World Development*, 144, <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105508>
- Krause, T., N. Clerici, J.M. López, P.A. Sánchez, S. Valencia, J. Esguerra-Rezk y K. Van Dexter 2022: A new war on nature and people: taking stock of the Colombian peace agreement. *Global Sustainability*, 5, doi:10.1017/sus.2022.15
- La Silla Vacía 2023: Corte constitucional ordena al gobierno que cumpla con la sustitución de cultivos. Consultado el 16.02.2024 de <https://www.lasillavacia.com/en-vivo/corte-constitucional-ordena-al-gobierno-que-cumpla-con-la-sustitucion-de-cultivos/>.

Construcción de Paz Ambiental en Colombia

- León, A. 2022: Más hectáreas de coca: el fracaso final de la lucha contra las drogas de Duque. La Silla Vacía. Consultado el 16.02.2024 <https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/mas-hectareas-de-coca-el-fracaso-final-de-la-lucha-contra-las-drogas-de-duque/>.
- Llanes, L.M. 2022: The killing of social leaders: An unintended effect of Colombia's illicit crop substitution program, *International Journal of Drug Policy*, Volumen 101, <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2021.103550>.
- Löhr, K.; B. Aruqaj; D. Baumert; M. Bonatti; M. Brüntrup; C. Bunn; A. Castro-Nunez; G. Chavez-Miguel; M.L. Del Rio; S. Hachmann; et al. 2021: Social Cohesion as the Missing Link between Natural Resource Management and Peacebuilding: Lessons from Cocoa Production in Côte d'Ivoire and Colombia. *Sustainability*, 13, 13002. <https://doi.org/10.3390/su132313002>
- MADS - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Colombia 2021: Plan de zonificación ambiental objeto del punto 1.1.10 del acuerdo final de paz. Consultado el 16.02.2024. <https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/02/Resolucion-1608-de-2021-Anexo-Plan-de-Zonificacion-Ambiental.pdf>.
- MADS - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 2019: Colombia, el segundo país más biodiverso del mundo, celebra el Día Mundial de la Biodiversidad. Recuperado el 16.02.2024. <https://www.minambiente.gov.co/colombia-el-segundo-pais-mas-biodiverso-del-mundo-celebra-el-dia-mundial-de-la-biodiversidad/>.
- MADS - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Colombia 2025: Colombia avanza en la lucha contra la deforestación con una reducción acumulada del 40%. Consultado el 24.04.2025. <https://www.minambiente.gov.co/colombia-avanza-en-la-lucha-contra-la-deforestacion-con-una-reduccion-acumulada-del-40/>.
- Marín, L., M.A. Vélez, C. Pinzón y P. Zuleta 2023: Comentario de política "Sembrando Vida, Desterramos el Narcotráfico - Política Nacional de Drogas (2023-2033)" Consultado 25.04.2024 de <https://cesed.uniandes.edu.co/comentario-de-politica-a-sembrando-vida-desterramos-el-narcotrafico-politica-nacional-de-drogas-2023-2033/>.
- Mercado, A. J. 2023: Revive la violencia (3). La gobernanza criminal del Clan del Golfo en los Montes de María. Razón Pública. Consultado el 16.02.2024 de <https://razonpublica.com/revive-la-violencia-3-la-gobernanza-criminal-del-clan-del-golfo-los-montes-maria/>.
- Ministerio de Defensa de Colombia 2019: Informe Campaña Artemisa. Consultado el 16.02.2024. <https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Prensa/Documentos/AvanceArtemisa18042022.pdf>.
- Monsalve S., M. M. 2022: Kilos de coca enterrados: los campesinos del municipio con más cultivos de Colombia no tienen quien les compre. El País. Consultado el 25.04.2024 de <https://elpais.com/america-futura/2022-10-13/kilos-de-coca-enterrados-los-campesinos-del-municipio-con-mas-cultivos-de-colombia-no-tienen-quien-les-compre.html#>.
- Morales Muñoz, H. y J. Gorricho 2021: Conserving Biodiversity and Peacebuilding in Colombia: Solving socio-environmental conflicts in Protected Areas through peaceful means enhances biodiversity conservation and peacebuilding. Consultado el 16.02.2024. <https://www.ecosystemforpeace.org/compendium/conserving-biodiversity-and-building-peace-in-colombia>
- Morales Muñoz, H., A. Bailey, K. Löhr, G. Caroli, M.E.J. Villarino, A.M. Lobo Guerrero, M. Bonatti, S. Siebert, A. Castro-Nuñez 2022: Co-benefits through coordination of climate action and peacebuilding: a system dynamics model. *Co-Benefits Through Coordination of Climate Action and Peacebuilding: A System Dynamics Model. Journal of Peacebuilding & Development*, 17(3), 304-323. <https://doi.org/10.1177/15423166221132149>
- Morales Muñoz, H., K. Löhr, M. Bonatti, L. Eufemia y S. Sieber 2021: Assessing impacts of environmental peacebuilding in Caquetá, Colombia: a multistakeholder perspective. *International Affairs*, 97(1), pp. 179-199 DOI:10.1093/ia/iiaa175.
- Morales Muñoz, H., L. Martens, K. Löhr, M. Bonatti, J. Chara, L. Perez, S. Sieber y A. Castro-Nuñez 2023: Integrating climate mitigation and environmental peacebuilding objectives through sustainable land use systems: Theory of change and indicators. *PLoS Climate* 2(5): e0000075. <https://doi.org/10.1371/journal.pclm.0000075>.
- Murillo-Sandoval, P.J., K. Van Dexter, J. Van Den Hoek, D. Wrathall y R. Kennedy 2020: The end of gunpoint conservation: forest disturbance after the Colombian peace agreement. *Environmental Research Letters*, 15(3), DOI:10.1088/1748-9326/ab6ae3
- NbS Initiative 2024: Mejorar la seguridad alimentaria mediante la restauración del paisaje forestal. Consultado el 16.02.2024.
- Observatorio de Tierras 2020: Erradicación forzada: una política que mata. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. Consultado el 16.02.2024. <https://www.observatoriode tierras.org/erradicacion-forzada-politica-que-mata/>.
- OCHA s.f: Colombia Monitor Humanitario. Consultado el 16.02.2024. <https://monitor.unocha.org/colombia>.
- ONUDD 2022: Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2021. Consultado el 16.02.2024. https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/INFORME_MONITOREO_COL_2021.pdf.
- ONUDD 2023: World Drug Report 2023. Chapter 4. The Nexus Between Drugs and Crimes that Affect the Environment and Convergent Crime in the Amazon Basin. Recuperado el 16.02.2024 de https://www.unodc.org/res/WDR-2023/WDR23_B3_CH4_Amazon.pdf.
- Pallaccia, M. 2023: Ex-FARC members aim to restore 1 million native trees in the Colombian Amazon. Mongabay. Consultado el 16.02.2024. <https://news.mongabay.com/2023/11/ex-farc-members-aim-to-restore-1-million-native-trees-in-the-colombian-amazon/#:~:text=Language-.Ex%2DFARC%20members%20aim%20to%20restore%201%20million,trees%20in%20the%20Colombian%20Amazon&text=Former%20fighters%20in%20the%20Revolutionary,through%20a%20cooperative%20called%20Comuccom>
- Presidencia de la República 2023: Gobierno del Cambio presentó la nueva Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana para la protección de la vida. Consultado el 16.02.2024. <https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Gobierno-del-Cambio-presento-la-nueva-Politica-de-Seguridad-Defensa-y-Convi-230425.aspx#:~:text=El%20Ministro%20de%20Defensa%2C%20Iv%C3%A1n%20Vel%C3%A1squez%2C%20present%C3%B3%20este,sociedad%20de%20las%20violencias%20generadas%20por%20el%20multicrimen>
- Red de mujeres indígenas sobre la biodiversidad s.f.: Nuestra Historia. Consultado el 16.02.2025. <https://rmib-lac.org/1997-2/>.

Construcción de Paz Ambiental en Colombia

- República de Colombia 2016: Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Consultado el 16.02.2024. https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Fotos2016/12.11_1.2016nuevoacuerdofinal.pdf.
- República de Colombia 2018: Ruta futuro: Política integral para enfrentar el problema de las drogas. Informe ejecutivo. Consultado el 04.06.2024. https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/ODC/Publicaciones/Publicaciones/Resumen_Ejecutivo_Ruta_Futuro.pdf?csf=1&e=T49B2v.
- República de Colombia 2022a: Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Consultado el 16.02.2024. <https://www.dnp.gov.co/plan-nacional-desarrollo/pnd-2022-2026>.
- República de Colombia 2022b: Ley 2272/2022, de 4 de noviembre o "Ley de Paz Total". "Ley que modifica, adiciona y prorroga la Ley 418 de 1997 y en que se define la política de paz del Estado, se crea el Servicio social para la paz y se dictan otras disposiciones".
- República de Colombia 2022c: Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Consultado el 06.06.2024. <https://portalparalapaz.gov.co/programa-de-sustitucion-voluntaria-de-cultivos-ilicitos/>.
- República de Colombia 2023: Sembrando Vida, Desterramos el Narcotráfico - Política Nacional de Drogas (2023-2033). <https://www.minjusticia.gov.co/Sala-de-prensa/Documents/Pol%C3%ADtica%20Nacional%20de%20Drogas%202023-2033%20%27Sembrando%20vida,%20desterramos%20el%20narcotr%C3%A1fico%27.pdf>.
- Ríos Monroy, J. 2024: Calarcá, jefe de las disidencias de FARC, asegura que prohibirá la tala de árboles. Consultado el 17.01.2025. <https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/jefe-de-disidencias-de-las-farc-asegura-que-prohibira-la-tala-de-arboles-y-habla-de-sanciones/>.
- Salazar A., A. Sanchez, J. S. Dukes, J. F. Salazar, N. Clerici, E. Lasso, S. J. Sánchez-Pacheco, Á. M. Rendón, J. C. Villegas, C. A. Sierra, G. Poveda, B. Quesada, M. R. Uribe, S. Rodríguez-Buriticá, P. Ungar, P. Pulido-Santacruz, N. Ruiz-Morato y P. A. Arias, 2022. Peace and the environment at the crossroads: Elections in a conflict-troubled biodiversity hotspot. *Environmental Science & Policy*, Vol. 135, pp. 77-85. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2022.04.013>.
- Schmelzer, N. y H. Morales Muñoz 2024: Harnessing the Winds of Change: What Colombia and Germany can learn from each other's green energy transition. Consultado el 23.07.2024 de <https://climate-diplomacy.org/magazine/environment/harnessing-winds-change-what-colombia-and-germany-can-learn-each-others-green>.
- Schmid, D. y M.C. Vlaskamp 2024: Public preferences of environmental peacebuilding: The case of forest conservation projects in Colombia. *Environment and Security*, 2(4), 568-598. <https://doi.org/10.1177/27538796241241581>.
- Sevillano-Ríos, C.S., A.D. Rodewald y L.V. Morales 2020: Alpine Birds of South America. En: Goldstein, M. I. y DellaSala, D. A. (eds), *Encyclopedia of the World's Biomes*, pp. 492-504 Amsterdam: Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-409548-9.11806-8>.
- Shuldiner, H. 2025 Colombia's Peace Efforts Spark Criminal Disputes and Divisions. *Insight Crime*. Consultado el 17.01.2025. <https://insightcrime.org/news/criminal-disputes-divisions-undermine-colombias-peace-efforts/>.
- Taylor, L. 2023: Colombia deforestation plummets as peace efforts focus on rainforest. *The Guardian*. Consultado el 16.02.2024. <https://www.theguardian.com/world/2023/jul/12/colombia-deforestation-amazon-rainforest-peace>.
- Trejos Rosero, L. F., A. F. Aponte González y C. Larratt-Smith 2025. Hasta que llegó la tempestad: la nueva guerra en el Catatumbo. *La Silla Vacía*. Consultado el 20.01.2025. <https://www.lasillavacia.com/red-de-expertos/red-de-la-paz/hasta-que-llego-la-tempestad-la-nueva-guerra-en-el-catatumbo/>.
- USAID 2023: Colombia Climate Change Country Profile. Consultado el 16.02.2024. <https://www.usaid.gov/sites/default/files/2023-11/2023-USAID-Colombia-Climate-Change-Country-Profile.pdf>
- Valenzuela, P. y S. Caicedo 2018: Environmental peacebuilding in post-conflict Colombia. En Swain, A. y Öjendal, J. (eds.) 2018: *Routledge Handbook of Environmental Conflict and Peacebuilding*. Routledge, London & New York. ISBN: 978-1-138-20252-8, pp. 245-253.
- Vanelli, F. y D. Ochoa Peralta 2022: Territorial peace: land governance and sustainable peacebuilding. *International Journal of Urban Sustainable Development*, 14:1, 368-387, DOI: 10.1080/19463138.2022.2054814.
- Vía Campesina 2020: El abandono del PNIS y la reanudación de la "guerra contra las drogas" en Colombia. Consultado el 16.02.2024. <https://viacampesina.org/es/el-abandono-del-pnis-y-la-retoma-de-la-%c2%a8guerra-contra-las-drogas%c2%a8-en-colombia/>.
- Werner, M. 2024: Biodiversidades situadas y mundos múltiples: la defensa de los conocimientos tradicionales desde la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad en Colombia. Consultado el 16.02.2024. https://www.academia.edu/114352805/Biodiversidades_situadas_y_mundos_m%C3%BAltiples_la_defensa_de_los_conocimientos_tradicionale_s_desde_la_Red_de_Mujeres_Ind%C3%ADgenas_sobre_Biodiversidad_en_Colombia.
- White House 2020: Remarks by President Trump and President Duque of Colombia before bilateral meeting. Consultado el 16.02.2024. <https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-president-duque-colombia-bilateral-meeting-2/>
- Wong, C. 2022: Climate Finance and the Peace Dividend: Articulating the Co-benefits Argument. En: L. Schalatek & R. Watson (eds.), *The Political Economy of Climate Finance: Lessons from International Development*, pp. 205-231. Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-80702-3_10

